

decenas de bancos y compañías aseguradoras a las que se pretendía mejorar encauzando su inversión mediante una dirección integrada. Aunque estas medidas encontraron una fuerte oposición entre los sectores de la derecha, al final fueron aprobadas por el Parlamento en 1982 al mismo tiempo que las leyes Aroux sobre los derechos de los trabajadores en las que se concedía a los sindicatos mayor acceso a la información en las grandes empresas y la formalización de los convenios anuales de negociación.

Otra de las medidas más importantes del programa fue la reforma de la Administración Pública a través de la descentralización, reforma que estaba llamada a convertirse en uno de los cambios institucionales más importantes que podían afectar al tradicional centralismo administrativo francés. La derecha en sus últimos mandatos, y sobre todo en la época de Giscard, había introducido ya una serie de reformas en ese sentido, como la creación de algunos Consejos Regionales -el de París, Córcega y la Isla de Francia- o la creación de los Consejos Regionales de carácter económico que tenían la misión de asesorar al DATAR (Delegación para la Ordenación del Territorio y la Acción Regional) en la planificación o la política de subvenciones. Pero estos consejos nunca fueron más allá de una actuación meramente administrativa sin entrar, por tanto, en cualquier veleidad descentralizadora del poder político. Desde ese punto de vista la política de la izquierda era mucho más ambiciosa y pretendía una mayor descentralización, con el fin de extender la participación democrática y la representatividad territorial. Además algunos de sus firmes defensores, como Mauroy o Defferre, antes de llegar a ser miembros del gobierno habían sido figuras importantes

dentro del partido precisamente por su representatividad local.

La ley sobre descentralización llamada también "Ley Defferre" se aprobó a comienzos de 1982 y esta norma cambió sustancialmente la forma de gobernar en la administración local francesa como consecuencia de sus tres presupuestos más importantes. En primer lugar, estableció las elecciones directas para elegir los consejos regionales, la primera de las cuales debería celebrarse en marzo de 1986; en segundo lugar, disminuyó el papel del Prefecto (que ahora se le llamaría Comisario de la República) a nivel departamental y regional reemplazándole como jefe ejecutivo del Consejo por un miembro elegido democráticamente y privándole de los poderes de supervisión directa; y, por último, a los consejos departamentales y regionales se les otorgaba mayor autonomía en las decisiones políticas y se les prometían más poderes para aumentar la financiación local (25).

Junto al objetivo de evolucionar hacia una sociedad más abierta y democrática se trataba de fomentar la expansión económica y la creación de empleo. Para ello el gobierno se aprestó a imponer una sustancial redistribución de la renta con el fin de romper con las grandes desigualdades y ampliar y profundizar las medidas de bienestar social. Estas medidas fueron las que más pronto se pusieron en práctica con el fin de que buena parte de la población notase inmediatamente los beneficios del cambio político. De esta manera se aumentaron el salario mínimo, las pensiones y el periodo de vacaciones pagadas, hubo mejoras en el tratamiento de los trabajadores inmigrantes, se redujo la semana laboral a 39 horas y la edad de jubilación voluntaria.

Con estas medidas Mitterrand trataba de obtener el control de la economía y por tanto los mecanismos fundamentales para su relanzamiento. Al mismo tiempo extendía los derechos de los trabajadores y daba un impulso a la democratización del país a través de la descentralización territorial y otras medidas de alcance civil, como la abolición de la pena de muerte, la mejora del sistema de ayuda legal, etc. que eran propias de una cultura política de izquierdas.

Puesto que contaba con mayoría parlamentaria trazó un proyecto de recuperación a corto plazo a través de un fuerte estímulo en la demanda interna que repercutiría en la productividad y por tanto en el aumento del PNB que a su vez frenaría el desempleo. A este tipo de mecanismo económico los expertos le han llamado "keynesianismo en un sólo país" puesto que no tiene demasiado en cuenta los factores externos de la economía internacional, que ya a principios de los años 80 era omnipresente en todos los países europeos. Esta política consiste en disminuir las restricciones del crecimiento de la masa monetaria de tal manera que estimulen el consumo. Además se relanzó el gasto público con la inversión en la industria pública y se crearon más de 150000 puestos de trabajo en este sector, y por último la empresa privada tuvo acceso a créditos con bajo interés. Aunque este gasto se financió con un aumento de los impuestos sobre determinados productos que no eran de necesidad primaria y sobre los sectores con mayores ingresos, no obstante el déficit del sector público se dobló en poco tiempo, y la esperanza de que estas medidas beneficiaran a la industria pública y privada y generaran una expansión de los ingresos con la subsiguiente creación de puestos de trabajo no se vió cumplida.

La izquierda no había valorado suficientemente la crisis económica internacional y como consecuencia los problemas a que se enfrentaba la estructura productiva empresarial francesa. Los socialistas, como los expertos del Fondo Monetario Internacional o los de la Comunidad Europea, esperaban una inminente recuperación mundial y se lanzaron a una política de expansión esperando que sus vecinos les acompañasen en esta estrategia europea. Pero los otros países aplicaron una política neomonetarista al tiempo que el coste de las medidas expansionistas galas llegó a representar el 1.7 por cien del PNB en 1981, del que el 80 por cien fue financiado por el Estado (26). Si a esto se une la escasa colaboración de la patronal, que se oponía al programa económico del gobierno por su política de nacionalizaciones, la subida de los impuestos que gravaban los costes salariales y por tanto la competitividad, así como la fuerte competencia del Sudeste Asiático en el comercio internacional y la aparición de las nuevas tecnologías que imponían una reestructuración de las fuerzas laborales, el resultado fue una caída sustancial en el comercio exterior, un aumento del paro que se acercaba ya a los dos millones y de la tasa de inflación que se disparó hasta el 15 por cien favorecida por los aumentos salariales. El gobierno trató de controlar esta situación aplicando medidas restrictivas al gasto público, congelando los salarios y permitiendo la devaluación del franco. A pesar de ello la situación económica continuó deteriorándose. Durante 1982 descendió la inversión industrial y declinó la producción forzando a más de 20000 empresas a la quiebra, las industrias nacionalizadas entraron en déficit y el paro aumentó hasta sobrepasar los dos millones, lo que sembró la inquietud entre la clase

trabajadora y los sindicatos. El gobierno respondió con una segunda devaluación del franco, la estabilización de los precios, la congelación de los salarios y recortes en el gasto público hasta el verano de 1982 (27). Se trataba de aplicar un paquete de medidas elaborado por el ministro de Economía, Jacques Delors, con el pleno apoyo del Presidente que no deseaba un desequilibrio en el déficit que superase el 3 por cien del PNB.

Aquí comenzaron las disensiones internas del gabinete sobre todo por parte de aquellos ministerios que se sentían perjudicados con la restricción presupuestaria y además pensaban que la política expansionista en lugar de ser cortada debería, por el contrario, aumentar con el fin de precipitar todavía más la demanda interna, aun a costa de políticas proteccionistas, para evitar el desequilibrio de la balanza de pagos. Era el caso, por ejemplo, del Ministerio de Servicios Sociales que encabezaba Madame Questiaux quien presentó su dimisión por no aceptar las medidas de austeridad.

En estas condiciones se llegó a las elecciones municipales de marzo de 1983 que fueron las primeras después de 1981 en las que participó todo el electorado y tuvieron lugar en un ambiente extremadamente desfavorable para la izquierda. Los sondeos habían pronosticado la baja de los socialistas y los resultados demostraron efectivamente esta tendencia. A escala nacional la izquierda no alcanzó el 40 por cien de los votos mientras la derecha se situaba casi en el 51 por cien llegando a dominar la Francia urbana hasta un punto sorprendente. La izquierda quedó por delante tan solo en el grupo de municipios de 30.000 a 50000 habitantes. En las ciudades más grandes la izquierda fue

reducida prácticamente a los resultados que había obtenido en los municipios más pequeños, y las tres ciudades más grandes, París, Lyon y Marsella, no fueron una excepción (28).

La discrepancia sobre la política económica que venía manifestándose entre las corrientes internas del partido estalló y los resultados electorales dieron la razón a quienes pedían una política de mayores ajustes que desembocó en una remodelación del gabinete ministerial; J.P. Chevénement fue sustituido como ministro de Industria por L. Fabius y J. Delors, ministro de Economía y Finanzas, se encargó también del Presupuesto. En total la remodelación afectó a diez carteras ministeriales y supuso el final del período expansionista de la política de los socialistas.

La congelación de los salarios, el saneamiento de la balanza comercial y en general todo el programa deflacionista que entró en vigor inmediatamente repercutió en las condiciones de vida de la clase trabajadora, y en la primera mitad de 1984 se convocaron huelgas y aumentó el descontento, lo que repercutió considerablemente en los resultados de las elecciones europeas de 1984, donde se manifestó más claramente el desequilibrio entre izquierda y derecha. La izquierda cayó por debajo del 40 por cien mientras la derecha alcanzaba más del 57 por cien de los votos. Estas elecciones supusieron también una nueva caída del Partido Comunista que no alcanzó más que el 11 por cien, una cuota igual a la que alcanzó espectacularmente la extrema derecha (29). Inmediatamente después, con motivo del cambio de Primer Ministro -Fabius sustituyó a Mauroy- y de los resultados electorales, los comunistas abandonaron el gobierno por temor a ser identificados con una política

reformista y restrictiva que favorecía a las fuerzas del capital, al tiempo que, con el aumento del paro y los cortes presupuestarios en las políticas de bienestar, perjudicaba a los sectores más desfavorecidos (30).

Este cambio de estrategia socialista fue ratificado por el congreso de Toulouse en octubre de 1985, lo cual demostró que la hora del Bad Godesberg para el Partido Socialista francés había llegado, y casi todas las corrientes aceptaron la política adoptada por Mitterrand en 1983, dando la razón a las críticas y presupuestos que con anterioridad había defendido la corriente de Rocard, cuyas mociones recibieron en este congreso un 28 por cien de los votos.

El nuevo gobierno de Fabius trató de comerle el terreno a la corriente rocardiana desplazándose hacia el centro y proyectando una imagen diferente a la del gabinete Mauroy. Dio prioridad a la lucha contra la inflación e introdujo un conjunto de medidas presupuestarias con la finalidad de eliminar pérdidas en el sector público. Además puso especial atención en la modernización industrial, en la readaptación profesional y tecnológica y empujó a través de una serie de nuevas iniciativas económicas el mercado libre que refleja el pensamiento socialdemócrata. Esto suponía una disminución de los impuestos a las empresas para los ejercicios de 1985 y 86; la reducción de la interferencia estatal en la planificación y dirección de las industrias nacionalizadas; la supresión de medidas que regulaban algunos precios industriales y de consumo; la flexibilización en los controles del intercambio comercial, etc. Estas medidas reformistas tuvieron resultados tangibles inmediatos; la inflación descendió al 5 por cien, el déficit comercial también se redujo sustancialmente y el presupuestario se mantuvo al

nivel del 3 por cien del PNB; se estabilizó la paridad de la moneda; los tipos de interés disminuyeron poco a poco hasta llegar al 10 por cien; las empresas nacionalizadas volvieron a tener beneficios y el sector privado reinició sus inversiones. Sólo el nivel de desempleo continuó creciendo hasta alcanzar los dos millones y medio de parados a finales de 1984, debido a la renovación de las industrias que reemplazaron mano de obra por tecnología moderna y automatizada, y a la competencia internacional (31).

El gobierno socialista esperaba que todos estos cambios diesen resultado a corto plazo a fin de poder afrontar las elecciones a la Asamblea Nacional en 1986 con cierta tranquilidad. Pero la lentitud de los resultados, el agravamiento del paro, que tenía una incidencia especial entre la población juvenil y el asunto del Rainbow Warrior -la agresión a los grupos ecologistas con implicaciones en el Ministerio de Defensa- llevaron la imagen del gobierno y del Presidente Mitterrand al punto más bajo de su popularidad. La cuestión ahora estribaba en prepararse para la campaña electoral a fin de no sufrir una derrota que hiciese naufragar todo el proyecto socialista.

En el partido se perfilaron diversas opciones estratégicas pero las que tenían mayores probabilidades de ganar por su capacidad de arrastre eran la mitterrandista, liderada por Jospin, que era secretario general desde 1981, y la rocardiana. La primera, a pesar de haber dado un giro a la derecha en la práctica política, todavía se sentía con el compromiso de transformar la sociedad francesa desde premisas socialistas, aunque esta transformación tuviese que pasar por períodos de ajuste neocapitalista, mientras que la segunda había rechazado desde siempre esta opción y era partidaria de formar lo que llamaba un "Frente

"Republicano", es decir de pactar con fuerzas del centro y evitar cualquier veleidad con la izquierda, sobre todo con el PCF, por eso presentó la propuesta de un programa de modernización claramente reformista. En el congreso de Toulouse sin embargo la corriente de Michel Rocard se vió sorprendida por la propuesta reformista de los mitterrandistas quienes, rechazando su propio vocabulario radical y marxista, propusieron continuar con la política moderada que habían iniciado en 1983, dando así un paso decisivo hacia las posiciones de centro y restando protagonismo a los partidarios del programa Rocard. De esta manera Fabius, que se había convertido en el portavoz de Mitterrand, logró aunar las corrientes más importantes detrás de su manifiesto-programa, pero esto, a su vez, supuso también la definitiva reconversión socialdemócrata del Partido Socialista francés.

Esta convergencia hacia el centro pretendía también, dada la experiencia de los últimos resultados electorales, preparar la próxima campaña a la Asamblea Nacional de 1986, que presentaba la novedad de ser la primera elección parlamentaria que se disputaba bajo el sistema de representación proporcional. Esta circunstancia condicionó todo tipo de alianzas y obligó a los partidos a remodelar sus candidaturas. La derecha lanzó un documento de 21 puntos que contenía su programa neoliberal, en el que se huía tanto de los maximalismos exigidos por Chirac -privatización de la Renault, prohibición del aborto, renegociación de la entrada de España y Portugal en la CE, etc.- como de las rupturas totales con la reforma Mitterrand, aceptando como conquistas definitivas la reducción de la jornada laboral, el aumento del período vacacional, la jubilación voluntaria anticipada, etc. Su programa pedía cinco cambios

significativos en el área económica: la abolición del impuesto sobre las grandes fortunas; la privatización de los bancos y empresas nacionalizadas por Mitterrand; el recorte del gasto público en 10.000 millones de dólares en dos años y un aligeramiento de las cargas que gravaban a las empresas privadas. También pidió la abolición del sistema electoral proporcional y la privatización de la Televisión estatal (32).

La izquierda, por su parte, confiaba en la campaña que podían lanzar Jospin como Secretario General y Fabius como Primer Ministro desde distintas perspectivas políticas. Pero los continuos ataques de Chirac y la popularidad que iba adquiriendo su figura decidieron finalmente al Presidente Mitterrand a entrar en la campaña electoral para defender con el prestigio de su figura personal algunas de las tesis fundamentales de su propio programa. Partiendo de la crisis que los socialistas habían tenido que afrontar a comienzos de la década, el partido defendía que la sociedad francesa había salido mejor parada que sus vecinos y además la política social aplicada había mejorado la situación de los grupos más desfavorecidos. Las nacionalizaciones y la planificación habían contribuido a su vez a mejorar el nivel tecnológico de las empresas y por tanto su competitividad internacional. Aunque en un primer momento, el coste de estas medidas había recaído en el desempleo y la inflación, ahora comenzaba una inflexión a la baja de estas magnitudes como resultado de esa política.

Con un 78 por cien de participación electoral el partido socialista fue la formación política más votada alcanzando el 31,4 por cien de los votos, la lista combinada del RPR-UDF alcanzó el 21,5 por cien (por separado ambas

formaciones alcanzaron el 11,2 y el 8,3 por cien respectivamente), pero el sistema proporcional permitió que la derecha alcanzara la mayoría relativa en el Parlamento. Por su parte, el PCF sólo llegó al 9,8 por cien de los votos, uno de los peores resultados de su historia, que situaba al partido socialista como el partido hegemónico de la izquierda, aunque una parte del electorado, que le había votado en 1981, se hubiese recluido en la abstención desengañada por el cambio político que los socialistas habían introducido en 1983 al aplicar una política de ajuste en consonancia con las políticas reguladoras que también habían aplicado sus vecinos socialdemócratas.

3.4. Del expansionismo al rigor

Una de las características más importantes de la organización y desarrollo de la economía francesa en la postguerra han sido los Planes de Desarrollo. Los franceses, que tradicionalmente habían considerado al Estado como árbitro neutral de los intereses presentes en la sociedad, después de la II Guerra Mundial, y con motivo de las experiencias de la economía de guerra, del plan Marshall y del relanzamiento de una Administración destruida, establecieron conexiones muy estrechas entre los representantes de las fuerzas del capital y de los organismos estatales, con lo cual la dependencia del estado de ese sector del capital aumentó considerablemente. Las autoridades francesas de los

gobiernos gaullistas habían llegado a la conclusión de que en las modernas sociedades complejas la política económica no estaba tanto en función de los programas ideológicos de los partidos cuanto del conocimiento de los expertos y, por tanto, la planificación era uno de los mejores instrumentos para unir el interés general de la nación con las necesidades intrínsecas de una economía que estaba condicionada por sus propios mecanismos de funcionamiento, interno y externo, y además proporcionaba niveles superiores de crecimiento económico y prosperidad.

Quizás por esta razón los acontecimientos de Mayo del 68 cogieron de improviso a todos, desbancaron el razonamiento tecnocrático y volvieron a poner sobre el tapete el proceso de negociación política. Estos sucesos que se cerraron con el acuerdo de Grenelle también pusieron de relieve la transformación que había sufrido la clase obrera francesa, que se había terciarizado considerablemente, y la facilidad con que una devaluación posterior dejó sin efecto muchas de las conquistas laborales.

El Sexto plan que se iniciaba en 1970 todavía dio mucha prioridad al crecimiento de la industria pesada y se preocupó por crear un ambiente favorable al desarrollo de la manufactura francesa con la finalidad de que aumentase su competitividad, puesto que se acababa de liberalizar el régimen comercial de la Comunidad Europea. La crisis petrolífera de 1973 perjudicó de manera especial a la economía francesa que dependía mucho de estos recursos energéticos. Al cuadruplicarse el precio del petróleo desequilibró la balanza de pagos que de un superávit de 773 millones

de dólares en 1973 pasó a un déficit de 3900 millones de dólares en 1974. El desempleo creció desde 500000 parados en 1974 a un millón al final de 1975. Giscard, que había sustituido en 1975 a Pompidou con la aureola de gran gestor y técnico de la Administración del Estado, puso de manifiesto que el problema económico al que se enfrentaba la sociedad francesa era primordialmente la inflación, causada en parte por una excesiva inversión y consumo debido, sobre todo, al rápido incremento de los precios del petróleo. El Séptimo Plan (1975-81) que abarcó todo el periodo Giscard trató de afrontar sobre todo el problema de la recesión, dando prioridad al control de la inflación, a la balanza de pagos y al pleno empleo. La mayor parte de las medidas que se tomaron se subordinaron al programa de austeridad que Raymond Barre trató de imponer a partir de 1976 cuando sustituyó al depuesto Chirac por el fracaso de su política restrictiva. El Presidente Giscard recortó el poder a los agentes del Plan y puso un mayor énfasis en políticas microeconómicas que les acercasen más a sus electores (agricultores, pensionistas, pequeños empresarios), insistiendo en dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas y a los artesanos antes que a la industria pesada. Los cambios en la economía internacional también influyeron de forma importante en la muerte de la planificación ya que las empresas se enfrentaron cada vez más a la competencia exterior cuya amenaza venía sobre todo del Tercer Mundo, cuyos costes salariales eran siete veces inferiores a los de la Comunidad Europea. Barre manifestó que el problema central era la inflación. Francia vivía más allá de lo que le permitían sus propios medios y la consecuencia más grave era el gran déficit de la balanza de pagos. El remedio no

era manipular el ciclo económico sino mejorar los resultados de las empresas francesas y en general de los agentes económicos. Empresas más fuertes y con mayores beneficios significarían más y mejores inversiones, que a su vez absorberían poco a poco el paro. Esta política implicaba una fuerte confianza en las fuerzas del mercado y una retirada parcial del Estado de la vida económica. Se trataba de reforzar los recursos y la autonomía de las empresas de tal manera que asumiesen la responsabilidad de adaptarse a la competencia extranjera. Barre quería desviar la responsabilidad a los empresarios; éstos obtendrían su motivación de los beneficios más que de las subvenciones a la creación de puestos de trabajo y de las ayudas a la inversión de las transferencias de capital (33). Pero su política no tuvo éxito, los beneficios empresariales mostraron alguna mejora, pero las inversiones continuaron bajando y las exportaciones disminuyeron. La inflación apenas cambió situándose en un 10 por cien y subió al 14 por cien antes de la derrota electoral de la derecha en 1981. Con todo durante este período del gobierno Giscard la importancia de la planificación disminuyó considerablemente, pero a pesar del protagonismo que se le devolvió a las fuerzas del mercado la política industrial francesa continuó siendo dirigista en buena parte de los programas económicos gubernamentales.

Cuando los socialistas llegaron al poder muchas de sus propuestas económicas tenían origen en el Programa Común de 1972 en el que se argüía que el derroche capitalista y la mala gestión lastraban el potencial del crecimiento francés y que tomando los sectores clave de la industria y los bancos, aplicando mayores impuestos a los beneficios empresariales y al consumo de lujo, mientras a su vez se

practicaba un política expansionista, la economía permitiría una redistribución a gran escala a través de aumentos salariales y de un gasto mayor en el bienestar social. Por otra parte Francia estaba atrasada respecto a los principales líderes capitalistas -EEUU, Japón y Alemania- porque había fracasado en desarrollar grandes y modernas empresas oligopolísticas que pudiesen liderar la innovación tecnológica, apropiarse de los beneficios de ese liderazgo e imponerse en el mercado mundial. La consecuencia de este análisis era que se debían organizar oligopolios que pudiesen dominar toda la producción de un sector desde las materias primas hasta el producto acabado antes que promocionar una estructura industrial que se especializase solamente en áreas seleccionadas que tuviesen normas y condiciones fijadas por las multinacionales (p.e. química, biotecnología, etc.) El análisis socialista insistía en que la derecha era incapaz de hacer el cambio necesario puesto que el capital privado era demasiado débil y los capitalistas estaban demasiado ocupados en la maximización de sus beneficios a corto plazo. Solamente el socialismo podía ofrecer una respuesta real nacionalizando las mejores empresas para encabezar los oligopolios y el sector bancario a fin de proveer los fondos que se requieren para una inversión masiva que traería beneficios a medio plazo. Esta política dotaría a Francia con estructuras industriales poderosas que concentrarían la innovación, el empleo y el beneficio, posibilitando la vuelta a un nivel de crecimiento más alto sin necesidad de entrar en el dilema del déficit de la balanza de pagos y permitiendo a su vez una generosa redistribución que reconciliaría a la clase trabajadora con la sociedad industrial (34).

Partiendo de estas premisas, que habían sido

modificadas en parte en los congresos posteriores, Mitterrand se aprestó a poner en marcha una política económica expansiva que pronto se vió limitada por las condiciones internacionales en la que se movió y cambiada hacia posturas mucho más reformistas como ya hemos visto en el capítulo anterior. Peter Hall ha subdividido las políticas macroeconómicas de este período socialista en tres momentos: el de la redistribución, el del rigor y el del relanzamiento (35).

En base a la expansión de la economía mundial que se avecinaba, y a pesar de que algunos aconsejaban medidas de austeridad, Mitterrand favoreció la política expansionista de la demanda teniendo presentes también los intereses redistributivos de sus electores. El gasto gubernamental decidió incrementar las rentas de los más débiles y crear puestos de trabajo para los parados, lo cual aumentaría el consumo y conduciría en poco tiempo a la expansión de la industria francesa. Se empezaba así en 1981 un programa confesado claramente de keynesianismo distributivo. En el marco de este programa las prestaciones familiares aumentaron un 31 por cien para las familias con dos hijos, y un 44 por cien para las de tres en los primeros dos años. Las cuotas de viviendas para los trabajadores peor pagados se incrementaron en un 25 por cien. Se ampliaron los beneficios de la Seguridad Social a los trabajadores a tiempo parcial y a los parados. Las pensiones se incrementaron desde 300 francos al mes a 1700 por persona y a 3700 para las parejas. El poder adquisitivo de las transferencias sociales subió del 4,5 por cien en 1981 al 7,6 por cien en 1982. El salario mínimo que percibían 1,7 millones de trabajadores creció un 15 por cien en términos reales en año y medio. Se tomaron medidas radicales para mitigar el paro comenzando con la reducción del horario de trabajo. En julio de 1981 el horario de trabajo semanal se redujo

de 40 a 39 horas y se concedió una quinta semana de vacaciones al mundo laboral. Como resultado mejoró la calidad de vida para muchos trabajadores, pero tuvo escaso efecto en el paro. Sólo una quinta parte de las empresas contrató nuevos trabajadores que en total sumaron 28000 nuevos puestos de trabajo (36).

Siguiendo la descripción de Hall, en enero de 1982 un segundo programa estimuló a las empresas a negociar "contratos de solidaridad" con el gobierno. Una cláusula permitía a los trabajadores entre 55 y 60 años jubilarse con el 70 por cien de su salario, que sería pagado por el Estado si la empresa contrataba en su lugar a un joven. Esta medida creó en 1982 unos 100.000 puestos de trabajo. Otra cláusula permitía que a los empresarios que redujesen el horario de trabajo semanal por debajo de las 39 horas y, como resultado, contratasen nuevos empleados se les liberase de pagar la Seguridad Social de los nuevos contratos. Sólo unos 13.000 puestos se crearon bajo esta nueva fórmula en 1982. Una tercera permitía a los asalariados de mayor edad trabajar la mitad del tiempo con el 80 por cien de su salario pagado por la empresa y el 20 por cien por el Estado, si eran reemplazados por jóvenes trabajadores. Sólamente 1500 puestos se crearon de esta manera. Pero estas medidas tuvieron gran éxito entre los peores pagados, los jubilados y los desempleados. El paro sólo aumentó un 4 por cien en 1982 frente a tasas mucho más altas en los países vecinos y la economía creció a un ritmo del 2 por cien mientras permanecía estancada en otros países.

Ahora bien, en este tiempo el gasto público subió un 11,4 por cien y el déficit presupuestario pasó del 0,4 al 3 por cien del PIB en 1982. A la industria francesa le resultó difícil luchar por la competitividad bajo el peso de 34000 millones de francos que supuso el crecimiento en salarios y Seguridad Social del nuevo programa. Además la recuperación económica mundial no llegaba; al contrario 1982 se caracterizó por ser un año recesivo en el que aumentó la cotización del dólar y también los tipos de interés en todo el mundo. El gobierno Mitterrand pronto se dió cuenta de los problemas que presentaba esta política, por lo cual la devaluación del franco y la austeridad interna se hicieron inevitables, con la esperanza de que la primera medida restaurase la competitividad de las exportaciones francesas mientras que la segunda frenaría las importaciones reduciendo las rentas familiares hogar.

El cambio de política se produjo a mediados de 1982 después de la segunda devaluación del franco. El gobierno trazó un programa radical de austeridad cuyo objetivo era limitar el déficit del sector público al 3 por cien del PIB y mejorar la deteriorada situación financiera de la empresa privada. El gasto público para 1982 se recortó en 20.000 millones de francos. Todos los salarios, excepto el mínimo, así como los precios fueron congelados, el nivel de la contribución empresarial a la Seguridad Social se congeló por un año, los impuestos a las empresas se redujeron en un 10 por cien, etc. Estas y otras medidas supusieron que la aportación de la industria francesa en 1982-83 al gasto público se redujese a la mitad del año anterior. Aun así el impacto de esta política restrictiva no fue suficiente y el gobierno tuvo que instrumentar un nuevo plan de austeridad en marzo de 1983 que alcanzó también a las clases medias (37).

La tercera etapa de relanzamiento después de los cambios ministeriales de 1984 iba a basarse en la reducción de impuestos, el saneamiento de las empresas y la preocupación por la economía de las clases medias, lo cual comportaba recortes en los amplios programas de gasto público y disminución de la presión fiscal, con la intención de ampliar la base electoral por la derecha dados los resultados de las elecciones locales precedentes y la proximidad de las generales a la Asamblea Nacional.

De la política de nacionalizaciones ya hemos hablado en el apartado anterior. Recordemos que esta medida, que pretendía especializar a los grandes monopolios para que sirvieran como empresas líderes en la promoción de nuevas tecnologías, tenía como objetivo primordial vencer uno de los condicionamientos estructurales clásicos del capitalismo: la dependencia de la inversión de la confianza del mundo de los negocios. Con la intervención del Estado se mantenía la inversión en estas empresas aun en los períodos recesivos y esto permitía mantener e incluso mejorar la competitividad y al mismo tiempo sostener el empleo. Recordemos que el coste de las nacionalizaciones fue de 39.000 millones de francos más 47.000 millones de intereses, que se abonarían a lo largo de 15 años. Con la sustitución de Chevénement por Fabius como ministro de Industria en 1983, y después de que algunas de estas empresas se quejasen de sobrecarga de mano de obra para mejorar su competitividad internacional, la política industrial se hizo más flexible y las pérdidas de estas grandes empresas cayeron drásticamente mejorando así su racionalización. Cuando esta inversión masiva se había producido ya el gobierno dirigió su mirada hacia el resto de la estructura industrial aplicando una política de reducción de impuestos para permitir su capitalización y fomentar así la inversión privada. De esta manera la economía francesa que había pasado por graves problemas en la primera parte de la década comenzó a mejorar sus indicadores poco antes de que los socialistas perdiesen las elecciones generales a la Asamblea Nacional de 1986.

En cuanto a la política social, ya hemos visto que el Programa de las 110 Proposiciones incluía un compromiso firme con la mejora del nivel de vida de los más necesitados a base de aumentos salariales, prestaciones sociales y mejoras en los derechos individuales. Todos estos objetivos se afrontaron en la primera etapa con medidas muy concretas, pero la decisión de priorizar la recuperación económica, el déficit del gasto público y el déficit de la Seguridad Social frenaron el aumento progresivo de estas medidas.

La creación del Ministerio de Solidaridad Nacional del que se hizo cargo Nicole Questiaux, que pertenecía al CERES, puso de relieve aquellas medidas del partido socialista que favorecían el uso del sistema de la Seguridad Social para desarrollar una visión universalista de la reforma social. La Seguridad Social se consideraba como parte integrante y necesaria del progreso productivo para la promoción de una sociedad moderna y no como una carga que hay que afrontar.

Los gastos generales de Protección Social habían aumentado desde 47.000 millones de francos en 1960 a 752.000 millones en 1980; esto suponía un salto desde el 15,9 por cien al 27,3 por cien del PIB, y en el caso del gasto social de un 44,7 por cien del gasto total en 1970 a un 51,7 por cien en 1980, es decir cantidades muy similares a las de otros países europeos en el mismo período de tiempo.

El grueso de esta ayuda -el 75 por cien- eran prestaciones de la Seguridad Social, de las que en 1980 las partidas más importantes fueran absorbidas en un 36 por cien por el sistema sanitario y en un 43 por cien por el sistema de pensiones (38). Las fuentes de esta financiación se repartían el 54,4 por cien entre los empresarios, el 23,1 por cien entre los propios asegurados y el 21,2 por cien correspondían al Estado. Ahora bien esta partida del presupuesto estatal arrastraba desde años atrás un desequilibrio financiero al que los diversos gobiernos anteriores habían intentado poner solución sin conseguirlo, y que ahora los socialistas trataban de controlar pensando que la expansión económica equilibraría el déficit crónico de la política social.

La ministra Questiaux lanzó un programa de mejoras que preveía un déficit total de 7200 millones de francos en 1981 y de 24.600 millones en 1982. Para afrontar este gasto el gobierno tenía que recaudar 40000 millones de francos a través de economías en el sistema sanitario y de nuevos impuestos sobre los trabajadores, los empresarios y los bienes que no eran de primera necesidad. De esta manera se incrementó el salario mínimo, incluso por encima de la tasa de inflación, aumentaron las pensiones, los subsidios familiares, los préstamos a la vivienda para los hogares menos favorecidos y se crearon centros de salud en comunidades locales (39). Crecieron un 25 por cien las prestaciones familiares y un 50 por cien las prestaciones de vivienda para las familias más necesitadas. Se limitaron los privilegios fiscales de los más acomodados. A comienzos de 1982 aumentaron de nuevo las prestaciones a las familias con dos hijos.

En Asistencia Sanitaria se incluyeron nuevos servicios

en la lista de las prestaciones a los asegurados y se cumplió la promesa de reembolsar el 70 por cien del coste de los abortos. El ministro comunista de Sanidad M.Ralite puso en marcha la Charte de la Santé en la que no se ocultaba la realidad sanitaria de un sector público y otro privado, pero proponía una política de mejora de los hospitales generales, introducir mejoras en los contratos de trabajo de los médicos a tiempo completo y acabar con la utilización del hospital público para consultas e intervenciones privadas.

Los socialistas, comprometidos con el cambio de la situación de la mujer, nombraron a Mme. Y.Rondy ministra de los Derechos de la Mujer, quien en 1982 aprobó un paquete legislativo que garantizaba el acceso de la mujer a todos los niveles de la Administración Pública adoptando una política activa para su promoción y facilitando la igualdad de derechos y deberes entre los padres para el cuidado de sus hijos.

Ahora bien la continuidad de esta reforma estructural de la política social, sobre todo de aquella parte más vinculada al presupuesto estatal y por tanto más sensible al déficit del gasto público, tuvo su fin cuando el desequilibrio se hizo tan patente que alcanzó los 30.000 millones de francos en 1983 y, ante la imposibilidad de recurrir a otras fuentes de ahorro o a nuevas medidas impositivas, el gobierno decidió cambiar su trayectoria. El informe Maillet que puso sobre el tapete este grave problema fue seguido de un cambio en los ministerios y del Plan de austeridad de Bérégovoy, aunque una parte de los diputados socialistas se opusieran y votaran con la oposición.

En esta segunda fase el gobierno se limitó a proteger

la situación de los beneficiarios y a tener una consideración especial con los más pobres. De esta manera se redujo la duración del periodo del subsidio de desempleo, se estableció una relación más estrecha entre el subsidio y el tiempo de duración del trabajo asegurado y se prolongó el periodo de espera para quienes dejaren su trabajo sin causa justificada. Además los subsidios de larga duración pasarian a ser de cantidad variable según si el beneficiario fuese mayor o menor de 50 años. Con esto se trataba de favorecer a determinadas categorias como los jóvenes, los parados de larga duración o los padres solteros. Se introdujo, con excepciones, una carga hospitalaria básica y se exigieron con antelación contribuciones a los jubilados y parados para su atención sanitaria. Redujeron los límites de la renta para contribuir a la seguridad social y cambió la base de ingresos sobre la que eran clasificados los empresarios y los autónomos. Con todo, el coste de la ayuda a adultos incapacitados se transfirió al gobierno, se incrementaron las pensiones a los incapacitados y a los ancianos y se amplió el derecho a deducir el coste del cuidado de los hijos para todos los hijos menores de tres años aunque disminuyeron las prestaciones familiares para el tercer hijo. En Sanidad, con la renuncia del ministro comunista, el Ministerio se subordinó al control del Ministerio de Asuntos Sociales y Solidaridad Nacional; se incrementó el pago mínimo de los pacientes a los hospitales, disminuyeron los presupuestos hospitalarios y los fondos regionales de salud, se limitó el aumento del personal laboral y la reducción de la semana de trabajo. Por último en 1983 todos los trabajadores del régimen general obtuvieron el derecho a la jubilación completa a los 60 años. (40)

Algunos autores han subrayado que los socialistas adoptaron en 1981 un programa de política social condicionados por objetivos que heredaban todavía demasiados aspectos del Programa Común de 1972, y además quizás no tuvieron demasiado en cuenta la situación deficitaria en que se encontraba todo el sistema de Seguridad Social. Aun así y a pesar de que poco después abandonaron este programa demasiado radical no se pueden soslayar algunos éxitos que se convirtieron en pautas ya asumidas por la sociedad francesa, como fueron: una mayor integración de los inmigrantes en la sociedad, las leyes sobre la discriminación de la mujer, el aumento selectivo de los subsidios de la seguridad social y de las prestaciones sociales para equilibrar la situación de los más desfavorecidos, las mejoras en la administración hospitalaria y en las pensiones de la tercera edad, etc. Con todo, después de un breve periodo de expansión se había entrado plenamente en la etapa del rigor.

3.5. Pluralidad sindical y distanciamiento

El sindicalismo francés participa de todas las características de los movimientos obreros del sur de Europa y tiene poco que ver con sus homólogos alemán o británico. En el Reino Unido las Trade Unions tienen un origen organizativo que se basa en el oficio artesanal que ha desembocado en una gran multiplicidad de organizaciones de tamaño medio representadas por una organización central, el TUC (Trade Union Congress). En Alemania por su parte, los sindicatos se han organizado con una base empresarial y territorial mucho más amplia. En la actualidad existen 17 grandes agrupaciones, siendo la del Metal la más importante porque agrupa a un tercio de sus miembros. Su organismo principal la DGB ha practicado una política de diálogo con

el Estado y la patronal constituyendo así uno de los ejemplos modélicos del corporatismo europeo.

En Francia el movimiento obrero se encuentra organizado en un número reducido de confederaciones y se caracteriza más por la capacidad de movilización de los trabajadores que por su sólida organización, por su debilidad numérica, sus divisiones internas y su agilidad conflictual muy contraria al estilo corporatista. De las seis confederaciones más significativas vamos a fijarnos sólo en las tres que agrupan a más de las tres cuartas partes de la militancia obrera. La CGT (Confederación General del Trabajo) ha sido durante mucho tiempo el sindicato más importante y agrupa a un 40 por cien de la militancia ubicada sobre todo en los sectores del acero, el carbón, construcción, automóvil, química y electricidad. Fue fundada en 1895 y está muy vinculada a la política del Partido Comunista francés. La CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo) agrupa a un 25 por cien de los obreros sindicalizados, sus bases radican más en la empresa privada, y sus simpatías la han vinculado casi siempre al Partido Socialista Francés. Por último, FO (Fuerza Obrera) fundada más recientemente, en 1948, como resultado de la escisión de la CGT agrupa a un 18 por cien de la militancia, y sus afiliados se encuentran sobre todo entre los sectores del funcionariado.

Estos sindicatos tienen una organización mucho más

descentralizada que sus homólogos noreuropeos y dada su escasa afiliación, un 25 por cien frente a un 40 por cien en Alemania e Italia y un 50 por cien en Gran Bretaña y sus escasos recursos financieros, han practicado una conflictividad intensa pero de breve duración, apoyando más jornadas y actividades de carácter obstructivo y violento que huelgas pasivas o de larga duración. Su instrumento son las huelgas fragmentadas y las luchas irregulares que buscan, sobre todo, llamar la atención de la opinión pública.

Después de 1968 el gobierno adoptó una normativa dirigida a regular la organización de los sindicatos dentro de la empresa, ya que hasta entonces las asociaciones empresariales y los propios empresarios habían tratado de evitar cualquier forma de organización sindical dentro de las empresas y de limitar el funcionamiento del sindicato a nivel de sector. La nueva legislación permitió a los sindicatos más representativos organizarse en las empresas con más de 50 trabajadores. Aunque en las empresas más grandes estaban ya presentes los sindicatos antes de que esta ley se aprobase, en muchas empresas medianas no existía ninguna forma de representación sindical. Así, el número de 8000 empresas en las que había representación sindical en 1960 se triplicó en 1980, y poco después en 1982 la legislación socialista permitió la organización sindical en cualquier empresa del tamaño que fuere, lo cual daba pie a la expansión de la base sindical.

A comienzos de los años 70 las dos grandes centrales sindicales experimentaron un aumento de militancia que globalmente podía calcularse en un 13 por cien, pero mientras el número de afiliados de la CFDT creció en un 24 por cien el de la CGT estuvo por debajo cifrándose en un

18,5 por cien. Ahora bien, en todo ese decenio ambas centrales aumentaron en un primer momento su afiliación para sufrir un descenso poco después. La CFDT pasó de 1077.731 afiliados en 1976 a 936.220 en 1980, mientras la CGT descendió desde 2.075.075 en 1975 a 1.634.375 en 1980 (41).

La caída de la militancia ha sido mucho más fuerte en la CGT que en la CFDT debido a que estos dos sindicatos tienen una estructura diversa en su base; el 60 por cien de los afiliados a la CGT son trabajadores manuales mientras que esta proporción en la CFDT es del 48 por cien, sin embargo la CGT sólo tiene un 29 por cien de afiliados que pertenecen al sector terciario mientras en la CFDT son el 44 por cien, y, por último, en el sector primario la CGT tenía la pasada década un 12 por cien mientras la CFDT soló tenía el 1,8 por cien. No hay que olvidar que en todos estos años ha aumentado la ocupación en el sector terciario mientras ha disminuido al mismo tiempo en el secundario. Por eso alguno autores atribuyen la caída de la militancia en los dos sindicatos a la disminución de la ocupación industrial, sobre todo en los sectores más sindicalizados. Con todo ambas centrales han aumentado sus afiliados en el sector terciario y sobre todo en el sector público, aunque esto no se ha producido en la misma proporción que las pérdidas. El peso que ha ganado el sector terciario en la afiliación sindical y, sobre todo, el sector público, ha beneficiado a Force Ouvrière, que es el sindicato que mayor peso ha tenido siempre en este sector y esto le ha permitido ganar influencia respecto a los otros dos.

La escasa adhesión obrera que han tenido siempre los sindicatos franceses se ha debido a múltiples causas entre

las que cabría subrayar la división que siempre han mantenido a nivel político, así como la práctica de recurrir a la legislación para regular las condiciones de contratación, y esta conducta tuvo confirmación inmediata bajo el mandato socialista cuando en 1982 la discusión se centró sobre la reducción de las indemnizaciones a los parados, y de nuevo en 1984 cuando patronal y sindicatos no consiguieron alcanzar un acuerdo sobre la flexibilidad del trabajo. Pero a esta escasa adhesión hay que añadir algunos cambios que se han producido en la composición interna de la militancia que, en el caso francés, se refieren a un aumento de la participación de la mujer, la juventud y los inmigrados, debido sobre todo al crecimiento de estos colectivos en la fuerza de trabajo.

Entre 1970 y 1975 la población obrera experimentó un crecimiento continuado que se puede cifrar alrededor de los dos millones de personas, que encontraron su trabajo sobre todo en el sector comercial y en los otros servicios, aunque también aumentó la ocupación en la industria. Esta demanda laboral fue cubierta sobre todo por el crecimiento demográfico, los trabajadores inmigrados, el aumento de la participación de la mujer en el mundo del trabajo y la absorción de los excedentes del sector primario.

Las consecuencias de la crisis petrolífera no se hicieron patentes en Francia hasta 1976 y duraron hasta bien avanzada la década de los 80, pero sus primeros síntomas repercutieron principalmente en la ocupación industrial de los sectores tradicionales, como el siderúrgico y el naval, caracterizados por una elevada concentración y sindicalización, aunque la desocupación global saltó de 220.000 personas en 1970 a 1.000.000 en 1976, lo que a su vez triplicó

el número de conflictos. La política sindical en este periodo se concentró sobre todo en la promoción de mejoras legislativas respecto a los excedentes de mano de obra y en el reforzamiento de los derechos obtenidos en la contratación colectiva sobre el subsidio de paro. Se aprobaron dos nuevas leyes para mejorar la situación legal de los trabajadores despedidos: la de 1973 se refería a las modalidades del despido individual mientras que la de 1975 se refería a los problemas de los excedentes laborales. La primera protegía a todos los asalariados contra posibles abusos y obligaba al empresario a entregar por escrito una declaración con los motivos del despido (42). Estas y otras medidas se hicieron necesarias para frenar la crisis de los fondos de previsión para la desocupación, a pesar del apoyo del Estado. Así, una indemnización del cien por cien de la indemnización sólo la percibirían los parados con rentas más bajas.

Los empresarios, por su lado, recurrieron con más frecuencia al trabajo a tiempo parcial, duplicando el número de asalariados que prestaban este tipo de trabajo, de 100.000 en 1974 pasaron a ser 200.000 en 1980, con lo cual aumentaban la flexibilidad del mercado de trabajo y la inseguridad laboral para el asalariado. A estas nuevas formas de organización de la producción se añadieron las grandes empresas con una política que comenzó a descentralizar, a subcontratar y a flexibilizar la mano de obra para aprovechar el tirón de la demanda laboral. El gobierno a su vez introdujo también algunas medidas como la pensión con el 70 por cien del salario para aquellos que voluntariamente se jubilasen entre los 60 y 65 años, y el plan de ocupación juvenil para los menores de 25 años.

En el ámbito de los salarios la adecuación del salario mínimo interprofesional, que tuvo lugar en el verano de

1970, fue una gran conquista porque tuvo un fuerte impacto sobre los salarios más bajos. En la primera parte del periodo Giscard se aumentaron los salarios más bajos, superando el crecimiento de los salarios medios, pero el plan Barre de 1976 acabó con esta tendencia con el fin de reducir los efectos inflacionistas de la subida del salario mínimo interprofesional.

Los sindicatos mayoritarios respondieron a esta política de restricción salarial con el rechazo a la firma de acuerdos colectivos sobre el salario, al menos en los grandes sectores y empresas industriales. En 1974 la CGT y la CFDT alcanzaron un acuerdo común sobre la "unidad de acción" para afrontar conjuntamente las medidas gubernamentales y empresariales respecto de la política salarial y de empleo, pero a partir de 1978 las políticas salariales de la CGT y la CFDT se han enfrentado cada vez más. La primera ha puesto mayor énfasis en la reducción de las diferencias salariales mediante la subida de los estipendios más bajos, mientras que la segunda ha solicitado la definición de una escala salarial única para los obreros y empleados pero con un nuevo esquema en el que el aumento de los salarios debería componerse de dos partes, una sería igual para todos los trabajadores y la otra supondría un aumento percentual también igual para todos pero que favoreciese a los peor pagados. Además la CFDT puso el acento en una política de vuelta al centramiento, es decir a centrarse en los objetivos propiamente sindicales desligándose de su dependencia respecto a los partidos políticos. Pero esta actitud reivindicativa exclusivamente sindical no era compartida por la CGT. Finalmente 1980 será el año de la ruptura entre la CGT y la CFDT; la primera acusaba a la segunda de blanda y comprometida con el poder, mientras que la segunda

atacaba a la primera por promover movilizaciones sin consultarla ni advertirla y de actuar fuera de todo realismo para explotar el descontento. El primero de Mayo de ese mismo año cada formación se manifestará por su parte consumándose así la separación definitiva. Los dos sindicatos pierden militancia en favor de Force Ouvrière que alcanza en delegados a la CFDT y se impone sobre todo en el sector privado. En reacción a este fenómeno la CGT en el congreso de 1980 aumentó el número de miembros socialistas en la comisión ejecutiva, como estrategia de apertura y participación a otros sectores de los trabajadores.

Con los socialistas en el gobierno uno de los principales objetivos del PS fue el de aumentar la fuerza de los sindicatos dentro de las empresas. El gobierno decidió reforzar la unidad de los trabajadores utilizando procedimientos administrativos que tratasen de limitar el uso de la contratación temporal, y se aprobaron leyes para aumentar la capacidad de control del sindicato sobre la política salarial y los planes de formación de las empresas. Se establecieron también contratos de solidaridad que afectaban a la reducción del horario de trabajo, ofreciendo a la empresa incentivos financieros temporales por cada trabajador contratado así como contratos colectivos de pre-jubilación.

Respecto a la política salarial entre 1981 y 1982 el gobierno socialista restringió las distancias salariales en beneficio de los trabajadores manuales mediante un incremento sustancial del salario mínimo interprofesional, pero esta tendencia se frenó con el plan de reajuste económico adoptado en el verano de 1982. La política del gobierno trataba de distribuir los sacrificios excluyendo a

los salarios más bajos y las categorías más desfavorecidas; de esta manera el salario mínimo fue el único que escapó al bloqueo salarial así como algunas prestaciones de primera necesidad. Cuando en 1983 se permite la superación de este bloqueo se hará en condiciones muy restrictivas eliminando todos los mecanismos que posibilitasen la vinculación automática entre la subida de precios y la de salarios.

Pero las medidas aprobadas por los socialistas en este periodo que más favorecieron a los trabajadores fueron las "leyes Auroux" y los decretos referidos al trabajo temporal y a tiempo parcial. Las cuatro leyes aprobadas fueron: a) sobre la libertad de los trabajadores en la empresa, b) sobre el desarrollo de las instituciones representativas del personal, c) la contratación colectiva y la regulación de los conflictos de trabajo y d) los comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo.

Las grandes líneas de este programa legislativo fueron (43): 1) las limitaciones al ejercicio del poder de los empresarios. Limitan rigurosamente el ámbito de la competencia de los reglamentos internos de las empresas a las cuestiones inherentes a la disciplina y la seguridad. Además el reglamento interno se aplica obligatoriamente a las empresas con más de veinte empleados. Otra modalidad a través de la cual se limita el poder disciplinario del empresario deriva de la introducción del control judicial.

2) El reconocimiento de la sección sindical puede ser exigido en todos los centros de trabajo de cualquier dimensión que sean. Toda una serie de medidas mejorará la protección de los delegados que tendrán libertad de movimiento dentro de la empresa.

3) Típico del sistema francés será la coexistencia de los representantes sindicales con los representantes

electos, a diferencia de lo que sucede en Italia o Gran Bretaña donde no existe otra representación que la sindical. La ley consiente una simplificación de la representación en las pequeñas empresas, que se confía a los delegados del personal en ausencia del comité de empresa.

En términos jurídicos no se puede ir más allá del papel consultivo de los delegados pero de hecho se pasa gradualmente de la información a la consulta y a la contratación.

4) La Ley dispone la contratación salarial al menos una vez al año y la obligación de revisar las cualificaciones cada cinco años.

5) El derecho de expresión de los trabajadores es un estímulo para el diálogo y la discusión en la empresa sobre la organización y las condiciones de trabajo. La nueva ley tiene un carácter experimental.

Estas leyes vinieron a compensar el plan de austeridad del gobierno y, sobre todo, su política de congelación de rentas, que fue desaprobada por todos los sindicatos pero ninguno se inclinó a tomar medidas en contra utilizando la huelga a pesar de que hubo muchas reacciones verbales, sobre todo por parte de los sindicatos reformistas debido a sus vínculos ideológicos con el gobierno. Esta actitud equivoca de los sindicatos se debe en parte al interés que tenían en la recuperación económica nacional, a la que deseaban contribuir, y a la necesidad de reforzar su presencia legal en las empresas debido a la pérdida de su poder real, sobre todo por el crecimiento del paro que aumentó entre 1982 y 1983 en un 4,5 por cien y, en el caso de la CGT, por el retroceso de su afiliación. Las leyes Auroux se presentaban como una oportunidad para ampliar sus

bases en las empresas, reforzar la afiliación y adaptarse así a la transformación que la estructura laboral había sufrido en los últimos años. Las leyes Auroux tenían además una especial importancia en el sistema francés de relaciones laborales debido al rechazo de los sindicatos y los empresarios a entenderse voluntariamente, con lo cual una legislación favorable a los trabajadores suponía un paso adelante en su estatuto legal como plataforma de su acción futura. No faltan autores que otorgan a estas leyes la finalidad de provocar una reacción política neocorporativa voluntaria. (44).

Un año más tarde, con el plan de austeridad de 1983 los objetivos del gobierno fueron: restaurar la balanza comercial, contener el déficit de la deuda pública, reducir el déficit del sistema de seguridad social y desacelerar la inflación. Pero esto suponía un conjunto de medidas que a corto plazo reducían el poder adquisitivo de los trabajadores. La crítica de los sindicatos a este plan se centró en la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados que, como contrapartida, no contemplaba suficientes garantías ni compensaciones para apoyarlo. Como reacción algunos sindicatos (F.O. y C.E.C.) amenazaron con acudir a la huelga mientras que la CGT y la CFDT presentaron contrapropuestas esperando reabrir negociaciones e introducir correctivos compensadores. La CFDT propuso invertir los recursos ahorrados y reducir el horario de trabajo, mientras que la CGT pidió a cambio poder influir en los planes de inversión y empleo a través de los comités de empresa, pero el gobierno rehusó negociar el plan y como compensación aceptó a finales de 1983 evaluar las consecuencias sociales e introducir medidas correctoras que compensasen las pérdidas salariales.

Esta falta de acuerdo entre gobierno y sindicatos disminuyó la capacidad de estos últimos para convencer a los trabajadores de la bondad de la política gubernamental, sobre todo porque cuando fallaban las negociaciones el gobierno imponía la solución por decreto lo que suponía, la

mayor parte de las veces, un retroceso en el status quo de los derechos sindicales.

Resulta por tanto que desde el acceso al poder de la izquierda en Francia, el gobierno a falta de una experiencia neocorporativa consolidada ha desarrollado dos estrategias contradictorias. Por una parte ha consultado regularmente a los sindicatos para tener en cuenta sus aspiraciones en la elaboración de la legislación, lo cual ha fortalecido el papel del sindicato como interlocutor, pero, por otra, ha permitido a los sindicatos negociar determinados temas de forma descentralizada, es decir, a nivel sectorial y empresarial. Esta manera de actuar no es neocorporatista en el sentido institucional de la palabra pero si en la forma de operar y en los resultados que ofrece ya que se trata de una regulación centralizada (45).

3.6. La cohabitación Mitterrand-Chirac

Al perder los socialistas la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la derecha vencedora en las elecciones pidió la dimisión de Mitterrand como Presidente de la República, puesto que esta derrota era un claro síntoma de la pérdida de confianza del pueblo francés. Ahora bien Mitterrand, que ya un año antes había manifestado que si las elecciones de 1986 no le eran favorables se acogería al artículo quinto de la Constitución para compartir el gobierno de la República, confirmó su voluntad de continuar al frente del Estado asumiendo la responsabilidad que le había sido conferida por el pueblo francés y afirmando que no veía ninguna contradicción en la voluntad popular que había elegido esta fórmula política de la cohabitación. Como máximo exponente del Estado se reservó para sí las tareas más representativas, que se referían sobre todo a las relaciones exteriores y a la política de defensa, renunciando a interferir en las tareas del gobierno interior. Pero el Primer Ministro J. Chirac no estuvo de acuerdo con esta forma de pensar del Presidente puesto que la mayor parte de los temas de política exterior, como los relacionados con la Comunidad Europea, defensa, etc., tenían fuertes repercusiones económicas internas y por tanto eran de la máxima responsabilidad del Primer Ministro. Este sería en adelante uno de los terrenos más conflictivos entre ambas autoridades y donde la cohabitación mostraría serias dificultades.

Por otra parte las diferencias programáticas entre la coalición de derechas del RPR-UDF y los socialistas respondían a dos filosofías sociales diferentes y se pusieron de manifiesto fundamentalmente en tres bloques de prioridades políticas: un paquete de medidas económicas que trataba de reestructurar la economía por el camino de la desregulación subrayando que un mercado más libre favorecería las condiciones para reactivar el crecimiento; una campaña en favor del orden público para acabar con el aumento de la criminalidad y el terrorismo; y, por último, la supresión del sistema electoral de representación proporcional y el retorno al sistema de dos vueltas. Se trataba de eliminar algunas de las reformas institucionales más importantes del programa socialista que se habían llevado a cabo entre 1981 y 1986 tratando de preparar el terreno para las próximas elecciones presidenciales.

La política de Chirac, que deseaba actuar rápidamente para demostrar la mala gestión socialista y obtener resultados a corto plazo, rentables para la derecha, se encontró pinzada en dos direcciones, por una parte la difícil colaboración con la presidencia que podía frenar muchos de sus proyectos más inmediatos a través de la obstrucción institucional, y, por otra, la de las fuerzas sociales, que se opusieron con decisión a medidas con marcado carácter conservador y antisocial.

El primer conflicto de la cohabitación, y uno de los más importantes, fue la disparidad de criterios respecto a la política económica de las privatizaciones que comenzó Chirac para desandar el camino socialista. El gobierno propuso la privatización de 65 empresas y bancos del Estado que empleaban a más de 800.000 trabajadores, entre los que se encontraban empresas de seguros, la red de TV y

los grandes complejos que habían sido nacionalizados a comienzos de 1982. Mitterrand se opuso a estas medidas alegando que algunas de tales empresas habían sido nacionalizadas por el primer gobierno De Gaulle, que había que introducir cláusulas de salvaguardia para que se pagase un precio adecuado y para que este patrimonio nacional no fuese a parar a manos extranjeras. Con esta actitud se erigía en el defensor del interés nacional, que junto a la propaganda que transmitía de sus contactos con los dirigentes más importantes de la escena internacional cultivaba una imagen de identificación con los intereses generales de todos los franceses por encima de la contingencia gubernamental.

En la esfera nacional el gobierno Chirac se encontró con la dificultad de aplicar algunas reformas contra la legislación social y popular del periodo anterior, enfrentándose así a la opinión pública en dos ámbitos de especial sensibilidad y movilidad como son la universidad y el mundo laboral. El ministro de Educación presentó al Parlamento un proyecto en el que se perfilaba el encarecimiento de la enseñanza y una mayor selectividad. Esto provocó a finales de 1986 una ola de manifestaciones estudiantiles de carácter violento, creando fuertes tensiones dentro del gabinete y entre los miembros de la coalición que llevaron a la dimisión del ministro. Por otra parte la política salarial, sobre todo en el sector público, impuso un programa de congelación con el fin de evitar el rebrote de la inflación, y el diálogo del gobierno con los sindicatos se deterioró seriamente puesto que no obtuvieron contrapartidas favorables. Esta ruptura llevó a los sindicatos a dar

su apoyo a los empleados públicos cuando convocaron huelga nacional para el 21 de octubre de 1986. Poco después la huelga de los ferrocarriles por la reivindicación de la tabla salarial paralizó todo el país y duró 26 días arrastrando a otros sectores de la industria, correos y transportes hasta que Chirac se vió forzado a hacer concesiones. Este nivel de conflictualidad y la falta de entendimiento de Chirac frente a un presidencialismo cada vez más apreciado por la población francesa terminaron con la cohabitación.

El Presidente de la República, durante este periodo, se presentó como quien encarna los grandes intereses nacionales, mientras que Chirac se encerró en un discurso liberal que aparecía a la población dogmático y partidista. De ahí que Mitterrand encabezase la campaña electoral de 1988 bajo el lema "la France unie". El peso de la figura presidencial y su intervención decisiva hicieron que los socialistas ganaran de nuevo las elecciones presidenciales. Mitterrand disolvió entonces la Asamblea Nacional y obtuvo la mayoría relativa en las elecciones legislativas de ese mismo año 1988 nombrando primer ministro a Rocard (46).

Veinte años después del congreso de Epinay, el PS está llegando a una nueva etapa. Los principales líderes a excepción de Laurent Fabius y de Lionel Jospin, entraron en la política hace más de veinticinco años y las corrientes de pensamiento que han constituido tienen un contenido también ambiguo. Esto es quizás lo que explica la crisis de reclutamiento que actualmente conoce el partido. En 1971, en Epinay, los afiliados socialistas eran oficialmente 80.000. Cuatro años más tarde, 149.000 ; 205.000 en 1981, y a partir de aquí disminuye de nuevo la militancia alcanzando la cantidad de 177.000 el 31 de diciembre de 1989.

¿Sobrevivirá el P.S a François Mitterrand? ¿En qué situación se encontrará su funcionamiento, sus debates, sus corrientes, la rivalidad de sus jefes, pero también su

implantación electoral y militante después del Mitterrandismo?

Veinte años después del cambio generacional de 1969-1971, el P.S sufre otro cambio. En el congreso de Rennes de marzo de 1990 se ha mostrado débil y vulnerable. Se despoja de su vieja piel mitterrandista pero la nueva tarda en crecer.

Desde el estricto punto de vista del PS, el mitterrandismo nació el 13 de junio de 1971, cuando en la votación final del congreso de Epinay la moción Mitterrand gana a la de Savary, pero murió el 14 de enero de 1990, cuando Lionel Jospin y Laurent Fabius depositaron en el comité de dirección dos mociones diferentes para el congreso de Rennes (46).

El porvenir del PS depende pues de nuevo de cinco grandes corrientes constituidas para las que el mitterrandismo se ha convertido en una referencia obligatoria. Dos corrientes mitterrandistas rivales se disputan su herencia; la que se reconoce en Lionel Jospin y la que sigue a Laurent Fabius. Cada uno de ellos recoge algo menos de un tercio del partido. A su vez los partidarios de Jean-Pierre Chevènement conocen un declive que les ha devuelto a su nivel de 1971: el 8.5 por cien de los votos militantes. El resurgimiento de la corriente de Jean Popéren no ha convencido más que al 7 por cien de éstos. En cuanto a los rocardianos, representan una cuarta parte del partido pero se preguntan todavía qué papel exacto desempeñan en él (47).

Las fisuras de los años precedentes se convierten ahora en rupturas. En el congreso de Rennes se produce el estallido final. Frente a unos rocardianos que no progresan pero que se encuentran en la posición de árbitros, dos corrientes nuevas, salidas del mitterrandismo, nacen oficialmente del voto de los militantes, puesto que se oponen dos mociones "mitterrandistas": la de Lionel Jospin, Pierre Mauroy y Louis Mermaz, y la de Laurent Fabius, Pierre Bérégovoy y Pierre Joxe. El mitterrandismo

queda como una referencia obligada en el seno del PS, pero ya no es su eje mayoritario.

Sobre un fondo de crisis ideológica y estratégica, la mayoría mitterrandista se desestabiliza definitivamente por el problema de la sucesión presidencial y el enfrentamiento entre Jospin y Fabius.

Las corrientes, por tanto, vuelven a tener un papel esencial. Al contrario de lo que se oye aquí o allá, no es el PS quien autoriza en su seno las corrientes, sino que son las corrientes las que constituyen el Partido Socialista. Sin ellas, sería imposible federar el "heteroclitismo" sociológico y político del PS.

Entre bastidores Fabius y Jospin continúan disputándose el control del partido, aliandose el uno con el Poperen y el otro con el Chevènement.

La cuestión de las alianzas, en el Partido Socialista, no ha hecho más que empezar a plantearse en la perspectiva de las próximas elecciones de 1992 (regionales y cantonales) y 1993 (legislativas).

IV. EL PARTIDO SOCIALISTA ITALIANO

4.1. Un partido siempre coaligado

El Partido Socialista Italiano (PSI) después de la IIª Guerra Mundial se ha debatido en una crisis permanente, sobre todo a partir de la división interna que sufrió en el congreso celebrado en Palazzo Barberini en 1947, que marcó su futuro hasta el momento presente (1). Las circunstancias de este congreso son ilustrativas de lo que va a ser toda su batalla política posterior, y marcarán su papel histórico reduciéndolo a una función de subordinación respecto a las otras dos grandes formaciones políticas del arco parlamentario; la Democracia Cristiana(DC) y el Partido Comunista(PCI).

Un año antes, en 1946, los socialistas habían obtenido un gran éxito electoral convirtiéndose en el partido mayoritario de la izquierda, pero inmediatamente después comenzaron en su seno las luchas internas de las corrientes más extremas, la frontista que era partidaria de hacer una política común con los comunistas para mantener la unidad de la izquierda como instrumento de una política más radical, y veía en la suma de los votos de ambos partidos la oportunidad histórica de alzarse con la mayoría en el Parlamento, y la autonomista partidaria de una política socialista propia pero dividida en múltiples grupos, algunos de los cuales pretendían evolucionar hacia posiciones socialdemócratas análogas a las de sus homólogos europeos. La escisión de la corriente

socialdemócrata de Saragat, que constituiría el Partido Social Demócrata Italiano (PSDI), la identificación del partido con posiciones frontistas, que en ese momento eran mayoritarias, y el abandono de diversos grupos y militantes redujo casi a la mitad la estructura y militancia del PSI en el espacio de dos años convirtiéndolo en una formación política de pequeñas dimensiones y sin demasiado peso político (2).

Diez años más tarde los sucesos de Hungría y las revelaciones de Kruschev en el XX Congreso del PCUS dieron pie a la corriente interna que lideraba Nenni para hacer una crítica al frontismo e iniciar una etapa autonomista. Para esta corriente el frontismo había dejado en manos de la derecha, durante muchos años, los instrumentos estatales del poder y de esta manera los democristianos han gozado de una situación privilegiada para constituir, dirigir y asentar sus propias instituciones, relegando a la izquierda al papel de oposición y marginando a la clase obrera y a los sindicatos, lo que ha permitido la reconstrucción del sistema capitalista italiano. En estas circunstancias el movimiento obrero y la clase obrera han sido los más perjudicados por haber sido marginados en el proceso de reconstrucción social, al no haber tenido ningún interlocutor en el aparato administrativo capaz de asumir sus reivindicaciones. A partir de este momento la actitud socialista respecto a la democracia cristiana se hace más flexible y se inicia una aproximación a los otros pequeños partidos de carácter progresista (3).

Poco a poco Nenni va preparando al partido para colaborar con la derecha progresista en lo que a partir de 1963 serán los gobiernos de centro-izquierda, que tendrán su base de sustentación no sólo en la nueva actitud de los partidos sino en los cambios estructurales que se

han producido en Italia en la década de los años cincuenta y comienzos de los sesenta y en las reformas que esos cambios están exigiendo. Las corrientes migratorias internas, la profesionalización de las clases medias, los desequilibrios regionales, el desarrollo acelerado de la industria y los servicios y las exigencias de la evolución social reclaman una serie de cambios que Nenni recoge en su programa a comienzos de 1962. Se anunciaba ahí una política de programación económica y de reformas estructurales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los agricultores, reformar la Administración Pública, eliminar los desequilibrios entre Norte y Sur y practicar una política social asistencial en favor de las clases más desprotegidas (4).

Esta política que llevó a Nenni a la vicepresidencia del gobierno en 1963 dividió de nuevo al partido, y un gran número de militantes pertenecientes a su Ala izquierda lo abandonaron formando el Partido Socialista de Unidad Proletaria (PSIUP), recuperando así el nombre que había tenido antes de 1947. A su vez el PSI, que había llegado a posiciones más moderadas y autonomistas, comenzó un acercamiento y diálogo con sus antiguos compañeros del PSDI a fin de promover una política de unificación que, al mismo tiempo, pudiese darles un peso mayor tanto en la sociedad italiana como en el gobierno. El 37 congreso del PSI se reunió en Roma a finales de octubre de 1966 y el 14 congreso del PSDI tuvo lugar en la misma ciudad el 29 del mismo mes y en ambos congresos los delegados aceptaron unánimemente una moción a favor de la unidad. Nenni declaró que los representantes de ambas formaciones políticas reafirmaban su compromiso con la tradición socialista italiana, la unidad europea y la formación de un sindicato obrero único (5). Desde ese punto

de vista se pensaba que la unificación serviría para dar un impulso a la vida de ambos partidos y a su renovación teórica y organizativa, lo que a su vez debería influir en la vida política italiana y en el propio gobierno. Pero la fusión ,que se mantuvo entre 1966 y 1978, fue muy superficial porque dejó los aparatos organizativos de los dos partidos intactos y separados. Mientras ambas formaciones participaron en el gobierno las relaciones fueron bien, pero tan pronto como el centro-izquierda entró en crisis, la unidad se hundió. Los problemas que existían antes de la unificación persistieron después, sobre todo debido a la escasa habilidad que demostró el PSI para presionar sobre la Democracia Cristiana para cambiar la política de reformas. El bloqueo de la ley Fortuna sobre el divorcio, el escaso aumento de las pensiones y la falta de acuerdo sobre la reforma de la universidad llevaron a la derrota electoral de los socialistas en las elecciones generales de mayo de 1968 en las que el Partido Socialista Unificado (PSU) recibió el 14,5 por cien de los votos, que aun siendo una cuota electoral significativa suponía una pérdida de electores respecto al 20 por cien que habían recibido ambos partidos juntos (PSI-PSDI) en las elecciones de 1963 (6). En el congreso de Roma de 1968 el PSI volvió a su antigua denominación y Nenni fue confirmado de nuevo como Presidente del partido. Este episodio supuso a su vez una interrupción en la colaboración de los socialistas con el gobierno, por lo cual los demócrata-cristianos formaron un gobierno monocolor, pero poco después el socialista De Martino accedió a la vicepresidencia del gobierno con Rumor como Presidente y será en este periodo, que comienza en 1970, cuando se aprobará el Estatuto de los Trabajadores,

la Ley de Financiación de las Regiones, y la del divorcio pasará por el Senado. Tres leyes de iniciativa socialista que constituyeron un signo inequívoco de la vertiente progresista del gobierno de centro-izquierda. Pero a pesar de ello los socialistas, atacados por su actitud respecto a diversos acontecimientos sociales, minados por las corrientes internas y criticados por la derecha y la izquierda respecto a su postura en el gobierno, sufren una fuerte crisis que les lleva en 1972 a obtener solamente el 9,6 por cien de los votos en las elecciones generales.

En el congreso de Génova de 1972 se llevó a cabo un análisis a fondo de las causas y consecuencias de la crisis del partido y será el exsecretario Mancini quién pondrá de manifiesto algunos de los problemas clave todavía no resueltos y clarificará la postura del partido respecto a las formaciones políticas mayoritarias que protagonizan la vida política italiana. Sobre el tema de las relaciones con el PCI declara: "nosotros hemos afirmado siempre que nuestras relaciones con el PCI tienen un sesgo particular que las diferencia respecto al resto de los otros partidos italianos; y no es necesario explicar ni el porqué de esta exigencia nuestra ni cómo tal exigencia puede, en alguna medida, significar una disminución o limitación de nuestra autonomía en la vida del partido y en sus prioridades políticas. Hemos afirmado el interés de toda la nación en la convergencia con el PCI en formas de lucha democrática y de objetivos democráticos: y ha sido con estas miras, es decir con la visión de una exigencia primaria de una política reformista en la puesta en práctica de la Constitución, como hemos regulado nuestras relaciones con el PCI, rechazando siempre, con serenidad pero con firmeza, toda sugerencia de acercamiento político inadecuado y

contraproducente que a nuestro juicio sería una marcha atrás y no haría avanzar la lucha política en Italia". "Debe ser orgullo nuestro la capacidad de haber sabido, más que cualquier otro partido, renovar de forma autónoma nuestra política sin renegar de todo lo positivo e importante que se ha realizado con la política de centro izquierda, con la presencia de los socialistas en el gobierno central, en las regiones y en las instituciones locales" (7). Fue en esta situación, frente a la embestida para que se frenase la política de reformas, cuando el PSI caracterizó su presencia en el gobierno como una política de nuevos equilibrios que ha supuesto una reacción al debilitamiento de la línea reformista.

Respecto a la Democracia Cristiana Mancini afirmaba: "Un momento central de la política socialista, desde hace ya casi quince años, es el desarrollo de las relaciones entre nuestro partido y el movimiento católico, relaciones que el cambio centrista no debe debilitar sino por el contrario reforzar. Precisamente por esto me parece oportuno reexaminar y repensar el problema de nuestras relaciones con la Democracia Cristiana para profundizar en el conocimiento de este partido y de la realidad católica en su complejidad. Me parece oportuno sobre todo, tratar de dar una respuesta, al menos parcial, a un interrogante que ha sido tratado siempre con demasiada ligereza : la razón por la cual, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes de Europa, desde hace casi treinta años los católicos permanecen en el poder en Italia. Italia es un país permeado de valores católicos, pero esto no es suficiente para explicar los veinticinco años de poder de la Democracia Cristiana a pesar de los cambios que en este periodo se han producido en nuestro país. Como tampoco se puede explicar con la definición de que la Democracia Cristiana es un partido abierto, porque esto no explica nada. Por tanto debemos concluir necesariamente que la permanencia de la DC es el fruto de políticas eficaces respecto a la realidad aunque éstas hayan sido llevadas a la práctica sin demasiados prejuicios. La DC ha sabido

renunciar al mundo agrario y afrontar la problemática de los tiempos modernos y, con el tiempo, ha extendido sus raíces por todo el país a través de las organizaciones católicas y los numerosos canales de la estructura del Estado. Ahora bien, el centrismo en la Italia de los años 70 sólo puede contar con las fuerzas de la derecha. Pero debemos decir que todos las grandes realizaciones de la política nacional -desde la República a la reorganización regional, desde el giro a la izquierda a situarnos entre los países pacíficos del mundo, desde la enseñanza obligatoria al estatuto de los trabajadores- llevan la firma y la lucha de los socialistas. Y sabemos que todos los acontecimientos que han de venir, si se trata de reformas democráticas, o vendrán con nosotros o no vendrán. No es verdad que tengamos la intención de cerrar el discurso político y de colaboración con la DC sino todo lo contrario" (8). Mancini acababa proponiendo reanudar la política reformista del centro-izquierda a través de la colaboración parlamentaria para solucionar las cuestiones más urgentes.

Así pues el congreso de Génova sienta las bases para una reapertura del diálogo con la DC a fin de volver a gobiernos de centro-izquierda y en 1973, cuando Rumor vuelve a la presidencia del Consejo de Ministros, los socialistas ingresarán de nuevo en el gabinete, siendo su última participación en 1974 después de la victoria del referéndum sobre el divorcio. La entrada de los socialistas

en el gobierno Rumor de 1973 tenía como motivación política fundamental frenar el giro a la derecha que se estaba produciendo en la DC y, en alguna medida, mantener el equilibrio entre las fuerzas democráticas del país. Con esto se cerraba un periodo político constituido fundamentalmente por gobiernos de centro-izquierda que en principio abrieron grandes expectativas entre la población pero que poco a poco se mostraron poco eficaces para resolver muchos de los problemas que presentaba una realidad italiana dinámica y cambiante (9). El tira y afloja de los partidos, sus rencillas internas y externas y la propensión a hegemonizar determinadas áreas del poder estatal sin sufrir interferencias, ahogaron muchas de las propuestas políticas e impidieron que otras alcanzasen soluciones satisfactorias. Aun así se aprobaron algunas leyes importantes como el Estatuto de los Trabajadores, la de la vivienda y el divorcio, y en general se puede decir que la polémica política contribuyó a poner de manifiesto muchos de los problemas no resueltos no sólo en la esfera social sino también en la política, aunque la prioridad de los intereses partidistas muchas veces restó posibilidades a la eficacia del gobierno.

Terminada la experiencia del centro-izquierda, y en vísperas de las elecciones generales de 1976, el 40 congreso de los socialistas italianos se presentaba como una oportunidad para alcanzar el consenso interno entre las corrientes, como así fue, etiquetando las conclusiones políticas y la estrategia a seguir con el nombre de "Alternativa", un concepto que resultó sin embargo muy confuso y que en cualquier caso no consiguió aclarar cuál iba a ser su postura en la vida política italiana, aunque era evidente que trataba de hacer frente a la estrategia del PCI de establecer un "compromiso histórico"

con la DC, y afirmaba que no volvería al gobierno si no era para introducir en la sociedad los profundos cambios de que estaba necesitada, y no formarían parte de ninguna coalición donde no estuviesen presentes los comunistas.

Junto a esta dificultad de entender el mensaje socialista para las elecciones generales de 1976 preocupaba en el partido el problema de las fracciones internas. Nenni ya en el 34 congreso del partido que se celebró en Milán en marzo de 1961, después de que se acordase por primera vez formar gobiernos de centro-izquierda en la Administración regional y local, advirtió que el "fraccionalismo había sido la enfermedad interna del partido desde hacía cuatro años, y el hecho todavía más grave era que la rigidez de las corrientes hacia que se trasformasen en fracciones. No había ninguna sesión de trabajo en el Comité Central ni una sola votación en la que las fracciones no pudieran ser reconocidas automáticamente. Es más, todos los argumentos polémicos contra el partido los ha alimentado el propio partido, y durante las elecciones los ataques de comunistas y demócrata-cristianos se han basado en argumentos que las diversas fracciones proporcionaban a la prensa". Pero aunque el partido reconoció que las corrientes habían cristalizado hasta dar vida a rígidas organizaciones verticales, indicando los peligros de esta situación que podría desembocar en la conversión de un partido de masas en un partido de opinión, a pesar de ello no se tomó ninguna medida ni resolución (10).

Mientras duraron los gobiernos de centro-izquierda surgieron nuevas corrientes. Así durante el primer gobierno de 1964 apareció la corriente lombardiana que se situó en una posición intermedia entre

la mayoría autonomista de Nenni y De Martino y la izquierda que permaneció fiel al partido. Después del fracaso de la unidad entre el PSI y el PSDI, en el congreso de Roma, la corriente liderada por Mancini -"Presenza Socialista"- conquistó la mayoría relativa por delante de las corrientes "Riscosa" de De Martino, "Rinnovamento" de Tanassi, "Sinistra" de Lombardi y de "Inpegno", un pequeño grupo encabezado por Giolitti, situándose por encima de todo este fraccionalismo la figura de Nenni como Presidente del partido (11).

Estas corrientes y fracciones que en mayor o menor medida se reparten la militancia del partido forman alianzas ocasionales para conquistar la dirección, o rompen estas alianzas para favorecer otras que estén más de acuerdo en ese momento con sus intereses ideológicos y políticos. De esta manera algunos de los líderes socialistas ascienden o descienden a la secretaría general en repetidas ocasiones como sucede con Mancini o De Martino, y en algunos casos, todos forman parte de la dirección del partido aunque sea a distinto nivel, como sucedió después del 40 congreso.

Pero fue paradójicamente en ese momento de 1976 cuando los socialistas sufrieron una de sus derrotas electorales más graves que favoreció a los resultados obtenidos por los comunistas, quienes consiguieron el porcentaje más alto de votos de la postguerra llegando a alcanzar un 34,4 por cien frente a un 38,8 en que se mantuvieron los demócrata-cristianos y al 9,6 por cien en que permanecieron los socialistas. Es un momento de confusión y de críticas. Desde dentro del partido se lanzan diversas estrategias al tiempo que se toman distancias tanto de la DC como del PCI. La línea autonomista había avanzado la estrategia de "los

"equilibrios más avanzados" una tesis confusa que trata de reformar la sociedad italiana con la inseguridad que supone su propio apoyo electoral y sin una clara estrategia de alianzas, puesto que aunque el PSI se escoraba a la izquierda las interpretaciones sobre la forma de coaligarse con los comunistas eran tan diversas como las mismas corrientes internas.

Mientras tanto el Partido Comunista relanzaba la propuesta del "Compromiso Histórico", una iniciativa que había inspirado su secretario general Enrico Berlinguer en 1973, y que había encontrado una cierta resonancia en la izquierda demócrata-cristiana, sobre todo en la figura de Aldo Moro quien desde hacía tiempo acariciaba la idea de la colaboración cristiana y comunista. El "Compromiso Histórico" era la propuesta comunista para una amplia alianza de todas las fuerzas políticas y sociales que estuviesen dispuestas a colaborar en un gran pacto democrático, con la finalidad de llevar a cabo una reforma paulatina de las instituciones sin alterar la estabilidad del marco democrático. Esto implicaba fundamentalmente el compromiso de las dos grandes fuerzas políticas del país, que serían los protagonistas del cambio, mientras que relegaba a un plano secundario a aquellos partidos con un peso electoral menor, con lo cual dentro del arco parlamentario de la izquierda el Partido Comunista se convertía prácticamente en partido hegemónico, dejando al PSI en una posición marginal y subsidiaria.

Desde el lanzamiento de la propuesta del "Compromiso Histórico" hasta su plasmación definitiva en el XIV congreso del PCI celebrado en Roma en marzo de 1975 Italia había conocido un nivel de discusión política inusitado en todos los ámbitos, en el seno de los partidos políticos, de

los sindicatos, en las fábricas, los barrios, las escuelas y las universidades. En esta discusión se había debatido ampliamente la crisis de la sociedad italiana y la incapacidad de la Democracia Cristiana para afrontar con imaginación y nuevas soluciones los profundos cambios que desde finales de la década anterior estaba experimentando la sociedad. Por otra parte los últimos gobiernos de centro-izquierda habían puesto de manifiesto que ni siquiera la participación de los socialistas en el poder era capaz de arrancar reformas más radicales, e incluso que los propios socialistas con esta conducta política se encontraban a menudo con fuertes contradicciones que tenían resultados negativos para el propio partido. Se trataba por tanto de una propuesta que pretendía renovar la dirección política del país y aunar la voluntad de la sociedad civil para trabajar sobre bases comunes, una renovación política y social que alcanzase a todos los rincones de la sociedad, un programa de transformaciones sociales -como afirmaba Berlinguer- que no suscitase la hostilidad de las clases intermedias sino que contase con el consenso de la gran mayoría de la población (12).

Dentro del partido socialista la posición más cercana a esta hipótesis era la de los "lombardianos" que desde hacía tiempo defendían una posición de coalición con el PCI. Ya en 1969, con motivo del avance de las fuerzas de izquierda, Lombardi había puesto el acento en la necesidad de un programa de reformas más profundo y de rescatar el poder del Estado de las manos de la burguesia. Se trataba, por tanto, de trasladar al aparato estatal la misma fórmula de gobierno que se había aplicado en las regiones y en los ayuntamientos. Por su parte, la corriente de Nenni y la de Mancini

no

rechazaban

abiertamente esta propuesta que poco a poco se había abierto un camino dentro del partido; es más, el propio Nenni había afirmado que después del Referendum sobre el divorcio la sociedad italiana ya no era lo que había sido hasta ese momento y que las fuerzas del progreso se abrían camino hacia una política que encontraría mayor receptividad en una sociedad más secularizada. Ahora bien, ambas corrientes no eran partidarias de presentar una alternativa "tout court" frente a la derecha sino que para llegar a ese punto había que pasar todavía por etapas de mediación, por lo que ellos proponían un pacto a tres, es decir, PCI-DCI y PSI (13). Se inició así un largo debate sobre el "Compromiso Histórico" mientras se sucedían los gobiernos de centro-izquierda en los que participaban sistemáticamente los socialistas. El fracaso de Fanfani en el referéndum sobre el divorcio provocó que los socialistas presionaran sobre De Martino para dejar el gobierno, lo que sucedió a finales de 1974. De Martino declaró que en adelante el PSI colaboraría con la DC sólo en aquellos gobiernos que contasen con el apoyo del PCI y los sindicatos.

Así pues, el partido continuaba dividido sobre la cuestión de las alianzas y mientras De Martino y Giolitti eran partidarios de la colaboración con los comunistas, Mancini pedía que se mantuviesen las distancias respecto de los dos grandes partidos. En medio de este debate y después del serio revés electoral que habían sufrido los socialistas se reunió en julio el Comité Central que ante la dimisión presentada por De Martino decidió renovar toda la dirección del partido nombrando Secretario General a Bettino Craxi.

Los candidatos a la Secretaría General habían sido dos, Giolitti, que seguía los pasos del anterior secretario

y contaba además con el apoyo de Ricardo Lombardi, y Craxi, partidario de un PSI con proyecto propio y autónomo, que había sido vicesecretario del partido desde 1970, era un hombre de confianza de Nenni y representaba la imagen de un hombre nuevo capaz de llevar a cabo la renovación del partido que ya no se podía aplazar. Conviene recordar que a principios de 1970 cuando Mancini alcanzó la Secretaría General trató de contrarrestar los efectos del fracaso de la unidad socialista creando tres vice-secretarías que correspondiesen más o menos a las corrientes internas del partido, lo que permitió el acceso de Craxi a una de ellas como representante de la corriente autonomista y fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores. Quizá por esto, y debido también a su escaso peso entre las bases, todas las corrientes quedaron representadas en la primera Secretaría de Craxi en un intento de unificar las diversas fuerzas del partido después de la derrota electoral y para afrontar además los problemas que presentaba la sociedad y, sobre todo, la posible entente gubernamental entre PCI y DC.

Craxi consideró como premisas fundamentales para relanzar el partido la clarificación ideológica y el fortalecimiento de la organización. Era un programa autonomista en línea con lo que había sido su postura tanto en el ámbito de las corrientes internas como en el organizativo ya que durante quince años había mantenido un control absoluto sobre la difícil federación de Milán, puesto que consideraba que el control local era imprescindible para su imagen nacional. Sin estas premisas era imposible llevar a cabo ningún programa de reformas. Sus primeras medidas afrontaron la división interna del partido en fracciones que, según él, eran la causa de su parálisis. No se trataba de estructurar el partido bajo la fórmula del centralismo

burocrático pero tampoco de permitir su división en clientelas locales. Una tarea inmediata era lanzar a los militantes hacia actividades externas para que la sociedad sintiese una mayor presencia del partido en la vida cotidiana, ya que existía un contraste entre la aceptación de la ideología y el programa de los socialistas y su traducción en votos. Así pues, la única solución era la reorganización y el aumento de su eficacia política (14).

El ataque a las corrientes internas tuvo su primer asalto al cabo de año y medio con motivo del 41 congreso celebrado en Turín, donde la coalición Craxi-Signorile, que duraría unos cuantos años, obtuvo el 65 por cien de los votos frente a la coalición por la Alternativa capitaneada por De Martino y Manca, que alcanzaron el 25,9 por cien de los votos a quienes se unió Mancini con un 7 por cien.

Poco después la corriente de De Martino se autodisolvió y la de Mancini perdió un considerable número de sus seguidores. De esta manera a medida que Craxi controlaba más el partido, la oposición interna, que defendía la estrategia de la Alternativa, se iba debilitando y aumentaban su fuerza las ideas que proponían facilitar la gobernabilidad y fomentar un bloque laico de pequeños partidos alrededor de la importancia y centralidad de los socialistas (15).

Respecto a la clarificación ideológica, después de la elección de Craxi y con motivo de la reunión organizada por la revista Mondoperaio sobre "la questione socialista dopo il 20 giugno", se abrió un debate político y cultural que tendría mucha influencia en las posiciones políticas del PSI en los años siguientes (16). La reflexión ideológica dentro del partido socialista había

seguido tradicionalmente dos líneas diferentes; una de ellas defendía el "revisionismo democrático" y pretendía que el PSI asumiese las características típicas de las socialdemocracias europeas; sus representantes más significativos eran Nenni, a nivel político, y Bobbio a nivel cultural. A esta línea se había opuesto un revisionismo de izquierdas defendido por Panzieri, Foa y Basso, quienes partiendo de una crítica al estalinismo trataban de encontrar una nueva estrategia revolucionaria basada sobre la autonomía de la clase obrera en las estructuras productivas del capitalismo y en los procesos de burocratización interna del partido. Esta segunda versión se había identificado con el PSIUP, había dado lugar a la creación de la revista Quaderni Rossi, y en aquellos años alimentó la protesta universitaria y la lucha obrera (17).

Ahora bien el momento ideológico reformista más reciente del PSI comienza cuando Craxi se propone recuperar parte de lo que él llama el espacio socialista ocupado por el Partido Comunista tratando de distanciarse de las propuestas del PCI con un ataque a dos de sus figuras históricamente más representativas, Togliatti y Lenin. En un artículo publicado en L'Espresso titulado "Il vangelo socialista" Craxi atacó a los comunistas afirmando que el leninismo es la justificación filosófica del derecho histórico de los intelectuales para gobernar a la clase obrera de forma autocrática; institucionaliza el centro único de poder, y sobre esta base trata de resolver todos los problemas de la existencia humana. Leninismo y pluralismo son términos antitéticos y de ahí la incompatibilidad que hay entre comunismo y socialismo. Por el contrario, el socialismo busca la socialización de los valores del liberalismo, la difusión del poder, la distribución igualitaria de la riqueza, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento

de las instituciones que fomentan la participación de la clase obrera en el proceso de toma de decisiones (18). Este artículo desencadenó una fuerte polémica entre socialistas y comunistas con el resultado previsto de un alejamiento de sus posiciones y el hostigamiento del resto de las fuerzas políticas al PCI que, finalmente, antes de afrontar una política de austeridad con la que sus bases no estaban de acuerdo retiró la confianza al gobierno demócrata-cristiano obligándole a convocar elecciones anticipadas para comienzos de 1979. En estos comicios el PCI perdió un 4 por cien de los votos y los socialistas tampoco superaron su porcentaje electoral de 1976. Sin embargo, pocos días después, con motivo de las elecciones europeas, estos últimos sobrepasaron el 11 por cien de los votos, lo cual confirmaba al PSI como tercera fuerza y a Craxi como líder indiscutible que comenzaba a subir el listón electoral de los socialistas. Esto le dio pie a insistir en la tesis política de la gobernabilidad, de tal manera que cuando Andreotti fracasó en su primer intento de formar gobierno, después de estas elecciones, Pertini pasó el encargo a Craxi que en esta ocasión contaba con el apoyo de la derecha demócrata-cristiana, pero no de su izquierda, que lo hizo imposible. Aun así era la primera vez en muchos años que un Presidente de la República encargaba la formación del gobierno a un socialista.

En estas circunstancias no hubo que esperar mucho para el reingreso de los socialistas en el gobierno. Tan pronto como el ala derecha de la Democracia Cristiana ganó el siguiente congreso, su posición se hizo favorable a la colaboración socialista y al rechazo de los comunistas. Así en 1980, después de seis años de paréntesis, nueve ministros socialistas volvían a asumir tareas gubernamentales

en gabinetes que serían formados por cinco partidos (el pentapartito) y donde los socialistas, dado el número de carteras que ostentaban, no parecía que tuviesen un papel subalterno (19). A Craxi se le presentaba una excelente oportunidad para aplicar su estrategia de la "centralidad socialista" es decir, la de tomar distancias tanto de la DC como del PCI con el fin de convertirse en el fiel de la balanza para la imprescindible política de alianzas que se necesitaba para gobernar. Su objetivo era transformar dentro del sistema de partidos la "centralidad funcional" de árbitro de la mayoría en "centralidad estructural" (basada en la fuerza política y electoral) y para ello trataba de unir la táctica de la erosión del sistema clientelista de la DC al desarrollo de un bloque laico liderado por los socialistas (20) que polarizase la dimensión política de todos los pequeños partidos progresistas.

A su vez en el 41 congreso celebrado en Palermo en 1981, Craxi introdujo una modificación estatutaria importante, como era la elección directa del Secretario del partido, con el objetivo de favorecer la "gobernabilidad". Si a esto añadimos que Lombardi después de suceder a Nenni en la presidencia del partido había dimitido en 1980, y su corriente de izquierdas se había disipado, Craxi conseguía finalmente la tan ansiada unidad del partido y alcanzaba por primera vez en muchos años el 14 por cien de los votos en las elecciones regionales. Los socialistas todavía participarían en los dos gobiernos siguientes encabezados por el laico Spadolini, que había accedido al puesto de Primer Ministro después de la victoria electoral sobre el aborto. Pero la gran oportunidad para Craxi se presentaría después de las elecciones de 1983 cuando la DC tuvo una

caída de 5,4 puntos y aunque la subida socialista no fue demasiado significativa, de un 1,6 (11,4 por cien), del voto sin embargo su paso a la oposición hacia imposible cualquier tipo de gobierno demócrata-cristiano.

Este sensible descenso del voto en la derecha desencadenó una serie de críticas y luchas internas principalmente contra su secretario general De Mitta, que desembocaron en la dimisión de Amintore Fanfani como Primer Ministro. La crisis fue aprovechada por Craxi para hacer un llamamiento a todos los pequeños partidos laicos y progresistas, que en conjunto habían alcanzado un 23,5 por cien de los escaños en el Parlamento.

Este llamamiento se basaba en algunas de las premisas aprobadas en el programa del PSI de 1981: mayor estabilidad gubernamental, reformas institucionales, terminar con las votaciones secretas en el Parlamento, ampliar las competencias regionales, terminar con el fraude fiscal, un plan económico que durase al menos tres años y, sobre todo, terminar con la inflación que sobrepasaba ya el 15 por cien. Ante esta crisis de la DC y a la vista del programa reformista del PSI, el Presidente de la República Sandro Pertini encargó a Craxi la formación de un nuevo gobierno, del que tomó posesión a comienzos de agosto de 1983 con un programa en el que se daba prioridad a las medidas económicas y sobre todo a la reducción de la inflación para que descendiese desde un 15 por cien en 1983 a un 10 por cien en 1984 y el déficit público del 16 al 14 por cien del PIB. La mayor parte de este ajuste económico se pensaba hacer a través de la disminución del gasto público y de la moderación salarial. Con esta política se esperaba mantener los salarios reales constantes mientras se tomaban medidas para incentivar la inversión y estimular la innovación

tecnológica. Pretendía también introducir nuevas medidas para regular las huelgas especialmente en los servicios esenciales. Por otra parte el gobierno se comprometía a aumentar el empleo, facilitar el aumento del empleo a tiempo parcial, lanzar un programa de creación de puestos de trabajo en el Mezzogiorno, y, por último, proponía una reforma del Estado de Bienestar que primase la eficiencia, redujese los gastos y garantizase a los más necesitados un nivel de vida mínimo (21).

4.2. De la división interna a la unidad

Aunque en el apartado anterior ya hemos aludido a la vida interna del partido comentando algunos aspectos de sus fracciones y alianzas, debido a la importancia que adquirieron en este periodo de su vida y evolución política, en éste vamos a dar una idea más detallada siguiendo el esquema del libro. Ya hemos dicho también, al comienzo, que el Partido Socialista Italiano después de la II Guerra Mundial pasó en muy pocos años de ser el partido mayoritario de la izquierda a ocupar un papel subordinado - (recordemos que en 1946 obtuvo el 20,7 por cien de los votos y en 1953 el 12,7 por cien) -, sufriendo una crisis profunda en la década de los 70 en la que nunca alcanzó el 10 por cien de los votos del electorado frente a un Partido Comunista que triplicaba su fuerza política (TABLA 1).

TABLA 1

RESULTADOS ELECTORALES 1946-1983

	1946	1948	1953	1958	1963	1968	1972	1976	1979	1983
D.C.	35,1	48,5	40,1	42,3	38,3	39,1	38,7	38,7	38,3	32,9
P.C.I.	18,9		22,6	22,7	25,3	26,9	27,1	34,4	30,4	29,9
					31,0					
P.S.I.	20,7		12,7	14,2	13,8	14,5	9,6	9,6	9,8	11,4
P.S.D.I.	-	7,1	4,5	4,6	6,1		5,1	3,4	3,8	4,1
PRI	4,4	2,5	1,6	1,4	1,4	2,0	2,9	3,1	3,0	5,1
PLI	6,8	3,8	3,0	3,5	7,0	5,8	3,9	1,3	1,9	2,9
M.S.I.	-	2,0	5,8	4,8	5,4	4,5	8,7	6,1	5,3	6,8

De ahí que la mayor parte de los estudios coincidan en aceptar como válida la valoración de Norberto Bobbio cuando afirmaba que el PSI había sido siempre un partido "coaligado" pero nunca un partido "coaligante" en la larga serie de gobiernos que se han sucedido desde la postguerra, y esto expresa claramente su condición de aliado subalterno en todas las coaliciones que han encabezado siempre los partidos mayoritarios, la DC a nivel estatal y, en su caso, el PCI a escala local y regional.

La élite del partido fue siempre la misma desde la época de su lucha contra el fascismo hasta el asentamiento de la democracia; sólo después de 1976, y con motivo del ascenso de Craxi a la Secretaría General, hubo un profundo cambio generacional. En 1977 más de la mitad de los 6000 cargos dirigentes elegidos en los comités provinciales accedían por primera vez a ese puesto (22), en lo que se bautizó como la llegada al poder de los cuarentones. Un proceso que tuvo su prolongación tanto en los sucesivos congresos regionales como en el propio Comité Central. Poco

a poco desaparecieron los grandes protagonistas de la escena política socialista de la postguerra, como De Martino, Mancini o Lombardi, lo cual también repercutió en el cambio de los representantes del partido en la Cámara de los Diputados.

1976 es un año clave en la reciente evolución del PSI, puesto que se venía arrastrando una grave crisis estructural muy influenciada por la división entre las corrientes internas. Cuando este problema parecía haber llegado a un punto de solución, con motivo de la preparación del 40 congreso, puesto que los diversos grupos consiguieron ponérse de acuerdo para adoptar una estrategia en sus alianzas y apoyar la misma resolución congresual, esta esperanza unitaria fracasó al no obtener en las elecciones más que un 9,6 por cien de los votos, es decir el mismo resultado que en 1972. El estancamiento electoral fue una de las principales causas que llevaron al cambio en la Secretaría General y a la reestructuración interna de las corrientes. Craxi depositó la Secretaría de Organización en manos de Gianni De Michelis quien aprovechó la renovación generacional del partido para maniobrar a favor de la corriente autonomista que, junto a la corriente de Lombardi, dominó el partido hasta comienzos de la década de los 80.

Conviene no olvidar que las corrientes en los partidos políticos italianos son grupos muy organizados, que mantienen sus propios minicongresos o reuniones, con finanzas propias y liderazgo oficial reconocido por todos. Si el partido forma parte del gobierno las corrientes quieren obtener su cuota de representación política al más alto nivel (23). Los líderes de los partidos determinan anticipadamente, en la dirección del partido, el porcentaje

de candidatos que corresponden a cada corriente en el Comité Central. Estos porcentajes se sacan de los resultados electorales que han obtenido las listas de cada corriente en los congresos provinciales y regionales.

Estas corrientes internas hacen sentir su voz y voto sobre todo en los congresos, donde exponen su postura política y tratan de agrupar los votos de sus delegados así como de establecer alianzas con otras corrientes más o menos afines a fin de hacerse con el control del partido. En el caso italiano las corrientes han exigido siempre estar representadas, proporcionalmente al número de sus seguidores, en todas las instancias internas de representación política desde la Secretaría General hasta las agrupaciones locales.

Giorgio Ruffolo ha explicado las corrientes internas socialistas clasificándolas en dos grandes grupos: la corriente del reformismo pragmático y la del reformismo radical. El reformismo pragmático acepta el sistema de relaciones de producción capitalista, rechaza la ruptura y aboga por cambiar el sistema a través de las reformas; desconfía de los proyectos sociales a largo plazo, insiste sobre el gradualismo y prioriza las reformas de la estructura política sobre las de la estructura económica. El reformismo radical propugna la ruptura con las estructuras capitalistas tradicionales, permaneciendo fiel a la visión de una transformación socialista del sistema, y prioriza la programación económica sobre las fuerzas del mercado. La reforma va más allá del ámbito político y busca sobre todo incidir en el aparato productivo y en el funcionamiento económico de la sociedad (24). Estas discusiones han sufrido altibajos en función de la línea ideológica y la estrategia que el partido adoptaba en cada momento, pero

estuvieron siempre muy vinculadas a la política de alianzas que es en realidad la que ha motivado siempre la vida política del partido. Según Cazzola, en la época del centro-izquierda pasarse de una corriente a otra significaba perder prestigio y cargos políticos, mientras que a partir de la era Craxi éste ha premiado a aquellos que desde otros grupos se han pasado al suyo.

A pesar de ser un partido pequeño, el PSI ha estado sembrado de corrientes y subcorrientes representadas por sus propios jefes de fila. Nenni fue líder de la corriente "Autonomía" desde 1957 a 1972, Ricardo Lombardi guió su propia corriente desde 1964 a 1976, De Martino encabezó la suya desde 1965 y Giacomo Mancini desde 1970. Había minicorrientes tan pequeñas como la de Michele Achilli una pequeña escisión de los lombardianos, que llegó a tener el 3,95 por cien de los votos (25). Una muestra de las variaciones porcentuales de las corrientes en el período que nos ocupa nos la da la tabla siguiente (TABLA 2) (26).

TABLA 2
Variaciones porcentuales de las corrientes en el PSI

	Congresos de 1976	1978	1981	1984
Reformistas				
(autonomistas,-----)	14.0		70.0	70.0
craxianos.)		65.0		
Izquierda socialista-----	18.0		20.0	25.0
(Lombardianos)				
Izquierda unida-----	42.5	24.0	7.7	
por la alternativa		4.0		5.0
(De Martino, Achilli)				
Presencia Socialista-----	20.0	7.0	2.3	
(Mancini, Landolfi)				
Bertoldianos -----	5.5	---	----	

Ya hemos mencionado en el capítulo anterior que De Martino trató de sacar adelante en 1976 una declaración que pretendía abolir las corrientes, pero no tuvo ningún éxito. Fue Craxi quien de forma pragmática, y según algunos muy autoritaria, terminó poco a poco con ellas, sobre todo cuando agrupó en torno a él a todos los autonomistas y Signorile se convirtió en el líder de la izquierda socialista después de la retirada de Lombardi.

Craxi y Signorile sellaron un pacto sobre el necesario reforzamiento de la autonomía política del PSI antes de presentar cualquier alternativa de gobierno a la Democracia Cristiana. Este pacto terminó con el resto de las corrientes y desembocó, en 1984, en un proceso de concentración con motivo del 43 congreso celebrado en Verona donde se aprobó un sistema de elección directa no sólo del Secretario General, ya aprobado en el Congreso de Palermo de 1981, con lo que esto suponía de dominio absoluto del Secretario en las decisiones políticas, sino también de las secretarías de las federaciones y de los secretarios regionales. Merkel afirma que Craxi ha sido el primer líder socialista italiano que ha reconocido públicamente la obsolescencia de los grandes partidos de masas incapaces de adaptarse a la rapidez con que se producen los cambios sociales. La funcionalidad de estos partidos no garantiza la gobernabilidad de sociedades altamente complejas. Con todo Craxi ha mantenido intacta la estructura organizativa de su partido como partido de masas, a pesar de las voces que en los últimos congresos socialistas se han pronunciado a favor de un cambio radical en la organización interna. De esta manera se ha puesto de manifiesto, cada vez más, la neta separación entre la "alta política", que se delega en unos pocos líderes y se sustrae al control interno del partido, y

una práxis de autonomía amplísima respecto de la dirección central en el ejercicio del poder periférico. En este sistema las élites periféricas del partido mantienen la autonomía de las decisiones a nivel local en los temas políticos (27).

Esta "americanización" de la vida política del partido le ha llevado a alcanzar el 14,3 por cien de los votos en 1987, y a superar el 18 por cien en las elecciones administrativas parciales de 1988. Es decir que en un decenio el PSI ha pasado del 9,8 por cien de los votos al 14,8 por cien aumentando así 5 puntos.

Aun así, la apreciación más reciente sobre la composición humana del partido, confiere la mayoría a los afiliados pertenecientes a la clase obrera, que vendrían a ser el 35 por cien del total de los militantes, el resto serían un 27 por cien de empleados, un 17 por cien de comerciantes y artesanos, un 12 por cien de profesionales liberales y empresarios, un 5 por cien de enseñantes y un 4 por cien de agricultores. Parece, pues, que en los últimos años ha habido un aumento de la base obrera del partido que probablemente ha sido captada por su marcado carácter reformista, puesto que el número de afiliados obreros hace algunos años era del 25,9 por cien, si bien sólo un bajísimo porcentaje de ellos llegaba a cargos políticos de cierta responsabilidad. La mayor parte de los cargos socialistas posee estudios superiores aunque sólo el 6,5 por cien de los militantes tienen este grado de formación, es decir que una minoría de cuadros ocupa la mayoría de los cargos políticos.

Por otra parte el PSI está por debajo de la media de los partidos socialdemócratas europeos en cuanto a la participación de las mujeres, puesto que sólo el 14,7 por cien de su militancia es del sexo femenino.

4.3. Estrategias para el éxito

En Italia muchos de los partidos del arco parlamentario de centro izquierda se muestran casi unánimes en las líneas de política económica que deberían seguirse para alcanzar los objetivos de crecimiento y distribución que se proponen. El desacuerdo entre ellos aparece no en la lucha contra la inflación, el paro o la desigualdad social, sino en cómo lograrlos, es decir en las medidas que se deben tomar y el tiempo requerido para afrontarlas. Por tanto los objetivos del partido socialista eran de todos conocidos y compartidos por muchos; el problema se encontraba en que Craxi pretendía realizarlos en un tiempo breve y según una escala particular de prioridades.

En el segundo semestre de 1983 Craxi pensó que era prioritario el objetivo de una reducción drástica de la inflación dada la diferencia que había a este respecto entre Italia y los países industrializados, salvaguardando en lo posible los objetivos de un crecimiento continuo de la producción y de la mejora de las condiciones de vida sin limitarla a una parte de la población. Esta línea de política económica requería emplear con decisión y coherencia una multiplicidad de medidas que hiciesen creible la acción del gobierno. Esto explica la firmeza y obstinación gubernamental cuando se adoptó, a comienzos de 1984, un conjunto de medidas para controlar la dinámica de las rentas y de la distribución equitativa de los impuestos, lo cual acompañado de una política

monetaria rigurosa llevó, según algunos, a una disminución de la inflación, a la recuperación de una parte del mercado en el marco de un comercio mundial en expansión, a la reactivación de la producción y al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios (28).

En efecto a comienzos de los años 80 la orientación general de la política económica daba prioridad en todos los países a la lucha contra la inflación con la convicción de que pronto habría también una recuperación económica internacional y había que estar preparados para competir en el mercado. Dos cambios precisos marcaron la acción de Craxi en su lucha contra la inflación: a) la adopción de una línea severa y constante de política monetaria, y b) las modificaciones que se introdujeron en los mecanismos de indexación salarial, y en general la firmeza en la actuación sobre la política de rentas. Esta orientación, perseguía al mismo tiempo el objetivo directo de contener la tendencia inflacionista e, indirectamente, forzar a las empresas a adoptar las medidas necesarias que les llevasen a una reducción de los costes estructurales de producción a través de un proceso intenso de reorganización, innovación y modernización.

El restablecimiento de un clima de moderación salarial y la modificación de los mecanismos de indexación posibilitaron la reducción de los precios y los costes de producción y, al mismo tiempo, no actuaron contra las rentas y el poder adquisitivo real de los trabajadores, antes al contrario, se rompió la espiral que había funcionado hasta 1983. Así, mientras durante estos cuatro años se mantuvo sin variaciones la presión fiscal global al nivel de 1983, al mismo tiempo se trató de reequilibrar su distribución aligerando los impuestos sobre las rentas del trabajo asalariado

y aumentándolos sobre las rentas del trabajo autónomo y de las empresas. En el primer caso las principales medidas a favor de los asalariados fueron: adecuación de las retenciones del IRPF en 1984 y 1985; revisión global de la estructura de los impuestos en 1986; presentación de una propuesta de revisión ulterior de la escala IRPF y reforma de la tasación de las liquidaciones. Con todo la medida más difícil que se tomó fue la ley 17 de 1985, conocida como Ley Visentini que representaba el primer intento de recuperar bolsas de evasión del trabajo autónomo y de las pequeñas empresas por valor de medio billón de pesetas(29).

El marco internacional en que se desenvolvieron estas medidas no era muy favorable. El crecimiento de los países industrializados más importantes en 1985 -un 3 por cien- era casi la mitad del que habían obtenido en 1984 (TABLA 3). La expansión del comercio mundial bajaba desde el 9 por cien en 1984 a menos del 3 por cien en 1985. Con este descenso de la demanda mundial la opción de alcanzar un nivel determinado de crecimiento económico en Italia requería medidas duras, dirigidas a reducir los costes de producción de las empresas y recuperar parte de la competitividad que se había perdido. Además en esos países la inflación se mantenía alrededor del 5 por cien o incluso alcanzaba índices menores como efecto del descenso de los costes unitarios del trabajo, y esos países eran un destino importante para las exportaciones italianas cuya economía se ha mostrado tradicionalmente abierta e internacionalmente integrada (30).

TABLA 3

Tasa de crecimiento: variaciones entre Italia y otros países industrializados

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Italia	1.1	0.2	1.1	3.2	2.9	2.9	3.1
USA	1.9	-2.5	3.6	6.8	3.4	2.8	3.4
Alemania	---	-1.0	1.9	3.3	2.0	2.5	1.7
Francia	1.2	2.5	0.7	1.4	1.6	2.1	2.2
Reino Unido	-1.1	1.5	3.2	2.6	3.7	3.2	4.6
Paises industrializados	1.5	0.3	2.8	5.0	3.3	2.7	3.3

Por otra parte las condiciones internas de la economía italiana en 1983 eran contradictorias y preocupantes. La recuperación de la demanda interna y de la producción mostraban signos de incertidumbre, y el empuje inicial para salir de la recesión venía otra vez de la mano de la demanda externa que no era suficiente para crear los puestos de trabajo necesarios para frenar la desocupación, sobre todo en el sur. La inflación crecía a un ritmo del 15 por cien, con diez puntos de diferencia respecto a los países industrializados. Las contradicciones en que se debatía la economía italiana en 1983 muestran, por ejemplo, que con un crecimiento del salario nominal industrial tres veces superior al de los salarios americanos o alemanes, en estos países el salario real aumentaba mientras que en Italia disminuía, y al mismo tiempo disminuía también el nivel de beneficios de las empresas y empeoraba la competitividad internacional. A su vez la deuda pública aumentaba. Esta descripción de la herencia económica que recogía Craxi hay que completarla señalando que el sistema industrial italiano progresaba y estaba experimentando en esos años cambios importantes: un proceso de reestructuración y racionalización que estaba produciendo sensibles mejoras en la rentabilidad y en la situación financiera de las empresas. El costo creciente del trabajo, el encarecimiento

de las importaciones, la fortaleza del dólar y una política monetaria restrictiva eran los principales factores que empujaban hacia una transformación radical de los procesos productivos de la industria (31).

Debido a estas circunstancias, tanto externas como internas, se imponía la idea de que sólo un pacto de colaboración entre las fuerzas sociales podría permitir llevar a cabo una política que capaz de controlar la dinámica de los costes, reducir la inflación y aumentar la competitividad de las exportaciones. De esta manera el debilitamiento de la vinculación entre la coyuntura internacional y el crecimiento económico interno hubiese permitido una política monetaria menos restrictiva de cuanto exigía la necesidad de equilibrar la balanza de pagos. Una rigidez menor en la política monetaria hubiese sido favorable si se hubiesen reducido el peso de los gastos por intereses, las necesidades del sector estatal, permitiendo la reducción del coste de dinero y el relanzamiento de las inversiones (32).

Veremos después que el pacto con los interlocutores sociales no fue posible pero, aun así, el balance económico en el marco del sistema neocapitalista fue positivo para muchos, aunque duramente criticado por el PCI y otras fuerzas de la izquierda. En el caso de la inflación se pasó de una diferencia respecto a los principales países industrializados de más de 10 puntos en 1981 a otra de uno o dos puntos. Baste recordar que en noviembre de

1980 la inflación era del 22 por cien y que en diciembre de 1986 se había reducido al 4 por cien. La economía volvió a crecer y se puso en movimiento el proceso de acumulación con una expansión masiva de la inversión en capital fijo que puso al dia la modernización de las empresas, aumentó la productividad y la competitividad, lo cual a su vez generó puestos de trabajo. El aumento de los beneficios empresariales aumentó las posibilidades de autofinanciación de las inversiones; además esta política permitió captar capital extranjero a través de la Bolsa cuya capitalización casi se cuadruplicó entre 1984 y 1986. De esta manera, a comienzos de 1987 la economía italiana se presentaba, después de tres años de expansión, con una tasa de crecimiento superior a la de los principales países industrializados (33).

La favorable situación de la economía internacional, con la disminución del precio del petróleo y la depreciación del dolar, jugó también un papel decisivo en la caída de la inflación. Aun así algunos factores empeoraron como la balanza comercial y, sobre todo, el paro que pasó del 9,9 por cien en 1983 al 11,3 por cien en 1986.

Por lo que se refiere a la política social, en Italia el fascismo había creado una serie de institutos asistenciales cuya red político-administrativa llegó a ser uno de los apoyos fundamentales para el control político y social que el régimen ejercía sobre los ciudadanos. Para

muchos autores (34) el fascismo asentó las bases de un sistema clientelista de bienestar social que, a pesar de las transformaciones que ha sufrido con el sistema democrático, no ha cambiado fundamentalmente la relación entre el Estado y el ciudadano. La República amplió sustancialmente la cobertura de la asistencia social, del paro y de las prestaciones en caso de maternidad, y reformó el sistema de pensiones. Además se lanzó a grandes inversiones que mitigaron en parte la falta de viviendas populares. Sin embargo, fue a partir de 1968, con motivo de los grandes conflictos que se vivieron en esos años y de la presión sindical, cuando el sistema de bienestar italiano cambió sustancialmente; la sanidad pasó a manos del Estado, se modificó la ley de pensiones, vinculándolas a la última retribución y equiparándolas al coste de la vida, mejoró la cobertura del desempleo así como las prestaciones por maternidad, y se institucionalizaron nuevas modalidades de financiación para las viviendas sociales transfiriendo estas competencias a los gobiernos regionales y locales. Así pues a comienzos de los años 80, y después de todo un periodo de gobierno de centro-izquierda, el Estado del Bienestar italiano había sufrido profundos cambios institucionales y estructurales y, aunque todavía funcionaba muy fragmentado, establecía una cobertura mucho más firme proporcionando servicios vinculados, sobre todo, al nivel retributivo de las personas. Se podría afirmar que en ese decenio de los años 70 se reforma radicalmente la Seguridad Social en su aspecto sanitario aunque perviven lagunas en otro tipo de prestaciones (35).

A comienzos de los años 70 el gasto público suponía el 34,6 por cien del PIB y al final de la década había llegado al 44,3 por cien subiendo en 1981 al 51,9 por cien del PIB. Con este salto Italia se ponía a la altura que los otros países industrializados habían alcanzado cinco años antes. El gasto social a su vez había pasado del 21,3 por cien en 1970 al 27 por cien en 1980; un 50 por cien de este gasto estaba constituido por transferencias de renta, fundamentalmente de pensiones, un 22,1 por cien y un 21,5

por cien respectivamente a educación y sanidad, y los restantes porcentajes, muy inferiores, a la asistencia social y la vivienda. El gasto público en relación al PIB ha ido aumentando en la década de los años 80 (en 1982 representaba el 54,4 por cien) así como el gasto social que en el 81 representó el 29,1 por cien.

Las pensiones constituyan la partida más importante del gasto social, creciendo considerablemente las de invalidez en las zonas rurales y del sur italiano que se han distribuido sin demasiado control como una especie de subsidio indirecto a las áreas del país más atrasadas del país. En esta partida también entran los parados, incluyendo los de tiempo parcial, cuya cobertura ha superado en algunos momentos al paro indefinido. El gasto educativo se ha mantenido más o menos constante en estos años, en función de la tasa de escolarización y el boom demográfico, pero bajaron sustancialmente las subvenciones a la vivienda sobre todo por el rechazo de la ley de reforma sobre las viviendas. Sólo a finales de la década la presión sobre la demanda de viviendas sociales impulsó nuevos planes de inversión.

Esta política parece que ha favorecido a una gran parte de la población italiana ya que el 10 por cien de la población más rica había perdido cuatro puntos en esta redistribución frente al 60 por cien de las rentas más bajas que habían aumentado 2,4 puntos en su nivel de bienestar. Dentro de esta mejora general se excluyen algunos grupos como los trabajadores autónomos que quedan excluidos de las subvenciones al paro y la seguridad social. Otras categorías excluidas son los jóvenes en busca del primer empleo, y todas las formas que toman cuerpo en la economía sumergida y no tienen ni acceso al mercado de trabajo institucional ni las garantías que éste comporta (36). En este ámbito la pobreza toma un relieve especial. Sarpellon (37) en un estudio realizado por encargo de la CEE hizo tres estimaciones del nivel de pobreza en Italia; la más restrictiva comprendía a todas las familias que vivian en pobreza severa -alrededor del 9,4 por cien- la

más amplia comprendía todas las que estaban bajo la línea de la indigencia, -el 20.4 por cien de las familias- y una estimación intermedia comprendía a todas las familias por debajo de la linea de miseria más los "indigentes" del norte y el centro del país. El primer grupo comprende todas las familias pobres que al menos tienen un miembro activo; este es el grupo más numeroso y la pobreza se debe sobre todo a la inadecuación de la renta al mercado. El segundo grupo comprende todas las familias pobres cuyos componentes activos buscan trabajo; en estas familias no entran rentas del trabajo y subsisten a base de transferencias del Estado y actividades de subsistencia. El tercer grupo comprende todas las familias pobres cuyos miembros están fuera del mercado de trabajo y cuya pobreza se debe a la escasez de sus pensiones (38).

Las mayores bolsas de pobreza se sitúan en el Sur de Italia donde se concentran las familias más numerosas con rentas insuficientes y, además, las pensiones mínimas no garantizan las condiciones normales de vida cuando son la única fuente de renta familiar.

En este aspecto de la desigualdad conviene añadir

además que en los últimos decenios ha aumentado la cuota del trabajo asalariado y dependiente en el cómputo de la renta nacional, pasando del 49 por cien de la población activa en 1950 al 67 por cien en 1979. Teniendo en cuenta, como han puesto de relieve diversos estudios, que el sistema retributivo italiano está enormemente fragmentado, esta estructura retributiva ha sido también una fuente de desigualdades que, sólo de manera parcial, ha podido ser cambiada por el Estado entre 1960 y 1980 a base de una fiscalidad progresiva que gravase sobre los más fuertes. Otro factor de desigualdad dentro del sistema asistencial lo constituye la disparidad del tratamiento entre diversos sectores y categorías ocupacionales como ocurre, por ejemplo, en la edad de jubilación donde se establecen diferencias según sean hombres o mujeres, trabajadores del sector privado o público, o también en la vinculación que se establece entre la pensión y la tabla retributiva. Además, los niveles de las pensiones varían con ritmos diferentes en carreras diferentes.

Las transferencias del Estado representan un componente muy importante de la renta de las familias italianas, representando aproximadamente el 20 por cien de las rentas familiares en su globalidad. La asistencia social está muy generalizada, cubriendo a gran parte de la población, pero su distribución no es equilibrada y algunos grupos han permanecido al margen de estos beneficios, como los parados o los subocupados. Las prestaciones mínimas no son suficientes para garantizar un nivel mínimo de vida para muchos ancianos, viudas e inválidos. Tal como afirmaba Le Grand para el caso del Reino Unido, Maurizio Ferrara parece llegar a la misma conclusión para Italia (39): las prestaciones sociales están caracterizadas por distorsiones distributivas importantes; en sentido vertical, en el caso de las trasferencias de renta (por ejemplo las pensiones) y de los servicios públicos (por ejemplo la escuela) la evidencia empírica disponible parece indicar que a menudo la normativa existente privilegia a la masa de las rentas medias en detrimento de las más bajas; en sentido

horizontal, algunas categorías parecen más favorecidas que otras, como los trabajadores del sector público respecto del privado.

En la primera mitad de los años 70 el crecimiento del gasto social acompañó al crecimiento de la economía tal como había ocurrido en las décadas anteriores, pero el shock petrolífero hizo sentir su influencia en la segunda parte del decenio y esto conllevó una disminución del gasto en bienestar sobre todo en 1976, 77 y 78. La tesis de que los partidos socialdemócratas son aquellos, que, según su perfil ideológico-programático, impulsan el Estado de Bienestar en los países donde alcanzan el poder gubernamental y lo hacen de una manera decidida, no puede trasladarse miméticamente al Mediterráneo europeo, sobre todo en el caso italiano, donde la Democracia Cristiana tomó las riendas del gasto social y promovió una evolución del gasto público que la diferenciaba claramente de los partidos liberales y conservadores. La Democracia Cristiana italiana nunca ha sido exclusivamente un partido conservador, en el sentido clásico de la palabra, puesto que desde su fundación ha integrado en su seno por fuertes componentes populares. Conviene no olvidar que desde sus inicios la DC consiguió hacer convivir en su seno un partido conservador mayoritario, liderado por De Gasperi, con un partido agrario, organizado por Bonomi, y un partido

con muchos matices laboristas guiado en sus inicios por Dossetti, Fanfani, La Pira y Moro. Su programa interclasista subrayaba la armonía y la colaboración social, la asistencia a los más débiles y el principio de subsidiariedad del Estado, y estos principios favorecieron durante años la expansión de la intervención estatal en la economía y en la sociedad. Wilenski ha comparado el papel de los partidos católicos con otros partidos de izquierda, en cuanto se refiere a la evolución del gasto social, y sus resultados confirman el ritmo expansivo que los partidos católicos han imprimido al gasto social, en ocasiones superior al de algunos partidos que se autodenominan de izquierda (40).

No es de extrañar por tanto que la Democracia Cristiana como consecuencia de su propia ideología, muy en consonancia con la doctrina social de la Iglesia, por una parte, y, por otra, como partido interclasista, interesado en ampliar su propio espectro electoral, haya favorecido desde un comienzo toda clase de políticas sociales que no atentasen contra el sistema ni entrasen en contradicción con sus postulados. De esta manera la expansión del sector público y la extensión de la política social fueron objetivos acordados por todos los gobiernos de centro-izquierda que incluían republicanos, socialdemócratas y socialistas, aunque con estos últimos se tuvo siempre una menor concordancia puesto que el PSI se inclinaba, al menos teóricamente, por impulsar un modelo de bienestar anglosajón, con prestaciones, que alcanzasen un cierto grado de universalidad, y mayores inversiones en servicios sociales, con el fin de paliar las contradicciones y las consecuencias más duras del sistema capitalista.

Los gobiernos de centro-izquierda de los años 60 dieron un gran impulso al gasto público que se vió favorecido por la estabilidad económica internacional, pero en la primera parte de la década de los setenta, también debido a la crisis internacional y de los propios gobiernos de coalición, el crecimiento bajó sensiblemente con excepción de las inversiones públicas, y el gasto también descendió

con la excepción de las partidas dedicadas a garantizar las rentas salariales. De ahí que defraudase, en buena medida, el impacto de los gobiernos de centro-izquierda sobre todo dadas las expectativas que abrieron. Los componentes reformistas del centro-izquierda deseaban llevar a cabo un proyecto cultural en torno a la "seguridad social" y a sus dos columnas fundamentales, las prestaciones universales y el mínimo vital. El proyecto debería alcanzar a todos los sectores: jubilaciones, sanidad, enseñanza, asistencia, y debía acompañarse de un fortalecimiento de las infraestructuras económicas y sociales (obras públicas, transportes, etc.). Desde el punto de vista político el objetivo era realizar la plena universalización de la ciudadanía social y la integración "histórica" de las masas populares en el sistema político, pero este objetivo resultó ser demasiado ambicioso para las limitadas y parciales medidas que se tomaron (41).

La década de los años 80 se abrió con la crisis del centro izquierda, el segundo shock petrolífero y una política económica de ajuste y rigor. El PIB cayó mientras que el gasto social subía. Por ello la política de bienestar fue acusada de ser la responsable principal del desequilibrio estructural del sector público italiano, en especial las partidas referentes a las pensiones y la sanidad donde el envejecimiento de la población produce un aumento continuo de la demanda de servicios (42).

Esto explica que en esos años comenzase una política restrictiva que afectó sobre todo a las pensiones, la sanidad y la educación: limitación del número de pensiones que subían con el nivel de vida, limitación en las contrataciones del personal sanitario y docente, aumento de las tasas escolares, supresión de algunas prestaciones sanitarias específicas, etc. Es decir abolición de privilegios excesivos en el caso de las pensiones, desincentivación del exceso de demanda sanitaria y aumento del coste personal por la utilización de los servicios. Aun así el gasto social entre 1980 y 1986 fue en aumento

situándose alrededor del 20 por cien del PIB, pero todavía considerado por algunos como controlable (TABLA 4) (43).

TABLA 4

Gastos de la Administración Pública en prestaciones sociales
(en porcentajes respecto al PIB)

	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>
Sanidad	4.4	4.6	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7
Pensiones	11.5	13.0	13.5	14.4	14.1	14.1	14.0
Asistencia	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4
TOTAL	16.9	18.7	19.4	20.5	20.0	20.3	20.1

Es más, si se comparan estas cantidades con la

recaudación fiscal de esos años se observa que la política de rigor dio sus resultados y la relación ingresos-gastos se moderó pasando del 58,9 por cien en 1981 al 57,4 por cien en 1983 y al 56 por cien en 1986, presentando una dinámica bastante estable.

Con todo, el sistema italiano de bienestar, que en la década de los años 70 ha tratado de transformarse en dirección hacia un modelo "igualitario-universalista" a través de su secularización y modernización, de la ley del divorcio, de los nuevos derechos de la familia, de la igualdad de los sexos en las relaciones laborales y del aborto, no ha roto definitivamente con la herencia histórica de su fragmentación, con las prácticas clientelistas, con la marginación de sectores sumergidos ni con la evasión fiscal. Si bien es verdad que con este sistema parecen conformarse tanto quienes gozan de sus beneficios como sus contribuyentes, como si tácitamente hubiesen llegado a un pacto de "solidaridades" que, como han puesto de manifiesto algunos estudios, ha cristalizado en un sistema con dos características peculiares (44): a) el carácter difusamente clientelista que ha alcanzado la distribución de las prestaciones en algunos sectores y, b) el gigantesco fenómeno de ocultación de los costes de las políticas sociales, sobre todo en los últimos años, y la consiguiente crisis fiscal y de gobernabilidad, punto en el que no se ponen de acuerdo los trabajos de diversos autores según la visión de política económica o fiscal que se aplique.

4.4. La batalla en torno a la escala móvil

Sobre estos últimos 20 años de vida sindical italiana se ha producido una abundante literatura tanto desde el punto de vista descriptivo como desde la vertiente más crítica y analítica (45). Ahora bien la mayor parte de autores coinciden en atribuir unas características comunes a este periodo y a su distribución temporal. Regini afirma que en síntesis los sindicatos entre 1969 y 1971-72 favorecieron una movilización "difusa" de los militantes; descentralizaron el poder sindical y promovieron un recambio en el liderazgo de las bases y de los activistas, tratando de recoger así las reivindicaciones que provenían del núcleo central de los trabajadores industriales sin preocuparse por combinarlas con las más avanzadas de otros grupos de asalariados. A partir de 1972 los sindicatos han tratado de limitar la acción sindical y la movilización de las bases a los momentos en que era estrictamente necesaria; han concentrado de nuevo el poder en la organización, favoreciendo las contrataciones a pequeña escala y la institución de los comités, en la que las competencias técnicas son más importantes que la capacidad de guiar las luchas, y han tratado de coordinar las reivindicaciones. En la segunda mitad de los años 70 los sindicatos han participado cada vez más en la gestión del sistema industrial y de la política estatal y han priorizado la participación en la política económica gubernamental, como forma de afrontar los problemas que llevaba aparejada la crisis económica. También ha sido una

característica de este periodo la moderación salarial y la aceptación de las exigencias para aumentar la productividad (46). El punto culminante de este periodo fue 1983 cuando el acuerdo Scotti sobre la escala móvil comportó la coincidencia de todos los agentes sociales, sellando así una política de entendimiento trilateral. A partir de entonces, como veremos al final de este apartado, todo cambiará.

El otoño caliente de 1969 dio paso a un periodo de conflictividad industrial intensa y radical. El número de huelgas aumentó considerablemente pasando de una media de 7,26 horas perdidas por cada asalariado en el periodo de 1959-1967 a la de 11,55 entre 1968 y 1975. Este aumento se debió a una intensificación del conflicto en las empresas y sectores tradicionalmente conflictivos y a una difusión de esta conflictividad a otros sectores, empresas y áreas geográficas, a los que antes apenas había llegado (47).

Las huelgas se hacían en las empresas y a menudo en sectores con una tasa de afiliación muy baja, difundiéndose entre las pequeñas empresas y en regiones con escasa tradición conflictiva. Los trabajadores no cualificados que habían sufrido más las duras condiciones laborales del rápido desarrollo, tuvieron un papel protagonista y muchas veces encabezaron las nuevas reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, los incentivos y la productividad.

Esta conflictividad laboral tuvo una serie de características comunes que podemos enumerar de la siguiente manera: a) muchos conflictos no fueron convocados por los sindicatos o escaparon a su control. Además de convocar huelgas espontáneas los obreros rechazaron acuerdos sindicales y las bases a menudo impusieron una fuerte rigidez en las luchas; b) se adoptaron formas de lucha más radicales. Para dañar la producción, con el menor coste posible

para los trabajadores, se descubrieron nuevas técnicas de articular las movilizaciones. En algunos casos se llegó al bloqueo de las mercancías y a la ocupación de las fábricas; c) las reivindicaciones más progresistas tenían un sentido igualitario y se dirigían contra la organización tradicional del trabajo; d) tanto las formas de lucha como las reivindicaciones tenían un cariz fuertemente ideologizado (48).

Esta intensa conflictividad que se dio entre 1968 y 1972 tuvo como resultado un cambio profundo tanto en la organización sindical como en las relaciones industriales. Se crearon los Consejos de empresa (Consigli di fabbrica), que eran estructuras sindicales a nivel de empresa y de sección.

Los consejos representaban a las confederaciones sindicales y asumían la estrategia unitaria que adoptaban las centrales sindicales, que en 1973 establecieron la Federación Unitaria, estructura sindical federativa que se utilizaba para acciones unitarias. Esta descentralización comportaba un aumento de la democratización interna de los sindicatos, un control sobre la actividad sindical y sobre la contratación colectiva. Un cierto grado de asamblearismo se asentó en las fábricas y esto posibilitó la participación directa de muchos trabajadores en las decisiones sindicales a nivel de empresa, de tal manera que los acuerdos a nivel de base en las empresas ascendieron desde 3.870 en 1968 a 7.567 en 1971. Este proceso de descentralización se prorrogó durante todo el decenio como muestra la tabla 5 (49), aunque las contrataciones a nivel estatal mantuvieron su volumen.

TABLA 5

Consejos de fábrica y delegados elegidos

Años	No. de Consejos de fábrica	No. de delegados elegidos
1972	8.101	82.923
1973	9.813	97.161
1974	16.000	150.000
1977	32.021	206.336

A partir de 1972-73 los sindicatos consiguieron controlar cada vez más este movimiento que en principio se les había ido de las manos; trataron de coordinar reivindicaciones, mediando entre las que tenían un carácter más radical y aquellas que provenían de sectores más institucionalizados, y controlaron las movilizaciones de las bases devolviendo el poder movilizador a la organización y consiguiendo controlar el poder contractual y de interlocutor único. De esta manera los consejos de fábrica, los delegados y las asambleas, fueron perdiendo importancia real, aunque todavía mantuvieron el poder formal de ratificar las decisiones que ya se habían tomado a nivel superior. En este periodo los sindicatos han participado cada vez más en la gestión del sistema industrial y en la política estatal dando prioridad a la participación en la política económica del gobierno para afrontar conjuntamente la crisis. La capacidad de influir sobre la política económica del gobierno y sobre las instituciones asume una importancia mucho mayor que las estrategias sindicales de cara a los convenios colectivos o de empresa.

Esta política sindical tenía como objetivo máximo el aumento del número de puestos de trabajo, el impulso de las inversiones y promover un mayor equilibrio del desarrollo entre Norte y Sur, con especial atención a la política del Mezzogiorno. Como contrapartida a esta implicación institucional de los sindicatos, que incluso participaron en la preparación de leyes como la de reconversión industrial o la del empleo juvenil, se les exigió moderación salarial y aumento de la productividad. Esta línea sindical de participación institucional tuvo su punto álgido en el documento del EUR de 1978 ("la svolta dell'EUR"), en el que los sindicatos tomaron la decisión de moderar sus reivindicaciones salariales y consentir una mayor flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo con la finalidad de subordinar la política salarial a la de empleo, tratando de controlar las prioridades de la inversión. Ahora bien esta política de moderación pronto traería consigo dos problemas a finales de los años 70: por una parte el alejamiento de las bases y la disminución de la militancia y, por otra, la aparición de diversos sindicatos autónomos, sobre todo en la Administración Pública. Desde el punto de vista de la afiliación sindical, la Italia de la postguerra ha tenido siempre un nivel muy alto comparado con el de sus vecinos mediterráneos, pero en este periodo ha llegado a su nivel más alto subiendo el número de sus afiliados hasta 1980 fecha en que la militancia ha comenzado a bajar sensiblemente (TABLA 6). Según Coi (50) entre 1974 y 1978 los afiliados aumentan en un 16 por cien, alcanzando un máximo del 59,8 por cien de la población activa en 1977 y a partir de esta fecha el crecimiento de la afiliación se debe exclusivamente al

número de jubilados inscritos pero no al de trabajadores activos cuyo descenso más significativo es el de los metalúrgicos (metalmeccanici) (51).

TABLA 6

Niveles de Sindicalización 1970-86

Año	CGIL (en miles)	CISL (en miles)	UIL (en miles)	TOTAL (en miles)
1970	2.943	1.807	780	5.530
1971	3.136	1.973	825	5.934
1972	3.215	2.184	842	6.241
1973	3.435	2.214	902	6.551
1974	3.827	2.472	965	7.264
1975	4.081	2.593	1.053	7.707
1976	4.313	2.823	1.105	8.241
1977	4.490	2.809	1.160	8.459
1978	4.527	2.868	1.285	8.680
1979	4.583	2.906	1.327	8.816
1980	4.599	3.057	1.347	9.903
1981	4.585	2.988	1.357	8.930
1982	4.576	2.976	1.358	8.910
1983	4.556	2.953	1.351	8.860
1984	4.546	3.098	1.344	8.988
1985	4.592	2.963	1.306	8.861
1986	4.647	2.972	1.306	8.925

Dentro del cuadro reivindicativo tres fueron las grandes conquistas de este periodo: a) un nuevo sistema de clasificación para subir de categoría laboral (inquadramento único) b) el estatuto de los trabajadores y c) la escala móvil. El nuevo sistema de clasificación basaba la carrera laboral en la antigüedad rechazando el antiguo sistema de clasificación por tareas. Estas promociones automáticas hicieron desaparecer los niveles más bajos pero no tuvieron ninguna influencia sobre la organización del trabajo (52). El Estatuto de los Trabajadores refrendó alguno de los puntos fundamentales de la Constitución Italiana, como el de la libertad sindical y la protección de los derechos sindicales, con lo cual venía a fortalecer la institucionalización de los sindicatos y a reconocer la importancia de su papel en la vida democrática del país. Además, en un momento en el que los sindicatos parecían perder el control de las bases el estatuto ratificaba su papel representativo ante los trabajadores y su facultad para promover la contratación colectiva. Por último, en 1975 se firmaba el acuerdo sobre la scala mobile con el cual el sistema anterior de subidas salariales, basado sobre valores diferenciados, era sustituido por un mecanismo de indexación igual para todos y una cantidad fija, lo cual garantizaba a los trabajadores con rentas salariales más bajas un nivel alto de protección contra la inflación (53).

Los protagonistas de este acuerdo fueron, por una parte, Gianni Agnelli, presidente de la Fiat, que en ese momento presidía además la organización patronal Confindustria, personaje conocidísimo no sólo por representar al mundo de las finanzas sino por su protagonismo en la vida social y política italiana, y, por otra, Luciano Lama, secretario general de la CGIL, el sindicato de inspiración predominantemente comunista que a su vez también protagonizaba la vida sindical y política del país. El hecho en sí era importante no sólo por la cobertura que daba a las rentas salariales en un momento de crisis económica, sino también porque devolvía a los

sindicatos el protagonismo en la vida laboral y les confería un importante papel en la contratación colectiva.

Ahora bien, el mecanismo de la escala móvil pronto trajo sus consecuencias, que fueron una tasa de inflación cada vez más alta y un aumento del coste del trabajo. Este impacto, que se calculaba en un 13 por cien sobre el aumento del salario real en 1970, había subido al 50 por cien en 1976 y al 80 por cien en 1979, por lo cual se levantaron diversas voces para detener esta espiral alcista y en 1977 se obtuvo ya un primer acuerdo para su congelación que tuvo su ratificación en el Congreso del EUR de 1978, en el que el propio Lama afirmó que la situación económica era difícil y requería un esfuerzo de colaboración por parte de todos en cuyo marco no había que descartar la moderación salarial. No hay que olvidar que la inflación continuaba subiendo y en 1981 había alcanzado el 21 por cien.

Pero fue en 1983 cuando se cerró el primer acuerdo tripartito en el capítulo de las relaciones industriales entre la patronal, el gobierno y los sindicatos. El acuerdo Scotti significó el momento culminante de la colaboración entre el gobierno y los sindicatos; el objetivo primordial era reducir la inflación al 13 por cien en 1983, al 10 por cien en 1984 y al 7 por cien en 1985, para lo cual empresarios y sindicalistas acordaron intervenir sobre el sistema automático de indexación, reduciendo la cobertura garantizada por la escala móvil en un 20 por cien, estableciendo topes a los incrementos salariales que se negociasen en los próximos años y tomando otras medidas complementarias (54).

La importancia del acuerdo del 22 de enero, como intento de racionalizar las relaciones industriales italianas, ha reconocida incluso por muchos de sus detractores: a) un primer aspecto del acuerdo generalmente reconocido consiste en su esencia tripartita. Los recursos públicos invertidos fueron enormes y tuvieron un papel decisivo, compensando la aceptación sindical de la disminución en el incremento salarial y la aceptación empresarial del paquete de las renovaciones de contratos; b) el principal objetivo del acuerdo y el elemento básico de su tripartitismo fue la conexión entre la negociación colectiva -reconocida como el instrumento fundamental para gobernar las relaciones industriales- y el marco de compatibilidades económicas asumidas como base del acuerdo, siendo la primera y más importante el freno a la inflación y el mantenimiento del valor real del salario; c) el acuerdo aumentó la centralización de las relaciones industriales en Italia; y d) allanó el camino para sentar las bases del procedimiento que se debería seguir en las relaciones industriales. Hasta entonces el sistema italiano había vivido en un informalismo total, con ausencia de normas legales o de negociación en todos sus aspectos más importantes, es decir en la estructura negociadora, en la representación sindical, en la participación laboral y en los conflictos laborales. Esta informalidad fue útil y probablemente necesaria durante el crecimiento masivo del sistema (1968-73), pero las contradicciones fueron cada vez más evidentes y fomentaban el desgaste de los recursos, el exceso de conflictos, el solapamiento de competencias y la falta de transparencia de las relaciones negociadoras. En la lógica del acuerdo se sobreentendía que la centralización, las formas de procedimiento y el resto de

los vínculos tripartitos no fuesen transitorios sino de carácter permanente. Su finalidad era estabilizar las relaciones industriales en Italia tal como estaban consolidadas en los sistemas centroeuropeos. No obstante las características de este acuerdo de 1983 eran fundamentalmente diferentes de las que regían en esos sistemas y de sus modelos neocorporatistas, especialmente en su versión más sólida e institucionalizada (55).

Aun así el acuerdo Scotti no resolvió la situación de las relaciones sindicales aunque hubiese servido para llegar a un acuerdo conjunto con la patronal y el gobierno Fanfani. Su mayor efecto fue "fiscalizar" el conflicto social, es decir reducir sus efectos, mientras que el ambicioso proyecto de cambiar el sistema de relaciones industriales hacia políticas concertadas de estabilización no tuvo un progreso sustancial. El gobierno Craxi que sucedió al de Fanfani no varió en nada el acuerdo de 1983 lo que puso de manifiesto en su declararación programática, puesto que trataba de establecer una política económica de saneamiento compatible con la política de empleo. Pero para ello consideraba que una política que pretendiese una mayor igualdad debía garantizar durante ese trienio no sólo una estabilidad de las retribuciones reales por hora trabajada sino también de las otras rentas. En el documento presentado a los sindicatos por el ministro del Trabajo, el socialista De Michelis, se ponía como objetivo primordial la disminución de la tasa de inflación, condición fundamental para restituir al sistema productivo la posibilidad de una reacción positiva contra la crisis que duraba ya muchos años. El proyecto añadía además el compromiso del gobierno para tomar medidas que favoreciesen la equidad fiscal, el mantenimiento de los precios, la mejora del gasto público,

la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, especialmente en la Administración Pública, la puesta en marcha de la ley para favorecer los "contratos de solidaridad" etc. En esta situación y si se querían recuperar cuotas de mercado en el comercio mundial y relanzar la actividad productiva, el gobierno no tenía más remedio que modificar el mecanismo de la escala móvil, es decir controlar todavía más la dinámica de los salarios (56).

Durante esos años algunos economistas ya habían advertido repetidas veces que el mecanismo de ajuste anual de los salarios al incremento del coste de la vida era sin duda el factor más importante que impedía el descenso de la inflación, pero los sindicatos y sobre todo el PCI también habían advertido en repetidas ocasiones que esa conquista obrera era inamovible, de tal manera que ninguno de los gobiernos anteriores se había atrevido más que a modificarla. La CGIL y el PCI se lanzaron por tanto a una defensa numantina de los intereses de los trabajadores, representados en la escala móvil, amenazando con huelgas masivas. Pero en esta decisión la CGIL no tuvo la adhesión total de los otros dos sindicatos, la CISL y la UIL, y además el voto del secretariado de la CGIL se dividió entre comunistas y socialistas (76 y 43) en el momento de rechazar la oferta del gobierno, que reforzado por esta división sindical quiso imponer las medidas por decreto. En ese ambiente tan tenso la CGIL convocó una huelga general que tuvo un éxito considerable pero el gobierno no cedió, sobre todo porque contaba con el apoyo de las centrales sindicales socialista y demócratacristiana. Los comunistas apelaron entonces al Presidente de la República para que bloquease el decreto, pero al final la votación parlamentaria lo aprobó y el PCI entonces se lanzó a promover un referéndum nacional para abrogar el decreto. Pero la tasa de inflación en los nueve primeros meses de 1984 había bajado ya del 12,8 al 9,1 por cien, con lo cual buena parte de la opinión pública comenzó a variar su juicio sobre la política económica aplicada por el gobierno de Craxi.

En junio de ese mismo año moría el Secretario General del PCI Enrico Berlinguer y aunque poco después, con motivo de las elecciones europeas, los comunistas obtenían un 33,3 por cien de los votos, sobre pasando incluso a la Democracia Cristiana, ese avance no se confirmó posteriormente ni en el referéndum sobre la escala móvil ni en las elecciones administrativas que tuvieron lugar en 1985, sino que más bien pareció un homenaje de la sociedad italiana a la indiscutible personalidad política de Berlinguer. El referéndum sobre la escala móvil representó uno de los momentos álgidos de la conflictividad en la sociedad italiana y de las malas relaciones entre socialistas y comunistas. Las interpretaciones sobre estos sucesos han sido muy diversas en función del ámbito ideológico del que vengan. Para algunos fue un punto central en la estrategia de los socialistas para aislar a los comunistas, hacerles perder influencia sobre la sociedad y romper el movimiento sindical unitario (57), para otros fue un claro indicador de que el PCI no había tomado conciencia de que la situación en el mundo laboral había cambiado sustancialmente en los últimos años, en los que había sufrido un proceso de desindustrialización y de reestructuración económico-productiva con la consiguiente disminución de la mano de obra no cualificada y el aumento de los cuadros cualificados, que ya no veían en la escala móvil el instrumento adecuado para la defensa de sus intereses.

Lo que si es cierto es que la pérdida del referéndum llevó consigo una despolitización de los conflictos laborales y una caída en picado de la conflictividad general. En los dos años siguientes 1985-86 disminuyó el absentismo laboral así como el número de horas perdidas por las huelgas, creció la productividad y las empresas aumentaron sus beneficios, mientras que la inflación siguió su ritmo decreciente. El sector privado se reestructuró, redujo su deuda y el Estado mejoró la balanza de pagos. A comienzos de 1987 Craxi podía decir que la economía

italiana había mejorado sensiblemente y su situación se podía comparar con las más prósperas de Europa.

Ahora bien en el transcurso de este tiempo se había consolidado un nuevo tipo de representación sindical: las asociaciones de cuadros. Este tipo de asociaciones nacieron en 1980 como un segmento de los asalariados que contestaban la representatividad de las centrales sindicales porque no veían representados sus intereses en ellas, sino que más bien se sentían discriminados por el igualitarismo de la escala móvil. Estas asociaciones profesionales fueron reconocidas legalmente en 1985 y su principal asociación la Confederquadri ha llegado a tener 110.000 afiliados. Tanto la patronal como los sindicatos se opusieron en un primer momento a su constitución; la patronal porque no deseaba tener nuevos frentes de lucha y los sindicatos porque no deseaban multiplicar los centros de representación. Pero los sindicatos pronto incluyeron en sus programas las plataformas reivindicativas de los cuadros dándoles un reconocimiento jurídico.

En definitiva con el gobierno de Craxi entra en crisis una forma determinada de entender y practicar las relaciones industriales que algunos llamaban neocontractualismo, refiriéndose a los sucesos de 1983 que significaron la adopción de la negociación como instrumento de relación y no la imposición de la ley. Neocontractualismo que servía para definir y ponerse de acuerdo sobre las principales

variables de las relaciones industriales. Ahora se abre una nueva forma de contractualismo que supone un retorno a la bilateralidad de las relaciones, donde la patronal adquiere un mayor protagonismo a causa de la división de las centrales sindicales. Teniendo además presente que Craxi deseaba favorecer a los sectores de asalariados más dinámicos y profesionalmente mejor preparados, a fin de estimular la modernización y la productividad, se fragmentan las reivindicaciones en un juego de relaciones de fuerza muy desequilibrado que margina siempre a los más desfavorecidos. Se rompe la unidad sindical abriendose un periodo de conflictividad entre las distintas centrales, lo que supone, a su vez, la muerte y desaparición de los consejos de delegados, uno de los anillos más importantes de esta unidad y de su representatividad democrática a nivel de empresa.

Sin embargo en el activo de la política de Craxi sitúan muchos la valentía de afrontar una situación político-económico llena de falsos supuestos, de afrontar la difícil fase de la reestructuración productiva, con una política que no causó demasiados perjuicios a los trabajadores, y de resituar a Italia en el concierto de las naciones. Otros por el contrario, le acusan de haber favorecido exclusivamente a las fuerzas del capital y de haber roto un modus vivendi con la única finalidad de perjudicar al PCI y a las fuerzas sindicales, que fueron las que, con la ruptura de su unidad de acción y su pérdida de poder adquisitivo de los salarios, salieron más perjudicadas. En medio de esta polémica, entre apologetas y detractores, Cella y Treu creen, sin embargo, que muchos vieron en el decreto de febrero el fracaso del modelo concertado de gobernar las relaciones industriales y elogiaron el redescubrimiento de la capacidad de decisión del poder público. Pero el decreto no era lo más importante en este asunto y es equivocado pensar que constituye el signo de una nueva forma de gobernar las relaciones laborales. Los sucesos de esos meses indican las dificultades políticas y sociales para gobernar las relaciones laborales y organizar el consenso

en las sociedades postindustriales. Algunas de esas dificultades son comunes a todas las sociedades avanzadas y van unidas a los cambios en la composición social de la fuerza de trabajo y a sus nuevas formas de articularse, diferenciarse o fragmentarse. La centralidad de la clase trabajadora llega a su fin no a causa de un decreto gubernamental sino debido a las transformaciones que ha sufrido el proceso de producción y por tanto las fuerzas productivas (57).

4.5 El reformismo posible

El periodo presidencial de Craxi mostró a los socialistas las posibilidades de su propio reformismo. Su mandato, que tuvo una duración superior al resto de los gobiernos de la postguerra -incluyendo todos los periodos gubernamentales de De Jasperi y Moro- ha sido valorado de manera diferente. El balance económico desde 1983 a 1986 ofrece algunos claroscuros, aunque en líneas generales y aprovechando el viento a favor que corrió por toda Europa, se puede decir que saneó la situación económica, consolidó la subida de la tasa de crecimiento, disminuyó la inflación y mejoró la balanza de pagos, pero a su vez empeoró el empleo y la deuda exterior (58).

Su particular forma presidencialista de afrontar las tareas de gobierno reafirmando los derechos del Ejecutivo le llevaron a criticar al Parlamento, la Magistratura, la Presidencia de la República e incluso la libertad de expresión

en los medios de comunicación. Esta actitud de liderazgo presidencial por la que las instituciones políticas y sociales han constituido un campo de batalla en la dialéctica política ha tenido un resultado polémico, puesto que para algunos las ha zarandeado con el fin de robustecerlas, mientras que para otros sólo ha contribuido a debilitarlas (59).

Por otra parte, su protagonismo presidencialista obedecía - según muchos estudiosos - a la debilidad de su propia organización política, tanto desde el punto de vista de la militancia como de su representación geográfica. Con esta política Craxi fomentaba el perfil electoral del PSI ocultando su debilidad como partido de masas, quizá convencido de que sólo una política de imagen de ese estilo podría contribuir a su estabilidad y solidez. Modernización y reforma eran los dos ejes sobre los cuales deseaba hacer avanzar al PSI contraponiéndose así por una parte al lastre conservador de la DC y por otra a las rigideces de un PCI que en el marco de la política europea quedaba cada vez más aislado.

Sólo después de haber ganado la batalla contra la izquierda del partido - y de haberse asegurado el control interno como ningún líder socialista lo había nunca ejercido antes que él - el secretario decidió oficializar el giro reformista. Así, al inicio de los años 80, a medida que iban saliendo de escena todos los grandes protagonistas de la política de centro-izquierda, fallecido el día de Año Nuevo Pietro Nenni, iniciador de aquella política y al mismo tiempo hombre-símbolo del pasado maximalista, el PSI daba comienzo a una nueva etapa de su larga y tormentosa historia : la que,

desarrollando las premisas de un reformismo ya no disimulado, lo convertiría finalmente en homogéneo según el modelo de las socialdemocracias europeas (60).

El 19 de febrero de 1981, en una asamblea celebrada en Roma preparatoria del 42º congreso del PSI, que tendría lugar dos meses más tarde en Palermo, Bettino Craxi anunció que la corriente que él lideraba, ya ampliamente mayoritaria en el partido y destinada a vencer clamorosamente en el congreso, cambiaria de nombre y ya no se llamaría "autonomista" sino "reformista".

En realidad aquel anuncio tenía un valor simbólico nada despreciable, porque sellaba la reasunción del reformismo como ideología "oficial" del socialismo italiano después de casi setenta años (los que habían transcurrido desde la escisión de Reggio Emilia), durante los cuales había sido considerado como una degeneración o todo lo más había sido tolerado como una herejía.

El concepto de reformismo en principio se restringe al de "innovación en sí", y el campo de expresión de este reformismo se limita, progresivamente, a los temas de la reforma institucional. El giro "teórico" comienza en el congreso de Rímini (1982), pero arriba a puerto completamente en el congreso de Bolonia (1985) en el que se discute ampliamente sobre "¿Qué reformismo?".

En este congreso se afronta el modelo de partido y su obsolescencia debido a su proceso de desgaste y a su inadecuado funcionamiento. Resulta débil su inserción en las instituciones de la sociedad civil e inadecuado para apoyar

grandes movimientos de opinión en torno a importantes temas que afectan al cambio y la reforma de la sociedad. Se pretende cambiar el modelo piramidal de estilo "prusiano" por otro "modelo en red" capaz de permear mejor la sociedad. Se critica el modelo liderista en el que el centro propulsor del partido se aleja. Si en el partido de masa el vehículo de decisión sigue siendo la estructura de base, en el modelo leaderista se convierten en centro las instituciones y los lugares de poder del partido.

El "nuevo reformismo" delineado en Bolonia es la expresión más acabada del conjunto de ideas y ambiciones maduradas en el PSI durante los años en que los socialistas ocuparon la presidencia de la República. Se consolida en aquellos años la idea de que ella representa, de algún modo, el último equilibrio posible en un sistema político como el italiano. Por tanto, el PSI se presenta no como tercera fuerza sino como núcleo central de una estrategia de recomposición de la izquierda. Se valoran por ello todos los elementos distintivos que pueden caracterizar la especificidad de una "cultura socialista" italiana ; el concepto de reformismo, la concepción laico-crítica ; la idea de la complejidad social (o totalidad social); el valor del pluralismo ; la visión no totalizante del partido. Desde ese punto de vista se hace un llamamiento a la recomposición de la izquierda, pero se trata de un llamamiento retórico, formal, dadas las tensas relaciones que existen durante estos años entre el PSI y el PCI.

En el PCI corren vientos nuevos que maduraran en su 18 congreso celebrado en Roma en la segunda quincena de marzo de

1989 que supuso un cambio radical en el mayor partido comunista de Occidente y el principal partido de oposición en el sistema político italiano. Achille Occhetto apuesta por una visión europea del comunismo abandonando el centralismo democrático y restringiendo el poder del aparato.

Ante este magno acontecimiento Craxi convoca el 45º congreso de su partido para el mes siguiente en Milán con la intención de contrarrestar el protagonismo de los comunistas y ofrecer el rostro de un socialismo rejuvenecido, que a pesar de su corta militancia aumenta cada vez más su cuota electoral y su afiliación, en un camino lento de crecimiento.

Esta pugna ya tradicional entre socialistas y comunistas para hegemonizar las fuerzas de izquierda en Italia no permite vislumbrar, por el momento, una solución cercana, sobre todo porque, como ha comentado recientemente Sabatucci (61), tampoco la auténtica revolución cultural emprendida por la Secretaría del partido comandado por Craxi a fines de los años setenta - más de veinte años después del giro autonomista de Nenni - se ha mostrado eficaz, al menos hasta ahora, para cambiar los términos de fondo de la cuestión socialista. Obligado por las angosturas del sistema político italiano, además de por una ya consolidada vocación gubernamental, a hacer de compañero de viaje en los gobiernos de la DC, el nuevo PSI ha redescubierto y relanzado meritoriamente la tradición y las fórmulas del reformismo socialista. Pero no ha podido hacer revivir su realidad, en ausencia de los necesarios presupuestos sociales (una base de consenso estable entre los estratos menos privilegiados y una fuerte ligazón

con las instituciones sindicales), culturales (una ideología con la impronta de los valores de solidaridad humanitaria y de pragmatismo empírico) y político-institucionales (un sistema que permita la alternancia en el poder de moderados y progresistas).

V. EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

5.1. De la oposición al poder

El primer paso que dio el PSOE para conseguir la ruptura democrática en España se alcanzó en el congreso de Suresnes celebrado en octubre de 1974. En este congreso, reunido todavía en el exilio y al que se le llamaría el "Congreso de la Renovación" porque en él se verificó un cambio generacional completo, el PSOE declaró su intención de establecer alianzas con el resto de las fuerzas políticas -sobre todo con las de izquierda- para alcanzar las libertades, y proclamó también el derecho de las nacionalidades a escoger libremente sus relaciones con las otras regiones o nacionalidades que conforman el Estado español. Por aquellas fechas esta declaración pretendía situar al PSOE frente a la Junta Democrática, plataforma de fuerzas políticas que se había constituido poco antes para la lucha por la democracia liderada por el Partido Comunista (PC), y esto lo hacia con la finalidad de construir una alternativa de izquierda distinta a la del PC, a la que denominó Convergencia Democrática que incluía dieciséis formaciones políticas entre partidos y sindicatos.

Convencidos todos estos grupos de oposición al franquismo de la necesidad de su unificación para afrontar el proceso político de la ruptura democrática, se llevaron a cabo diversos encuentros y conversaciones que desembocaron, en marzo de 1976, en la formación de la Coordinadora Democrática. La "Platajunta", como se le llamaba popularmente, se convirtió en el núcleo político que estableció conversaciones con los sectores reformistas de la dictadura para acordar fórmulas pacíficas de transición política a un régimen de libertades, de tal manera que la ruptura revolucionaria de la que se venía

hablando desde hacia meses se convirtió poco a poco en una ruptura negociada en la que todo parece indicar que los movimientos populares y las huelgas se pusieron en marcha para acelerar el proceso o para presionar en momentos determinados, pero siempre tratando de evitar situaciones descontroladas, aunque llegaron a producirse en algunos casos.

En 1976 el PSOE todavía no había sido legalizado pero se movía con cierta tolerancia por parte de las autoridades franquistas. La convocatoria de su XXVII congreso fue prohibida por el gobierno, pero entonces los socialistas amenazaron con celebrar su congreso fuera de España dejando en evidencia al "gabinete" que pretendía fomentar una imagen de "apertura democrática". Pero el 18 de noviembre las Cortes aprobaron la Ley para la reforma política y el gobierno cedió a la presión de los socialistas que convocaron su congreso para diciembre de 1976. Esta Ley Fundamental para la Reforma Política modificó profundamente las bases institucionales españolas. En ella se declaraba que el régimen político español sería democrático y que se elegiría un Parlamento bicameral por sufragio universal. De esta manera los partidos políticos que habían sido tolerados hasta ese momento comenzaron a legalizarse y se prepararon para afrontar las elecciones que ya se preveían para junio de 1977 (1).

El XXVII congreso del PSOE era, por tanto, el primer congreso del socialismo español que tenía lugar después de 44 años de exilio y persecución y en el que tuvieron que

resolverse problemas tan importantes como el de la unificación con los socialistas históricos, la estructura organizativa en federaciones y el peso que alcanzaría cada una de ellas, el papel del sindicato en el partido y la estrategia que los socialistas deberían seguir en los próximos años para alcanzar la plena democracia en España. Así a comienzos de diciembre en el Hotel Meliá de Madrid se reunieron los delegados que representaban a 9.141 afiliados; 1377 de Andalucía, 1280 del País Vasco, 1239 del País Valenciano, 903 de Asturias, 837 de Madrid y los 1408 restantes de las otras regiones españolas. Este congreso tuvo un gran respaldo por parte de los socialistas europeos, acudiendo importantes figuras de la política internacional como Willy Brandt, Olof Palme, F. Mitterrand, R. Nenni, M. Foot y otros. En el discurso del secretariado saliente se presentó un crecimiento del partido que había pasado de tener 17 a 50 federaciones desde el congreso de Suresnes, una militancia cuya composición era en un 78 por cien de trabajadores, y en un 22 por cien de profesionales y funcionarios. Quizá esa misma composición condicionó la declaración ideológica en la que el partido se proclamó como un "partido de clase, de masas y democrático". El congreso adoptó resoluciones muy izquierdistas rechazando la vía socialdemócrata de gestión social, y proclamando su neutralidad respecto a los dos bloques (2).

Junto al PSOE, aunque con una repercusión y representatividad mucho menor se presentaban en la sociedad otros dos partidos socialistas: el Partido Socialista Popular (PSP) liderado por el profesor Tierno Galván, y la Federación de Partidos Socialistas (FPS) constituida por una serie de pequeños partidos socialistas con base regional como el PSC de Cataluña, el PSPV del País Valenciano, el PSG de

Galicia, etc. Estos partidos tuvieron una vida política muy activa durante el periodo de la transición política pero, unos antes de las primeras elecciones de 1977 y otros después, acabaron pronto en el seno del PSOE, pasando por un proceso previo de convergencia unitaria.

Así pues, a comienzos de 1977 se legalizaron los partidos políticos y se convocaron las elecciones generales. En pocos meses el PSOE se lanzó a la campaña electoral con las energías propias de las nuevas generaciones que se incorporaban a la política después de un periodo de clandestinidad, y en este caso acompañado de un buen equipo de técnicos y profesionales y de la capacidad pedagógica que en un periodo muy corto de tiempo había demostrado ya su líder Felipe González, aunque todavía sin haber logrado la unidad de todas las fuerzas del socialismo democrático español. Pero a pesar de su corta experiencia, de la falta de medios, si los comparamos con los que tenía la derecha española heredera del franquismo, y del miedo del propio electorado, que temía un cambio demasiado rápido, el éxito que obtuvo superó sus propias expectativas alcanzando el 29 por cien de los votos, que suponían cinco millones de electores de lo poco más de 18 que ejercieron el derecho al voto (TABLA 1)

TABLA 1

ELECCIONES LEGISLATIVAS JUNIO 1977

	<u>Porcentaje</u>	<u>Escaños</u>
UCD (Unión de Centro Democrático).....	34.61	166
PSOE (Partido Socialista Obrero Español)..	29.27	118
AP (Alianza Popular).....	8.33	16
PSP (Partido Socialista Popular).....	3.47	6
PC (Partido Comunista).....	9.38	20
DC (Democracia Cristiana).....	1.10	--
Nacionalistas Catalanes (CiU).....	3.60	12
Nacionalistas Vascos (PNV).....	2.05	9
Otros	--	3

Electores: 23.543.000

Participación: 18.307.000

Estas elecciones tuvieron la virtud de aclarar el panorama político español y resituar a las fuerzas políticas no según la grandilocuencia o el radicalismo de sus declaraciones sino según el grado de seguimiento popular que tenía cada una de ellas. De esta manera la victoria del PSOE aclaró a su vez el panorama político de la izquierda y promovió un proceso de unidad con la izquierda moderada que no había obtenido resultados positivos. A esto se unió un boom de afiliación de mucha gente que no había tenido ninguna actividad militante bajo el franquismo, con lo cual el PSOE pronto llegó a alcanzar los 200.000 afiliados. Entre los socialistas que engrosaron rápidamente las filas del PSOE se encuentran los diversos grupos del socialismo nacionalista (catalanes, vascos, valencianos....) e importantes grupos del socialismo histórico, de las generaciones del exilio.

A partir de estas primeras elecciones el panorama político y social cambia. Tal como afirma Maravall (3) la presión popular "desde abajo" que había sido un elemento crucial en el proceso de transición para provocar la ruptura perdió impetu, bajó considerablemente el nivel de conflictividad y a la política de confrontación le sustituyó, al menos temporalmente, la política de compromisos quizá debido a la grave situación económica por la que atravesaba el país, que amenazaba con empeorar todavía más si no se tomaban medidas radicales y consensuadas. En estas circunstancias se llegó al Pacto de la Moncloa, acordado por las cuatro fuerzas políticas más importantes -UCD, PSOE, PCE y AP- con el fin de controlar la crisis socioeconómica que podía poner en peligro la estabilidad democrática y el proceso de evolución política. Se trataba de dominar un proceso de inflación, que alcanzaba ya el 30 por cien, introduciendo medidas de austeridad económica a cambio de contrapartidas como el fortalecimiento de la Seguridad Social o la introducción de un sistema fiscal progresivo. Pero esta política de compromisos también estuvo motivada por factores políticos y sociales tan fundamentales como dar estabilidad al período constituyente por el que atravesaba España y contrarrestar los efectos desestabilizadores que provenían tanto de la extrema izquierda (el terrorismo de ETA) como de la extrema derecha (el franquismo bunkerizado).

Los resultados electorales de 1977 plantearon a su vez un nuevo marco político. Los sectores reformistas de la derecha no lograron la mayoría absoluta, en contra de sus previsiones, e incluso en términos globales hubo un ligero predominio del voto de izquierda. De hecho esto dio a las Cortes el carácter de constituyentes. El proceso de "ruptura pactada" quedó impuesto por la voluntad popular y se plasmaría en una Constitución también pactada (4) que se sometió a referéndum en diciembre de 1978. Este referéndum en el que se pronunció favorablemente una abrumadora mayoría de la población española fue el pistoletazo de salida para las elecciones generales y locales que tendrían

lugar en 1979. Los socialistas deseaban celebrar primero las elecciones locales para contar con plataformas territoriales que apoyasen el programa y la campaña de las generales, conscientes además de que sus posibilidades de éxito electoral a nivel local podían ser superiores a las de la derecha. Pero el partido de Suárez temía esas previsiones y convocó elecciones generales para marzo de ese año y las locales para un mes después (TABLA 2)

TABLA 2

ELECCIONES GENERALES MARZO 1979

	Porcentaje de voto	Nº.de escaños
UCD	35,5	167
PSOE	30.8	121
PCE	10.9	23
CD (AP)	5.8	9
CIU	2.7	9
PNV	1.6	7
PSA	1.9	5
H.B.	1.0	3
Otros	9.8	6
Totales	100.0	350

Estos resultados electorales que no suponían un avance significativo para el PSOE fueron interpretados en el seno del partido de forma distinta. Para el sector crítico de los socialistas el grado de abstencionismo que se había producido entre los electores identificados con el PSOE se debía a la política que se había practicado con la derecha, alejados de una actitud de confrontación que era la más apropiada para un partido de izquierdas, lo que a su vez hubiese arrastrado más el voto de la clase obrera. Por su parte los líderes del partido y el propio aparato hacían un análisis en sentido contrario, afirmando que los ataques de la derecha al ideario marxista del partido habían asustado a buena parte del voto posible de la izquierda moderada. El PSOE no podía mantener ya por más tiempo esa contradicción

entre una postura verbal moderada que atraía a los electores y un programa todavía anclado en declaraciones ideológicas marxistas demasiado arraigadas en la política de "clase" y dirigidas exclusivamente a la clase obrera. Había que acercar el partido a las clases medias, técnicos y profesionales que serían sensibles al programa socialdemócrata del PSOE. La composición de las clases en España (5) había cambiado considerablemente en estos últimos años y el partido no podía ser ciego ante estos cambios.

Estas discusiones postelectorales prepararon el ambiente del 28 Congreso que se celebraba al mes siguiente (17 de mayo de 1979). Con la asistencia de unos 1000 delegados se hizo una crítica negativa hacia algunos de los resultados del Pacto de la Moncloa en el sentido de que si bien la recuperación económica pedía sacrificios éstos deberían repartirse de forma más equitativa y no cargar siempre sobre los mismos; hubo también discusiones internas respecto a la confección de las listas de candidatos para las elecciones de 1979 que habían sido controladas en exclusiva por Alfonso Guerra y el grupo andaluz del aparato, pero el tema estrella del congreso se centró en la

definición ideológica del partido. El Secretario General Felipe González había abogado por la supresión del término "marxista" del programa del PSOE, pero la corriente crítica, en este caso representada por Francisco Bustelo y Pablo Castellano defendió el carácter del PSOE como un partido de clase, de masas, marxista, democrático y federal. El intento de la numerosa federación sevillana por enmendar esta moción fue derrotado por el 62 por cien de los delegados contra el 31 por cien y esto provocó la imprevista renuncia de González que se negaba a ocupar la secretaría general de un partido que adoptaba etiquetas anticuadas y contraproducentes para el programa que posteriormente había que presentar en las contiendas electorales.

El sector crítico reclamaba también un sistema de representación proporcional para todos los cargos del partido, defendiendo una mayor democratización interna y, en cuanto a la política de alianzas, eran partidarios de una mayor confrontación con la derecha y un acercamiento al Partido Comunista a fin de favorecer mayorías parlamentarias en los Ayuntamientos y Diputaciones. Por su parte la dirección del partido rechazaba la representación proporcional por temor a la formación de fracciones internas que podían dañar la imagen de unidad, en un momento además en el que la derecha se encontraba cada vez más dividida y la democracia española no tenía suficiente rodaje para asimilar las disensiones internas de los partidos. Respecto a la política de alianzas se rechazaba la alianza con el PC a nivel nacional por temor a que se difundiese una imagen negativa entre el electorado.

Esta discusión interna provocó un encendido discurso del Secretario General en el que rehusaba su reelección en un partido que pretendía actuar con esas premisas, declarando que España no podía esperar a que el partido madurase y él no podía dirigir una formación política cuyo programa no correspondía al sentir de la mayoría de los españoles y de sus expectativas de cambio y renovación. Por su parte la corriente crítica, que carecía de organización,

no ponía en cuestión el liderazgo del Secretario General pero pretendía que éste encabezase resoluciones radicales con las que no estaba de acuerdo y, como entre sus principales representantes no había un liderazgo claro, al dimitir Felipe González y no presentar ninguna lista alternativa al puesto de Secretario, llevaron al congreso a un callejón sin salida, una crisis en la que la izquierda, por falta de coherencia interna y de estructuración, salió muy mal parada y con la imagen deteriorada. A su vez González que había sido uno de los artífices de la reconstrucción del partido y sobre cuya imagen el PSOE había construido los éxitos electorales más recientes, recibió el apoyo de la mayoría de los delegados en el discurso de clausura, cuando el congreso había decidido ya nombrar una Comisión Gestora y convocar un Congreso Extraordinario para septiembre de ese mismo año.

Durante los cuatro meses que mediaron hasta llegar al Congreso Extraordinario las dos partes en litigio prepararon sus propias estrategias, pero el sistema de representación indirecta para la asistencia al Congreso favoreció a la organización del aparato que controlaba la federación andaluza, la más grande, a la que le bastaba ganarse el apoyo de algunas pocas federaciones más para inclinar la balanza de su lado, teniendo en cuenta, además, que el PSOE estaba conformándose ya como un partido de gestión, plagado de cargos públicos y que muchos de los delegados congresuales eran concejales, diputados o funcionarios del partido.

Basada en la moción que presentó la federación andaluza la resolución política aprobada en el Congreso Extraordinario decía que "El PSOE adopta el marxismo como método teórico, crítico y no dogmático para el análisis y transformación de la realidad social haciendo uso de las distintas contribuciones marxistas y no-marxistas que han hecho del socialismo una gran alternativa de emancipación de nuestra época" (6). La izquierda crítica estaba representada por Gómez Llorente, Castellano y Bustelo. Este último defendió que el marxismo constituía la ideología básica del pensamiento socialista; una política socialdemócrata no era la más apta para España dado que la situación económica y laboral requería reformas más profundas en una sociedad muy desigual y el partido debería profundizar en la lucha de clases y en la federalización del Estado que rompiese el dirigismo centralista. González rechazó casi todos estos argumentos defendiendo una política socialdemócrata que era la más apropiada para una sociedad que había experimentado recientemente una evolución en su sistema de clases y a la que el partido debería abrirse si quería captar en su pluralidad la propia complejidad de la sociedad moderna.

El resultado de la votación, en la que Gómez Llorente se presentó al final encabezando la candidatura alternativa a Felipe González, fue contundente y marcó definitivamente la trayectoria del partido, de su programa y del liderazgo para los próximos 15 años; González obtuvo el 86 por cien de los votos, Llorente, que no tardaría mucho en apartarse de la vida política, obtuvo el 7 por cien y hubo otro 7 por cien de abstenciones.

Este congreso definió al PSOE como un partido socialdemócrata y de tinte moderado que se aprestaba a entrar en el juego político priorizando la tarea

parlamentaria sobre las movilizaciones. Un partido con rigurosa disciplina interna, lo que contrastaba cada vez más con la división que sufrían los grandes partidos situados a su derecha e izquierda, es decir la UCD y el PC.

Especial importancia adquiere en ese momento la crisis de la UCD, el partido gobernante que había ganado las dos primeras elecciones. Este partido formado por un conglomerado heterogéneo de políticos de la derecha tradicional, ex-franquistas y nuevos aspirantes se caracterizó por sus luchas internas por el poder, la continua formación de grupos enfrentados entre ellos, la incertidumbre de su liderazgo y sobre todo la falta de un programa coherente, lo cual acarreaba continuas contradicciones en el proceso de decisión política. Esta crisis permanente, por su inconsistencia como partido, le valió su primera derrota en el referéndum sobre el estatuto de autonomía andaluz de 1980, cuando se dirimió la vía a seguir para su aprobación y desarrollo. UCD continuó acaparando derrotas en las sucesivas elecciones autonómicas vascas, gallegas y catalanas hasta llegar a las elecciones generales de 1982 en las que pasó de tener 165 escaños en el Congreso a obtener sólo 11 con la subsiguiente ruptura y desaparición del partido (7).

Este proceso de deterioro de la UCD, que experimentaba además un desplazamiento hacia la derecha, fue aprovechado por el PSOE que, tanto por su moderación política como por su apoyo a una política social de pactos a través de la UGT que contuvo la conflictividad laboral, transmitió a la sociedad española una imagen de alternativa gubernamental a la derecha, que quedó plasmada en el programa de su 29º congreso celebrado en octubre de 1981. El PSOE se presentaba así a las elecciones de 1982 como un partido

unido, coherente y maduro , con un programa moderado que atendia las demandas de múltiples sectores y hacia una llamada a la sociedad española para que optase por el cambio con la promesa de estabilizar el sistema democrático, superar la crisis económica, combatir el desempleo y la desigualdad y desarrollar el sistema de libertades. En el área de la economía proponía una política expansionista que tendría como punto de apoyo la inversión pública. Para combatir el desempleo se pensaba en acortar la jornada laboral y la edad de jubilación así como elaborar planes concretos para el desempleo juvenil. En educación los socialistas se comprometían a realizar una profunda reorganización y democratización del sistema educativo. En el capítulo de las libertades civiles apoyaban una reforma del Código Penal, la despenalización del aborto, una reestructuración de la judicatura y el desarrollo de las libertades individuales. La reforma militar, de la Administración y la Seguridad Social eran otros tantos capítulos del programa así como el pleno desarrollo de las autonomías. La decisión de convertir España en zona desnuclearizada, su oposición a los bloques militares y su deseo de integrarse lo más pronto posible en la Comunidad Europea eran también puntos esenciales de su política exterior.

Este programa lanzado en una campaña electoral brillante con el eslógan "los socialistas apuestan por el cambio", unido al liderazgo gris de Calvo Sotelo, el deseo de estabilidad de la población española como reacción al intento de golpe de Estado de febrero de 1981, y la profunda crisis por la que atravesaba la derecha española dieron al PSOE un éxito electoral sin precedentes, llegando a alcanzar el 48,4 por cien de los votos válidos y el 57,7 por cien de los escaños del Congreso de los Diputados, es decir la mayoría absoluta (TABLA 3)

TABLA 3

Elecciones Generales de 1982

	<u>Porcentaje de votos</u>	<u>Escaños</u>
PSOE	48.2	202
AP	26.6	106
UCD	6.1	12
PCE	4.1	4
CDS	2.9	2
PNV	1.9	8
CIU	3.9	12
Otros	5.6	4
 Total	 100.0	 350

Por primera vez se constituía un gobierno mayoritario y monocolor y, por primera vez en su secular historia, el PSOE ganaba unas elecciones generales que fueron el preámbulo para que seis meses después repitiese esa victoria en las elecciones municipales y autonómicas de tal manera que la mayoría de los gobiernos regionales y de los grandes ciudades pasaron a ser gobernadas por los socialistas (8). Para muchos observadores estas elecciones significaron el final de la etapa de transición política y de crisis permanente, mientras que para otros todavía quedaba por demostrar cuál sería el comportamiento político del PSOE para saber si España había adquirido definitivamente su madurez política y democrática o entraba

en un periodo de mayor inestabilidad acechado por una serie de poderes fácticos que se resistirían a perder su parcela de protagonismo y poder.

Con el PSOE una nueva generación de políticos se instaló tanto en el aparato del Estado como en las administraciones públicas regionales y locales, políticos que a pesar de su inexperiencia estaban dispuestos a hacer valer el peso de los votos y por tanto la importancia de la representatividad popular, como se vio rápidamente en su actitud respecto a los cuerpos del aparato del Estado franquista que mantenían intacta toda su estructura, como el ejército, la policía o la misma Administración Pública. Pero esta firmeza también se demostró en el cambio de actitud respecto a la política económica que pusieron en práctica inmediatamente después. El déficit creciente de la balanza de pagos, el escaso control de la inflación, la falta de competitividad industrial, debido a una estructura tecnológica atrasada, la inexistencia de un sistema fiscal eficiente y, en general, el deterioro de un sistema económico cuya reforma se había aplazado por imperativo político condicionaron sus intentos expansionistas y aconsejaron una política de ajuste para no perder el tren de los países capitalistas avanzados. Pero a su vez esta política de ajuste, que durante la primera legislatura del PSOE (1982-86) tuvo que pactarse con las centrales sindicales, sobre todo con UGT, fue considerada por muchos como un programa liberal de estabilización económica. El Acuerdo Interconfederal, de carácter tripartito, firmado en 1982, dio excelentes resultados para el saneamiento de la economía y su recuperación (Tabla 4), pero ésto se consiguió a costa de presupuestos estatales restrictivos, límites salariales en el sector público, un

duro proceso de reconversión industrial y sacrificando la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones, de tal manera que se forzó la protesta de los sindicatos y la ruptura del Acuerdo a principios de 1984. El paro continuaba creciendo y duplicando la media de los países de la CE, mientras que la cobertura del desempleo no aumentaba al mismo ritmo.

TABLA 4

Datos económicos 1982-86

	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Desempleo (porcentaje de población activa)	16.2	17.7	20.6	21.9	21.5	20.6
Tasa de inflación	14.4	12.2	11.3	8.8	8.8	5.3
Crecimiento del PIB	1.0	2.2	2.2	1.7	2.0	4.8

Anuario El País, 1988.

Sólo a partir del bienio 1986-87 los indicadores económicos comenzaron a cambiar; la inflación se redujo considerablemente, las reservas de divisas aumentaron, la economía crecía alrededor de un 5 por cien y se creaban a ritmo creciente puestos de trabajo. En 1986 el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta aunque con un margen más estrecho que en 1982. La crisis del Partido Comunista que se rompió en diversas formaciones políticas y la presencia de Fraga Iribarne como líder de la oposición determinaban que estos partidos fuesen incapaces de competir con la figura de Felipe González que había dado una imagen de seguridad y moderación. Los socialistas, a

pesar de no haber podido contener el desempleo, habían gobernado con eficacia en los Ayuntamientos, y aplicando una política interclasista mejoraron algunos aspectos de la redistribución de la renta y controlaron la crisis económica llegando a superarla al final de la legislatura. Estos factores positivos unidos a una falta total de alternativa en la escena política les condujo al triunfo electoral de 1986, en el que aunque perdieron 18 escaños, lograron de nuevo la tan ansiada mayoría absoluta que les permitía gobernar con comodidad (Tabla 5)

TABLA 5

Elecciones Generales 1986

	<u>Porcentaje de votos</u>	<u>escaños</u>
PSOE	44.0	184
UCD	9.3	19
AP	26.2	105
PCE	4.6	7
PNV	1.5	6
CIU	5.0	18
Otros	9.4	11
Total	100.0	350

Pero esta pérdida de votos socialistas no fue en beneficio de las otras formaciones políticas. A su izquierda el PC sufrió una derrota considerable como resultado de sus divisiones y luchas internas, y a su derecha el más beneficiado fue el CDS que subió siete puntos y se vio compensado, según unos, por el desplazamiento del voto hacia el centro y, según otros, por su programa de populismo radical.

5.2. Un partido sin fisuras

Una de las características más importantes que han distinguido al PSOE de los otros partidos socialdemócratas europeos y, por supuesto, del resto de los partidos españoles ha sido su unidad y cohesión interna (9). Varias son las causas que confluyen en esta situación. En primer lugar el hecho de que el PSOE se constituya como partido renovado en los últimos años de la dictadura bajo el liderazgo indiscutible de Felipe González. Las pocas agrupaciones territoriales que tenían mayor consistencia y militancia dejaron así en manos del grupo andaluz no sólo el liderazgo sino la organización, a la que fueron a parar el resto de los grupos constituidos en el Estado Español con mucha menor consistencia política. En segundo lugar los grupos socialistas que por el peso específico de sus cuadros podían haber competido con el PSOE eran el Partido Socialista Popular liderado por el profesor Tierno

Galván y la Federación de Partidos Socialistas, es decir los socialistas de las distintas nacionalidades y regiones del Estado. Pero todos ellos o bien fueron barridos por los resultados electorales de las primeras elecciones o habían confluido en el PSOE en el proceso unitario que se verificó antes de ellas. Y, por último, la férrea disciplina interna que se impuso a través de las sanciones o la expulsión. Centralizado en Madrid el poder del aparato y con una estructura fuertemente jerárquica, el partido sólo podía tener dos tipos de disensiones internas, o bien una disensión territorial que en un Estado de las autonomías sólo podía venir de los secretarios regionales y por motivos de competencias de poder o bien una disensión ideológica en base a las divergencias de programas políticos o de alianzas con otros grupos parlamentarios. Un ejemplo de disensión territorial por competencias de poder personal en el ámbito autonómico fue el de Rodríguez de la Borbolla, Presidente de la Junta de Andalucía, mientras que la de Izquierda Socialista ha sido claramente ideológica. Sin embargo la mayor parte de los conflictos internos, como los de Puerta, Damborenea o Leguina, tuvieron como base la exclusión de las listas electorales de sus protagonistas o su pérdida de protagonismo al peligrar su mayoría local.

Hasta el 27º congreso que se celebró en 1976, y en el que el PSOE todavía se proclamó como un partido marxista empeñado en la lucha de clases para superar las desigualdades sociales, no hubo demasiadas disidencias internas. El problema llegó, como ya hemos visto antes, cuando la dirección del partido quiso suprimir el carácter marxista del partido en el 28º congreso, en el que se conformó una corriente crítica encabezada por Pablo

Castellano, Gómez Llorente y Francisco Bustelo para reivindicar no sólo la tradición ideológica del partido a la que no se quería renunciar, sino una mayor democratización interna, con mayor participación de todos y una clara política de alianzas con el Partido Comunista. Para los críticos el partido se estaba convirtiendo poco a poco en una máquina electoral a la americana en la que los estudios de opinión eran más importantes para guiar la política del partido que el propio programa aprobado en los congresos. Los críticos eran también partidarios de la representación proporcional en las estructuras de poder del partido a fin de que su organización interna fuese un modelo de la democracia que se quería transmitir a la sociedad (10)

La respuesta de González a estas críticas y argumentos puso de relieve los cambios que se habían producido en estos últimos años en la sociedad española tanto en la estructura de clases como en la escala de valores y en las demandas de la población. Este discurso de renuncia al marxismo y de apertura a toda la sociedad y no sólo a la "clase" trabajadora no cayó en saco roto entre los congresistas, el 90 por cien de los cuales se podían considerar como pertenecientes a lo que la sociología llama las nuevas clases medias, que además eran late-comers puesto que el 70 por cien apenas llevaban cuatro años de militancia en el PSOE y no conocían otro liderazgo que el de Felipe González.

Después de la atronadora victoria que obtuvo el Secretario General en este congreso, se consolidó todavía más la unidad del partido, y dobló los afiliados en un par de años así como el número de sus agrupaciones (Tabla 6) (11).

TABLA 6

Afilación al PSOE

Años	No. Agrupaciones	No. Afiliados
1977	1.423	51.552
1979	2.230	101.082
1981	2.756	99.385
1982	2.862	112.591

De estos afiliados, a comienzos de los años 80, un 36 por cien eran obreros de la industria o de los servicios, un 20 por cien activos no asalariados, un 16 por cien oficinistas, un 4 por cien docentes, un 4 por cien profesionales asalariados y un 18 por cien agricultores. Eso significaba que también a nivel de militancia, y no sólo de asistencia a los congresos, un elevado porcentaje de afiliados se podían considerar como de "clase media".

Después del Congreso Extraordinario la corriente crítica, que había mantenido en su seno criterios encontrados sobre la forma de organizarse dentro del partido, se estructuró finalmente en 1980 tomando el nombre de Izquierda Socialista y se extendió rápidamente en pequeños grupos a otras federaciones como las de Valencia, Cataluña, Galicia, Asturias y Granada. Su Manifesto proclamaba luchar por una política reformista pero de "clase", en favor de una mayor igualdad, la no alineación con ninguno de los bloques militares, y sobre todo la democratización interna del partido, por la que pedían una representación proporcional en los órganos directivos. El PSOE en el Congreso Extraordinario de 1979 había dado vía libre a las corrientes de

opinión pero no a las tendencias organizadas, de tal manera que la disensión dentro del partido tenía los estatutos en contra y no sabía cómo organizar su protesta sin convertirse inmediatamente en objetivo del castigo reglamentario. De esta manera el aparato conservó siempre en sus manos un instrumento que le permitía cortar de inmediato toda fisura interna, con la convicción de que la unidad era un valor muy apreciado por los electores que, en ese periodo esencial para la historia de la joven democracia española, habían castigado duramente las luchas y desavenencias de los otros partidos del arco parlamentario.

La primera dificultad sería que tuvo el PSOE en ese sentido fue cuando en 1981 unos 300 miembros de Izquierda Socialista, entre quienes se encontraba Alonso Puerta, se unieron al sector histórico para formar poco antes de las elecciones de 1982 el Partido Socialista (PS), nombre que tuvieron que cambiar rápidamente por el de Partido de Acción Socialista (PASOC) ante el recurso presentado por el PSOE por apropiación indebida de las siglas y por sembrar la confusión entre los electores (12). Pero el caso de Alonso Puerta como el de otros muchos disidentes o críticos del partido -Rodríguez de la Borbolla, García Damborenea y el más reciente de Leguina- tiene su origen no tanto en una discrepancia ideológica cuanto en disputas personales de liderazgo o de listas congresuales, que en algunos casos hacen que los antagonistas del aparato deriven hacia disidencias ideológicas, como las de Puerta o García Damborenea y en otros no, como los de Rodríguez de la Borbolla o Leguina. Por tanto hay que distinguir claramente estos casos del grupo de Izquierda Socialista que siempre mantuvo un programa distinto al oficial, coherencia ideológica -y que, a pesar de haberse visto en unos casos expulsados y en otros separados de las instancias del poder- continúan su militancia como corriente interna del partido y reivindicando su Manifiesto-Programa, aunque el escaso número de sus componentes se traduce en un impacto también escaso.

De esta manera las corrientes internas del partido se han limitado a una, Izquierda Socialista, ya que el sector más a la derecha no ha tenido necesidad de organizarse puesto que la política del PSOE se ha posesionado de su programa y ha revalidado a sus posibles líderes, como podían haber sido Boyer o Solchaga. La izquierda, por su parte, no ha tenido ninguna influencia en la política ni en las decisiones del partido, se ha visto repetidas veces descabezada y actualmente arrastra una vida muy precaria. Su mayor actividad se centra en los congresos del partido, pero desde 1980 a 1988 éstos se ha celebrado sin ninguna perturbación destacable y han aprobado por inmensa mayoría los programas de "cambio y modernización" de la sociedad presentados por el sector oficial que a su vez veía convalidada su mayoría por un liderazgo indiscutible y por la victoria electoral en las urnas.

Sólo en el 31º congreso que tuvo lugar a comienzos de 1988 se generó una gran expectación debido al deterioro de las relaciones entre el PSOE y la UGT a causa del programa económico del gobierno y al aumento de la conflictividad laboral que había tenido lugar en los últimos meses. Los dirigentes del sindicato socialista Redondo y Saracíbar habían dimitido como parlamentarios pocos meses antes por su negativa a aprobar los presupuestos generales del Estado para 1988 y habían comenzado a establecer una acción unitaria con el sindicato Comisiones Obreras para luchar

contra la política económica del gobierno a la que acusaban de poco progresista y favorecedora de los intereses del capital en detrimento de los intereses del trabajo. Redondo se dirigió al Congreso con la advertencia de que si el partido no cambiaba su política social pondría al sindicato en un callejón sin salida y no tendría más remedio que enfrentarse abiertamente al gobierno, como así ocurrió en ese mismo año al convocar la huelga general para el 14 de diciembre.

Esta desavenencia con la UGT fue aprovechada también por la izquierda del partido para llamar la atención sobre la "habitabilidad interna". Aquí se puso de manifiesto la disensión de García Damborenea, Secretario General del PSOE en Vizcaya, que viendo amenazado su liderazgo trató de formar una corriente crítica con duros ataques al partido y a su política, hasta que meses más tarde fue expulsado por no atenerse a la normativa de los estatutos.

Ante estos ataques, tanto de la UGT como de Izquierda Socialista y otros líderes regionales, el partido argumentó que los años del ajuste habían pasado y la sociedad española comenzaba ahora a recoger sus frutos con un 5 por cien de crecimiento anual, superior a la media europea, la creación continua de puestos de trabajo, la integración en la Comunidad Europea, que aportaría mayores beneficios y, en general, el asentamiento político de la democracia y la mejora del bienestar social. El reto de los socialistas en este congreso era la preparación inmediata del país para afrontar la creación del mercado único en el seno de la Comunidad Europea a partir de 1993 y para ello los socialistas reclamaban la cooperación de las fuerzas del trabajo y en particular de la UGT. Pero si el PSOE no consiguió convencer a la UGT con este

discurso de resultados, la UGT tampoco convenció al PSOE para que cambiase de política económica y social, con lo cual se producía la primera y fuerte división entre partido y sindicato en la vida política de la moderna democracia española, hasta que pasada la huelga general de 1988 y las elecciones generales de 1989 ambas formaciones se percataron de que el conflicto no había beneficiado sustancialmente ni a una ni a otra. La UGT no consiguió romper la mayoría absoluta del PSOE, que le hubiese dado la razón en la disputa, y la mayoría absoluta del PSOE, no consiguió tampoco cambiar la línea reivindicativa del sindicato. Con la renuncia de Nicolás Redondo a su puesto en la Ejecutiva del partido y al escaño parlamentario y con la disolución de la comisión de enlace entre partido y sindicato ambas formaciones habían consumado su enfrentamiento, lo cual daba pie a la ruptura definitiva de un determinado tipo de relaciones históricas.

5.3. Entre el ajuste y la expansión

La crisis petrolífera de los años 70 incidió en España con especial intensidad tanto por la considerable dependencia del petróleo como fuente de energía como por la falta de respuesta inmediata de los últimos gobiernos de la dictadura. Los responsables de la economía bien por creer que la crisis sería pasajera o bien por la delicada situación política del régimen, en consonancia con la delicada salud del dictador, aplicaron una política económica compensatoria que consistía en mantener los precios de la energía, sustituir la demanda exterior con la demanda interna, intervenir determinados precios y aumentar

sólo en un par de puntos los salarios para controlar la inflación. El resultado de esa política fue un fuerte desequilibrio en la balanza de pagos, un aumento del consumo energético y el consiguiente déficit presupuestario que con la pérdida de capacidad productiva provocó el recrudecimiento de la inflación.

Desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones de junio de 1977, es decir durante el segundo gobierno de Arias Navarro y el primero de Adolfo Suárez la situación económica empeoró mucho más debido a que la atención de los gobiernos se centró fundamentalmente en los aspectos políticos de la transición que quitaron todo el protagonismo a la economía. Desde 1975 el crecimiento de la economía fue inferior al de la OCDE y comenzó a disminuir sustancialmente el empleo, de tal manera que en el momento de las elecciones se registraba una inflación del 25,4 por cien, un déficit de la balanza de pagos que superaba los 5000 millones de dólares y una elevada deuda exterior de 12.000 millones de dólares, distanciándonos considerablemente de las magnitudes que en estos capítulos tenían nuestros vecinos de la CE.

El segundo gobierno Suárez con la inclusión del equipo económico de Fuentes Quintana supondría el primer paso serio para hacer frente a una crisis que se hacía demasiado larga y que otros países habían afrontado ya con cierto éxito. El propio Fuentes Quintana explica la necesidad de este reto afirmando que "una economía en crisis constituye un problema político fundamental. Las evidentes consecuencias directas de la prolongación de la crisis sobre el orden social y político están detrás de esta afirmación. Pero también lo están los efectos políticos de la falta de una respuesta eficiente a la

crisis económica. La búsqueda de soluciones a los problemas económicos se convierte por ello en tarea política prioritaria y urgente para ganar la legitimidad que el régimen democrático necesita, por ello la democracia reclama en sus momentos iniciales más una política de Estado que de partido" (13).

Esta premisa dará paso a los Pactos de la Moncloa que pretendían sobre todo dar una respuesta político-económica a los problemas que planteaba la consolidación de la democracia en los primeros años de su existencia. Se trataba de aplicar un ajuste económico de corte liberal que redujese los desequilibrios y permitiese unos niveles mínimos de crecimiento. Sobre el papel, los partidos políticos del área parlamentaria con mayor representatividad acordaron (14): 1) Medidas de contenido estabilizador: devaluación previa de la peseta, desaceleración del gasto corriente, tope al crecimiento de la masa monetaria y tope salarial para 1978 en función de la tasa de inflación esperada, con cláusula semestral de salvaguardia; 2) Medidas de carácter compensador: fuerte aumento de la inversión pública, extensión progresiva de la cobertura del Seguro de Desempleo, compromiso de mayor financiación de la Seguridad Social a partir de los Presupuestos Generales del Estado, reforma fiscal y tributaria, aumentando el peso de los impuestos directos progresivos, gratuidad progresiva de la enseñanza; 3) Medidas de racionalización del sistema económico: mayor control del gasto público, reforma de la Seguridad Social, reforma del Sistema Financiero, con particular atención a las Cajas de Ahorro y Crédito Oficial, programa de acciones legales en la agricultura, y política energética.

Las medidas de política económica adoptadas contribuyeron a reducir los desequilibrios y a reforzar el

crecimiento en 1978. No obstante la introducción de las reformas institucionales fue mucho más lenta y el clima de concertación política fue desapareciendo después de 1977. La nueva subida de los precios del petróleo en 1979 puso fin a la etapa de moderada recuperación y los desequilibrios volvieron a aparecer.

En realidad estas medidas se correspondían con un plan de estabilización como los que se habían aplicado en otras circunstancias y lugares: devaluación de la moneda, restricción de los salarios, austeridad monetaria a la que se añadiría la reforma fiscal, y la responsabilidad del Estado sobre las consecuencias del desempleo. Con todo, según algunos autores, los resultados en algunos campos fueron rápidos y espectaculares; se contuvo en un primer momento el déficit de la balanza por cuenta corriente y posteriormente se logró un superávit en 1978 que no se conseguía desde 1973, los precios iniciaron un descenso importante en su tasa de crecimiento. A pesar de ello la reforma fiscal no fue capaz de generar recursos suficientes para compensar la política redistributiva iniciada a través de la asunción de costes de desempleo y extensión de la Seguridad Social, con lo que el déficit público se duplicó en términos de PIB y, por otro lado, la tasa de paro en términos de población activa aumentó en 3 puntos. En todo caso, es el período en que se utiliza por primera vez una política activa de regulación de la demanda y de reformas estructurales tan necesitadas por la economía española desde el primer shock petrolífero. (15).

Pero Suárez no continuó esta política de ajuste en los sucesivos gobiernos que presidió hasta 1981. Absorbido como estaba por la velocidad que tomaban los acontecimientos políticos aplicó un programa económico de

circunstancias en el que trataba de mantener el equilibrio de los ajustes y a su vez contentar a los diferentes protagonistas de la economía. En esos tres años el PIB sólo creció un 0,7 por cien, se dobló la tasa de desempleo llegando a alcanzar el 16,5 por cien, el déficit público aumentó hasta el 6 por cien del PIB, la inflación doblaba a la de los países de la OCDE y el déficit exterior alcanzó los 5000 millones. El resumen de este período 1974-82 no fue positivo desde el punto de vista de la modernización del aparato productivo. Las reformas tuvieron una plasmación más legal que real tanto porque los grupos empresariales no deseaban que las cosas cambiaseen como porque la presión social que se desarrolló en esos años exigió muchos gastos en políticas de bienestar y protección social.

Ante estas circunstancias el programa electoral del PSOE para afrontar las elecciones de 1982 trataría de afrontar la crisis política y económica por la que atravesaba el país, desarrollar ampliamente el sistema democrático y las libertades que garantizaba la Constitución y racionalizar la Administración Pública con la finalidad de combatir el desempleo y la desigualdad social. En el preámbulo de su Manifiesto Electoral se afirmaba que la política de los gobiernos de UCD basada en el aumento de los precios, la reducción del coste del trabajo, de los salarios reales, de los puestos de trabajo y la transferencia de los costes de un ineficiente aparato productivo hacia los más desfavorecidos no había estimulado la inversión ni la demanda y había empeorado el empleo. El país no podía tolerar más una política de estas características a costa del paro y la disminución del poder adquisitivo (16). Contra estas medidas el PSOE proponía una política económica expansiva en la

que el gasto público constituiría el motor de la economía. En ese marco adelantaría la edad de jubilación, acortaría la semana laboral, defendería la extensión de la escolarización y aumentaría la edad de la enseñanza obligatoria, pero sobre todo lucharía contra la lacra del paro. Para ello aplicaría una profunda reforma fiscal y actualizaría los impuestos. Otras reformas que contribuirían a una "política de cambio", afectaban a la política universitaria, judicial, administrativa y en general a muchos aspectos de la nueva Constitución, con el intento de provocar un profunda modernización de la sociedad.

Sin duda alguna la economía era uno de los retos más importantes que tenían los socialistas con su nueva mayoría parlamentaria, un problema al que no se había podido hacer frente en los últimos diez años por la delicada situación política que conllevaba la transición democrática . Con un aparato productivo bastante obsoleto que traía aparejado el continuo descenso de la productividad, una mano de obra todavía demasiado extensiva y poco cualificada, que reclamaba continuas subidas salariales para hacer frente a las subidas de los precios y un déficit considerable en la balanza de pagos, el PSOE se enfrentaba al reto de incrementar la competitividad en los mercados internacionales si quería entrar con suficiente respiro en el club de la Comunidad Europea. A estos desequilibrios estructurales había que añadir un escenario político poco estable y un movimiento obrero y sindical en proceso de formación con el agravante de un aumento continuado del paro que en 1984 ascendía ya al 16,4 por cien de la población activa.

Ante estas circunstancias el socialismo español, aleccionado por la reciente experiencia francesa y el fracaso de su política expansiva, cambió muchos puntos de su programa y emprendió el camino con un plan económico basado en la austeridad, reduciendo el gasto público y frenando los salarios con el fin de detener la carrera de la inflación. No se propusieron medidas nacionalizadoras ni de la banca ni de la industria, se afrontó un programa de reconversión industrial para eliminar o reformular los sectores más atrasados de la estructura productiva y, como ya hemos dicho, se llevó a cabo una profunda reforma fiscal. Es decir, se aplicó una política monetaria de signo estabilizador, una política presupuestaria que limitase el crecimiento del gasto público y una política de rentas que moderase el crecimiento de los costes reales del trabajo y los financieros.

La reconversión industrial se debió básicamente al exceso de producción de bienes específicos para los que había una demanda muy limitada, lo que generaba cuantiosas pérdidas. Para hacerle frente se introdujeron nuevos instrumentos como los créditos participativos, los fondos de promoción de empleo y las zonas de urgente reindustrialización. Se reconvirtieron además dos importantes sectores: la siderurgia y el sector naval. La peseta se devaluó en un 8 por ciento, se consiguió reducir el déficit público y la moderación salarial a través del Acuerdo Interconfederal de 1983 entre patronal y sindicatos y del Acuerdo Económico y Social (AES) de 1985-86 entre gobierno, patronal y sindicatos, en el que se establece como objetivo no aumentar los salarios reales a cambio de contrapartidas como subvenciones a la inversión privada, la

creación de un fondo de solidaridad, etc. En este periodo de 1983-85 el crecimiento de la economía a una media del 2 por cien fue moderado y se consiguió una importante reducción en la tasa de inflación, que descendió al 9,8 por cien; así como un equilibrio en la balanza de pagos, pero como contrapartida se continuaban destruyendo empleos de tal manera que la tasa de paro en 1983 era del 17,7 por cien y en 1985 llegó a alcanzar su cuota más alta, el 21,9 por cien, dimensiones que contrastaban fuertemente con las de la OCDE (Tabla 7) (17).

TABLA 7

Datos comparativos entre España y la OCDE

	1960-73		1974-83		1984-86	
	España	OCDE	España	OCDE	España	OCDE
Crecimiento						
del PNB	7.2	5.0	1.6	2.3	1.9	3.4
Inflación	6.7	3.9	16.8	9.2	9.0	6.0
Desempleo	2.7	3.4	18.1	9.0	21.8	8.3

Julio Segura ha descrito bien esta situación de transición al afirmar que "la situación de la economía española a comienzos de 1983 puede ser descrita en breves líneas atendiendo a los principales indicadores: durante el quinquenio precedente el PIB había crecido a una media anual del 0,9 por cien; el desempleo había pasado del 7,4 al 16,5 por cien; la tasa de inflación, que en 1978 había flexionado hasta un 16,5 por cien, se mantenía en el 14,4 por cien; el déficit público, que representaba un lustro antes el 1,8 por cien del PIB, alcanzaba el 5,7 por cien del mismo; el gasto público había aumentado en un 37 por cien en términos reales, siendo la principal causa de ello el incremento real del 62 por cien experimentado por los gastos de transferencia, vinculados en forma casi automática a la profundización de la crisis económica ... En estas condiciones de partida, el Gobierno definió como objetivo prioritario de la política macroeconómica la lucha contra la inflación, articulándola sobre dos pilares fundamentales: el uso activo de la política monetaria y la moderación del crecimiento salarial, decretada en el caso de los funcionarios públicos y pactada en general con el resto de los trabajadores. Los resultados de esta política en términos de los objetivos perseguidos han sido notorios, y sus costes también (como puede observarse en la tabla 8); la inflación se redujo en sus dos terceras partes entre 1982 y 1987, la balanza por cuenta corriente cambió su signo a partir de 1984 y, desde 1986, se comenzó a crecer de forma sensible en términos relativos. Incluso el proceso de destrucción de puestos de trabajo se invierte al final del periodo considerado, pero ello no evita que la

tasa de paro siga creciendo desde el 16,2 hasta alcanzar el 21,5 por cien, ni que el déficit público se mantenga en torno al 5,5 por cien del PIB a lo largo de estos años ... Desde el punto de vista del diseño de la política económica, la estrategia seguida es también nítida; liberalización y ampliación del área de funcionamiento del mercado.

TABLA 8

Evolución real de algunas variables

Período	1983-86	1983	1984	1985	1986
PIB (tasa crecimiento)	2,4	2,1	2,2	1,9	3,3
Tasa paro	20,6	18,1	20,9	21,9	21,5
Déficit público/PIB	6,0	5,9	5,5	6,7	5,7

Se profundiza la flexibilización del mercado de trabajo y el saneamiento -con fondos públicos- del sistema financiero privado; y, en general, se avanza en la obligada vía de adaptar los mecanismos de intervención pública a las normas comunitarias que el gobierno tendrá que seguir a partir de la incorporación de España a la CEE en enero de 1986... El énfasis en la política de saneamiento proporciona un tinte conservador a los planteamientos económicos socialistas. Preocupado por mantener año a año los necesarios equilibrios macroeconómicos -inflación, déficit público, balanza de pagos -, el gobierno trunca expectativas sociales relativas a la reducción del paro, la

mejora del bienestar y la distribución de la renta y la riqueza". (18)

Pero estas medidas de política económica dieron sus resultados a partir de 1986. Entre 1986 y 1988 la economía española creció a un ritmo del 4,5 por cien, se crearon más de 250.000 puestos de trabajo cada año, la inflación se desaceleró hasta alcanzar un ritmo anual del 5,5 por cien. El PIB creció un 4,5 por cien en 1986, un 5,6 en 1987, un 5,2 en 1988 y un 4,9 en 1989. Este crecimiento se ha apoyado en diversos factores tanto internos como externos como el estímulo de la integración en la Comunidad Europea, el aumento considerable de la inversión, sobre todo de la inversión pública y de la extranjera, y esto ha contribuido a reducir significativamente la tasa de desempleo que ha pasado de casi un 22 por cien a algo más del 16 por cien a comienzos de 1990 (19). Pensemos, por ejemplo que sólo en 1987 la inversión privada creció a un ritmo del 14 por cien como resultado de la recuperación de los excedentes empresariales y del fuerte tirón de la demanda interna y lo mismo se puede decir del volumen de importaciones y exportaciones que en 1987 doblaba el de los años 70. Con todo, subsisten todavía graves problemas como el del paro el déficit de la balanza comercial y el déficit público.

En el capítulo de política social, Rodríguez Cabrero ha puesto de manifiesto: 1) que los fundamentos históricos del Estado de Bienestar español hay que encontrarlos en el periodo 1964-75 durante el cual se constituye el entramado institucional de los diferentes sistemas de protección social que, con algunas modificaciones, llega hasta la actualidad y, 2) que durante el periodo 1975-88 asistimos a su proceso de universalización que lleva aparejado el deterioro relativo de los servicios y su calidad. Es decir que el Estado de Bienestar español, prácticamente

inexistente hasta hace muy pocos años, evoluciona hacia formas institucionalizadas primero y democráticas después. A finales de los años 60 se observa un cambio de tendencia en la política social, el gasto social se consolida como primera función del gasto de las Administraciones Públicas Centrales, se acelera el proceso de universalización de la Seguridad Social y aumenta considerablemente el gasto en educación y sanidad (20). La Ley General de Educación de 1970 y la Ley de Bases de la Seguridad Social constituyen el punto de partida del crecimiento del gasto social y son los instrumentos que ponen en práctica los últimos gobiernos de la dictadura para incrementar la capacidad técnica de la fuerza de trabajo y aumentar la demanda agregada del sistema económico, tratando de satisfacer también con ello las expectativas laborales y educativas de las clases medias.

No podemos olvidar que en 1975 Italia gastaba un 22,6 por cien del PIB en protección social, Francia un 22,9 por cien, mientras que España sólo dedicaba un 9,9 por cien, que pasó a ser un 14,6 por cien en 1981, lo que J.M. Maravall interpreta como la voluntad del poder político para apuntalar su legitimidad a través de una mayor financiación de las políticas sociales y de fuertes incrementos salariales (21). En este decenio se impulsa un proceso de universalización del Estado de Bienestar a través de la flexibilización de los requisitos para acceder a las prestaciones de la Seguridad Social y a las pensiones, pasando en este último capítulo de 3 millones de pensionistas en 1973 a casi 5 millones en 1982.

La década 1970-80 es la que muestra el máximo crecimiento del gasto público social respecto del PIB, en un total de 7,2 puntos, lo cual se debe al crecimiento del gasto en servicios sociales y al empleado en la garantía de las rentas, siendo la segunda parte de ese decenio la que mostrará una mayor participación de dicho gasto en el PIB.

El gobierno socialista que accede al poder en 1982 continuará la política expansiva del bienestar, pero al tener que compatibilizarla con un plan económico de ajuste,

con la consiguiente socialización de las pérdidas, algunos capítulos quedarán relativamente desprotegidos. Es el caso de la cobertura del desempleo (TABLA 9) sin contar con fenómenos tan extendidos como el de la economía sumergida o la flexibilización del mercado de trabajo. A principios de la década de los 90 más del 30 por cien de los asalariados trabajaban bajo contratos de alguna manera precarios.

TABLA 9

Desempleo y cobertura de protección

AÑO	PARO REGISTRADO (en miles)	TASA DE COBERTURA
1977	682,4	51,04
1978	818,5	46,68
1979	1.037,2	46,43
1980	1.277,3	48,66
1981	1.566,2	43,01
1982	1.872,6	33,64
1983	2.207,2	26,30
1984	2.475,4	26,37
1985	2.642,0	32,37
1986	2.758,7	31,46
1987	2.924,1	28,97
1988	2.858,3	28,83
1989	2.550,3	34,08

Fuente.- Ministerio de Trabajo

Hay que tener en cuenta además que la Ley Básica de Empleo no contempla la protección de los que buscan empleo, ni el paro de larga duración, con lo cual la cobertura apenas da crédito a su propio nombre. No obstante la proporción de gastos dedicados a la cobertura del paro respecto al presupuesto total de la política de mercado de trabajo en 1988 superaba en España la media de la CEE puesto que el PIB per cápita español es un 25 por cien más bajo que el de la media comunitaria y permite un margen de financiación menor de las actuaciones en el mercado de trabajo. Ambos factores, entre otros, condicionan la aplicación de una política dirigida a crear empleo y modernizar la economía al mismo tiempo.

Esta política de ajuste de la primera legislatura del PSOE llevará aparejada según Rodríguez Cabrero una política social contradictoria, ya que por un lado contendrá el gasto social al reducirse su participación sobre el PIB en la previsión hecha para 1985 (aunque el volumen global de gasto no dejará de elevarse, el crecimiento en intensidad se situará por debajo del del PIB) y por otro, introducirá ciertos mecanismos de compensación frente a los efectos de la crisis: ampliación de la cobertura de parados con prestaciones, protección "asistencial" de parados que han agotado sus prestaciones contributivas y ciertas mejoras en la revalorización de las pensiones mínimas, así como un fuerte impulso al proceso de modernización de los servicios sociales personales, junto a la universalización de la enseñanza preescolar y la incapacidad de abordar con firmeza la reforma de la sanidad ante las insuficiencias financieras, resistencias corporativas y contradicciones institucionales inherentes a la propia reforma diseñada. La política social en su conjunto será restrictiva como correspondía a una política industrial de ajuste y sus efectos están llevando al planteamiento de rearticular la relación entre política económica y política social sin renunciar al proceso de modernización industrial de forma que se quiebre la tendencia o tendencias dualizadoras que la crisis ha

imprimido en la sociedad española y que los diferentes corporatismos sociopolíticos han reforzado. (22)

Con todo, el gasto público en España ha evolucionado favorablemente pasando de un 28 por cien del PIB en 1977 a un 37 por cien en 1982 y a un 42 por cien en 1988 acercándose considerablemente, aunque con retraso, a la media de los países de la OCDE. Lo mismo ha ocurrido con el gasto social, que ha pasado de representar un 62 por cien en los presupuestos del Estado en 1982 a un 72 por cien en 1989 (23). Esto supone que desde 1983 la Seguridad Social ha incrementado en 884.000 las pensiones, la población protegida por el sistema sanitario se ha incrementado en 4.434.797 personas y las enseñanzas preescolar y básica han quedado prácticamente universalizadas, habiéndose ampliado con la LOGSE la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Según Fernández Marugán esta universalización ha supuesto que si en 1974 la Seguridad Social representaba el 8,8 por cien del PIB, en 1982 era el 15,3 y en 1989 el 18 por cien, aunque todavía nos separan 10 puntos con respecto al gasto social que aplican otros países de nuestro entorno (24). Pero este cálculo parece un tanto optimista porque, según un estudio publicado en diciembre de 1988 por la Comisión Europea, España figuraba en penúltimo lugar en cuanto a cobertura social, con un 17,4 por cien del PIB, frente a un 32,8 por cien que destinaba Holanda, y aunque es verdad que las previsiones marcaban una mayor tasa de aumento para España (el 3,6 por cien) hasta 1990 no por ello abandonaba su penúltimo lugar en la tabla en la cobertura social y sanitaria.

Así pues, la integración de la economía española en la CE forzó al PSOE a adoptar estrategias económicas que acelerasen la integración con el menor grado posible de subordinación teniendo que dejar para más adelante políticas progresistas en el terreno de lo social. Sólo a partir de 1986-87 es cuando comienzan a dejarse sentir los efectos positivos de esta decisión sobre todo en el campo de la educación, la sanidad y las pensiones (TABLA 10) (25)

TABLA 10

Gasto público (en miles de millones)

	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>
Sanidad	1544	1760	1976	2317
Educación (al mes)	993,2	1187	1404	1666
Pensiones	2407	2647	2951	3334

A pesar de este esfuerzo Fernández Marugán subraya que en sanidad es imprescindible incrementar las dotaciones para evitar la descapitalización de las instituciones sanitarias, mejorar la calidad del servicio y corregir los desequilibrios territoriales. Rodríguez Cabrero concluye que el balance del periodo 1983-88 es un conjunto de claroscuros en el que la política social ha estado determinada por los imperativos de la política económica, es decir, que las políticas redistributivas se han desarrollado en función de las políticas de competitividad y de integración de nuestra economía en el contexto internacional, lo cual ha permitido desarrollar un proceso de universalización pero en detrimento de la calidad de las prestaciones. De esta manera en España se ha configurado un sistema de protección básico pero cuya insuficiencia o baja calidad permite consolidar sectores privados rentables, con lo cual la protección se estructura en una jerarquía que va desde el segmento más bajo (parados, marginados) que se han descolgado total o parcialmente de los sistemas públicos de protección, pasando por un grupo mayoritario que utiliza la prestaciones públicas básicas complementándolas con los sistemas privados de protección hasta aquellos que sólo utilizan estos últimos.

Por último conviene decir algo sobre el tema de la pobreza, del que un estudio aparecido en 1984 extraería conclusiones bastante pesimistas al afirmar que, aun aplicando un cálculo moderado puede pensarse que unos 8.000.000 de españoles se encuentran en situación de

pobreza, nivel que es muy superior al del conjunto de los países de la Comunidad Europea, y que constituye un fenómeno de carácter estructural cuyo factor más determinante es el desempleo. La escasa capacidad de organización y asociación de este gran colectivo es una de las causas más importantes de su perpetuación. No parece además que esta situación vaya a mejorar si no se toman medidas también estructurales para poner remedio a esta lacra social de las economías desarrolladas que generan desocupación y bajo nivel cultural, que no se preocupan por el reciclaje de los excedentes laborales ni por atender las necesidades de las minorías étnicas o culturales (26).

Así pues entre los especialistas de varios países el comportamiento económico y social del PSOE ha sido etiquetado como el más neoliberal entre todos los partidos socialdemócratas europeos. Donald Share lo califica como un ejemplo de "fracaso socialdemócrata" ya que el PSOE no cumplió muchos de los puntos del programa que presentó al electorado en 1982, y más tarde, cuando el ajuste económico ha dado resultados positivos, sólo ha practicado una política de redistribución más profunda presionado por las reivindicaciones sindicales (27). Otros han justificado esta conducta debido a que la primera asignatura pendiente que había que superar era la del propio sistema democrático, con el afianzamiento de los partidos políticos y las instituciones sociales que permitieran una política económica más socialdemócrata y sin sobresaltos, dada la experiencia histórica que arrastraba España.

Tampoco ayudó a poner en práctica un programa económico y social más socialista ni la herencia económica que recibió el PSOE de la derecha española ni el contexto internacional de la segunda crisis petrolifera. Una respuesta a las tesis que interpretan el comportamiento del PSOE como "derechista" la ha dado J.Zambrana (28) demostrando que los socialistas españoles en este periodo de gobierno, que todavía dura, han aumentado considerablemente el gasto de las Administraciones Públicas respecto al PIB, que ha pasado del 36,8 por cien en el periodo 80-84 al 42,2 por cien en 1989, han institucionalizado y aumentado también la presión fiscal que ha pasado del 31,8 por cien en el periodo 1981-84 al 39 por cien en 1989, han doblado en este mismo periodo el gasto en protección social, han triplicado la dotación presupuestaria en educación que ha pasado de 542000 millones de pts. en 1982 a 1.527.000 millones (un billón y medio) en 1989, han comenzado a recuperar empleo a partir de 1986 aunque éste sea uno de los problemas más difíciles de afrontar, y por todo ello no se puede afirmar que ha practicado una política de derechas, sino una política socialdemócrata a largo plazo que ha fortalecido las bases económicas, políticas y sociales del país.

5.4. El resurgir de los sindicatos

La reconstrucción del sindicalismo español comenzó en la década de los sesenta en un clima político de

clandestinidad y marcado geográficamente por el desarrollo de las grandes empresas en las áreas más industrializadas. El movimiento obrero que se forma en esos años comienza su andadura alrededor de Comisiones Obreras (CCOO) y sólo más tarde de este nutrido grupo de composición heterogénea comenzaron a desgajarse otros más pequeños. No vamos a detenernos aquí en la historia pormenorizada de cada uno de ellos, así que para nuestro propósito diremos que a finales de 1975 cuando la dictadura comenzaba sus primeros ensayos reformistas el movimiento obrero y los primeros grupos sindicales tuvieron una intervención decisiva en el proceso de transición democrática que frustró los intentos continuistas del régimen.

La primera vez que las cuatro centrales sindicales más importantes comenzaron a dejar sentir su voz fue con motivo de las últimas elecciones del sindicato vertical celebradas en 1975. Las distintas organizaciones adoptaron posiciones contrapuestas: mientras UGT y CNT proponían la abstención, CCOO y USO convocaban a la participación. Los partidarios del boicot insistían en el peligro de una integración de los trabajadores en el aparato verticalista, que se vería así reforzado e incluso legitimado. Por su parte CCOO y USO planteaban la necesidad de presentar candidatos representativos para ejercer, desde dentro y desde fuera del sindicato vertical, un nuevo tipo de sindicalismo (29).

Poco después el 12 de diciembre de 1975 tomaba posesión el primer Gobierno de la Monarquía presidido por Arias Navarro y en el que su ministro de Hacienda, Villar Mir, ratificó la congelación salarial dictada el 14 de noviembre. Recordemos que a finales de 1975 vencían en toda España los convenios colectivos, regulados por la Ley de 19-XII-73, tanto los que habían sido negociados para dos años como los de vigencia anual, lo que produjo una concentración y expectación fuera de lo común. Se trataba de negociar, según datos del Ministerio de Trabajo un total de 1806 convenios que regularian las condiciones salariales y laborales de 3.793.736 trabajadores (30).

Así pues, en vísperas del período culminante de la negociación colectiva, se prorrogaba para todo 1976 el decreto de topes salariales dictado el 7 de abril del año anterior que suponía que los aumentos por convenio no podrían subir en ningún caso por encima del IPC (que según datos oficiales había sido en 1975 del 14,1 por cien). Se trataba, a todas luces, de imponer por decreto una "tregua social", limitando el margen de negociación colectiva y descargando todos los efectos de la crisis exclusivamente sobre los trabajadores. La respuesta no se hizo esperar y tan sólo en los primeros meses de 1976 se contabilizaron 723 conflictos colectivos con la participación de 376.142 trabajadores y un total de 9.178.003 horas de huelga, según cifras oficiales. La represión del gobierno Arias-Fraga tampoco se hizo esperar y los trabajadores sufrieron más de mil despidos en los sectores de la construcción, metal y textil, además de numerosas detenciones, asambleas disueltas y violentos enfrentamientos y muertes.

Un paso importante e incluso espectacular en el largo proceso hacia la normalización democrática lo constituyó la celebración en plena Semana Santa de 1976 del 30º Congreso de UGT en un hotel de Madrid.

Asistieron unos 600 delegados en representación de los 6974 afiliados con que contaba entonces la organización, y pese a las evidentes contradicciones formales y de fondo entre las que se desarrolló, dicho congreso fue valorado positivamente por todas las corrientes sindicales del país.

En la resolución final, se insistía en su voluntad unitaria: "en las actuales circunstancias el camino de la unidad se promueve por una triple vía: a) la unidad de acción en las luchas cotidianas, b) la elaboración conjunta de plataformas reivindicativas que respondan a las necesidades generales de la clase obrera, y c) la coordinación y entendimiento entre las distintas organizaciones sindicales existentes para precipitar la ruptura sindical a partir de la unidad de acción ..., que finalmente pueda conducir a que los trabajadores decidan libremente la construcción de un sindicalismo unitario" (31).

La celebración de este congreso supuso para UGT una excelente ocasión para potenciar su organización y afiliación, hasta entonces centrada casi exclusivamente en activos núcleos vascos y asturianos y en algunas provincias andaluzas.

Ante la dinámica emprendida por UGT tras la celebración del congreso, los dirigentes de CCOO que habían esperado el momento y la posibilidad de articular un amplio movimiento sindical unitario que forzara la ruptura política y la celebración de un Congreso Sindical constituyente, deciden acelerar la estructuración de su movimiento y la vinculación organizativa de los miles de trabajadores que participaban en el mismo. Así, el 24 de mayo del mismo año se reunió en Barcelona la Coordinadora General de CCOO y decidió convocar una Asamblea General para los días 27, 28 y 29 del mes siguiente. Pero, contrariamente a lo ocurrido dos meses antes con UGT, el Gobierno Arias-Fraga prohibió la pretendida Asamblea de CCOO antes incluso de que fuese presentada la solicitud correspondiente, lo que obligó a CCOO a reunir su Asamblea General todavía en la clandestinidad.

El 17 de octubre, su Coordinadora General decidió iniciar de inmediato el proceso de afiliación a la Confederación Sindical de CCOO, poniendo en circulación los primeros "carnets", abriendo más o menos solapadamente sus primeros locales y acelerando el proceso de su organización territorial y federativa. Por su parte, la USO celebró su "1a. Asamblea General de delegados de Secciones Sindicales" del 10 al 12 de octubre en Barcelona.

Así pues, vemos cómo a lo largo de los diez primeros meses de 1976, antes incluso de que llegue a cumplirse el primer aniversario de la desaparición del dictador, las organizaciones sindicales, pese a los primeros enfrentamientos y al trato evidentemente diferente de que fueron objeto por parte de los sucesivos gobiernos, impusieron su presencia e intervención social.

Pese a sus lógicas diferencias, más de táctica coyuntural que de principios estratégicos, las organizaciones sindicales venían manteniendo con anterioridad contactos más o menos esporádicos que cuajaban en llamamientos o convocatorias unitarias en determinados momentos y en luchas puntuales. Como resultado de estas acciones se crea embrionariamente la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, aparecida incialmente en Euzkadi, en marzo de 1976, integrada por CCOO, UGT, USO y ELA-STV. Tras largas y en ocasiones difíciles negociaciones "al más alto nivel", el 22 de julio nacia oficialmente la COS, integrada a nivel estatal por CCOO, UGT y USO y concebida, según consta en su "Manifiesto a los Trabajadores", como "un organismo de unidad de acción, entendida ésta en la perspectiva de la unidad sindical, exigencia irrenunciable de la clase trabajadora para asegurar eficaz y completamente la defensa de nuestros intereses de clase" (32).

La "Plataforma reivindicativa común" elaborada por la COS resultaba importante tanto por su origen y virtualidad unitarias como por su especial oportunidad: en el cuarto trimestre de 1976 iban a negociarse en todo el Estado un total de 1998 convenios colectivos, que afectaban a 2.023.746 trabajadores distribuidos en 497.580 empresas. Se trataba de una "plataforma" con unas características claramente socio-políticas, ya que entre sus 30 puntos encontramos reivindicaciones tanto de índole estrictamente salarial como sociales y políticas.

Pronto iba a tener la Coordinadora de Organizaciones Sindicales la oportunidad de medir su capacidad de convocatoria y movilización de masas: el 8 de octubre de 1976 el Consejo de Ministros ante la imposibilidad de garantizar una "paz social" negociada con los sindicatos a cambio de nada, decidió imponer el pacto social por decreto, congelando no sólo los salarios, sino, fundamentalmente, la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores. En respuesta a esta agresión gubernamental la COS hizo pública el 18 de octubre una convocatoria de paro de veinticuatro horas para el 12 de noviembre.

En la misma convocatoria de paro, las centrales sindicales, tras rechazar rotundamente las graves medidas socio-económicas impuestas por el Gobierno, planteaban la posibilidad de "encontrar una solución positiva" que exigiría el reconocimiento de las libertades políticas y sindicales, la amnistía laboral y la negociación entre las fuerzas sociales en presencia de un programa económico contra la inflación y el paro y por la reactivación de la producción, con la participación de los sectores afectados y respetando las necesidades inmediatas de los trabajadores (33)

La respuesta a la convocatoria de la COS fue muy amplia y demostró su capacidad de movilización, puesto que pararon más de dos millones y medio de trabajadores, aunque poco después el Comité Federal de UGT decidió no acudir más a ninguna de las reuniones de este organismo unitario sentenciándolo con ello a muerte.

Con todo, la conflictividad laboral experimentó a lo largo de 1976 un crecimiento espectacular, tanto en el número de conflictos registrados como en el de participantes y horas no trabajadas: según datos de la propia "Organización Sindical", tan sólo de enero a noviembre de dicho año se contabilizaron 1472 conflictos en toda España, con la participación de 3.495.305 trabajadores, lo que supuso un total de 101.714.666 horas no trabajadas, equivalente a un incremento del 1000 por cien respecto a todo el año 1975 (34)

La decidida intervención de los sindicatos acabaría pronto por obligar al Gobierno a simplificar y acelerar los trámites necesarios para su legalización. Así, el 22 de abril y por Decreto no. 873/77 del Ministerio de Relaciones Sindicales, se regularía el depósito de Estatutos que en la práctica iba a suponer su automática legalización, aunque el Decreto continuase manteniendo la posibilidad de recurrirlos legalmente, cosa que no llegó a suceder prácticamente en ningún caso. Así pues en la mañana del día 28 de abril de 1977, los representantes de las centrales sindicales se personaban en la cuarta planta del edificio ministerial del Paseo del Prado de Madrid para depositar en la "ventanilla" correspondiente sus Estatutos. A partir de ese momento, todo el mundo en CCOO, UGT y USO pensó y actuó como si hubiesen sido ya automáticamente legalizados aunque, ateniéndose a la letra de la Ley del 1

de abril, tendrían que pasar 20 días para que adquiriesen personalidad jurídica (35).

En el momento de la legalización, cuatro grandes centrales sindicales configuraban el espectro sindical en nuestro país: dos de ellas, CNT y UGT, con una historia casi centenaria y las otras dos, CCOO y USO, nacidas al calor de las luchas obreras bajo el franquismo. Según los datos propios facilitados por cada una de ellas a la revista GDS, su implantación a finales de abril de 1977 era la siguiente: CCOO contaba entonces con un total de 180.000 afiliados en toda España; UGT declaraba 120.000 afiliados; USO daba una cifra de 83.547 afiliados; y CNT por su parte confesaba encuadrar "unos 20.000 trabajadores". Simultáneamente y a marchas más que forzadas hubo que poner en pie toda la infraestructura de locales y servicios sindicales (abogados, economistas, técnicos, asesores, publicaciones y servicios de prensa, de distribución, etc), a partir tan sólo de las cotizaciones voluntarias de los afiliados, que oscilaban entonces entre 50 y 100 pesetas, según los casos. El hecho es que, en pocos días, el índice de afiliación sindical se incrementó espectacularmente: semanas después de las elecciones generales de junio de 1977, la prensa daba cuenta de que el 17 por cien de la población asalariada, es decir, 1.400.000 trabajadores, se habían afiliado a los sindicatos de clase, que recogían así el fruto de largos años de lucha y resistencia.

Pero a mediados de 1977 la situación económica había empeorado ostensiblemente, con una tasa de inflación que rondaba el 30 por cien, una deuda externa que se había doblado en dos años y medio, un desempleo que pasaba del 6 por cien y unas subidas salariales que se hacían imparables en el marco conflictivo en que se desarrollaban. Estas

circunstancias llevaron al gobierno a reunirse con los representantes de los principales grupos parlamentarios del Congreso para establecer un programa de saneamiento y reforma de la economía que se plasmaría en los denominados Pactos de la Moncloa. Desde el punto de vista estrictamente laboral los Pactos de la Moncloa supusieron la primera respuesta a la crisis de las instituciones del mercado de trabajo y a su incidencia en los mecanismos de determinación de los salarios, haciendo frente a las tensiones inflacionistas a través de la articulación de una política de rentas -pactada a nivel político- que establecía un tope máximo al crecimiento de la masa salarial bruta y, por tanto, al de la retribución salarial de los trabajadores. Paralelamente se establecía una serie de contrapartidas y reformas institucionales con las que se pretendía paliar los efectos negativos que sobre la clase obrera ejercían el paro y la inflación, al tiempo que se introducían importantes modificaciones en el modelo de crecimiento económico. Dichas contrapartidas y reformas institucionales se concretaban, por una parte, en un aumento de las pensiones y de la cobertura del seguro de desempleo, así como con una cláusula de salvaguardia para poder adquisitivo de los salarios y, por otra, en una reforma fiscal, de la Seguridad Social y del sistema crediticio, de la política agraria y pesquera, de los acuerdos sobre construcciones escolares, urbanismo y viviendas, el Estatuto de la Empresa Pública, etc..., que tuvieron un grado de cumplimiento muy desigual. (36)

El pacto incluía desde la perspectiva de la defensa del poder adquisitivo de los salarios, una cláusula de salvaguardia según la cual si durante el primer semestre de 1978 el índice de precios al consumo subía más del 11,5 por

cien, los salarios deberían crecer automáticamente en el mismo porcentaje en que se superase dicho tope, lo que de hecho no llegó a ocurrir. Asimismo, al establecerse el tope del 22 por cien en términos de "masa salarial" se abrían algunas posibilidades de negociación para las centrales sindicales, al menos en dos posibles direcciones estratégicas de gran importancia: la redistribución intrasalarial y la modificación del modelo salarial existente .

En vísperas precisamente de la negociación de los convenios colectivos, la firma de los Pactos de la Moncloa cogió a las centrales sindicales "descolocadas", lo que provocaría desde el primer momento una actitud confusa, defensiva y desunida de quienes, conscientes en el fondo de lo justificado de su necesidad y condicionados por sus propias contradicciones internas no lograron asumir, explicar y defender en su conjunto la nueva estrategia política y sindical que se inauguraba.

Por estas fechas se producen numerosas jornadas de reflexión en las que se discute sobre el modelo sindical de las grandes sindicatos CCOO y UGT. Los líderes de Comisiones defendían los pactos de tipo político, económico y social de larga duración mientras que UGT defendía acuerdos que se limitasen exclusivamente a los aspectos socioeconómicos y en los que los partidos políticos no deberían tener ningún protagonismo. Siendo inminente el primer proceso electoral se empezó a discutir también sobre las listas abiertas o cerradas. Esta discusión -que más tarde reaparecerá bajo otras formas: Comité de Empresa/Secciones Sindicales- puede parecer académica, pero no lo era en

absoluto, ya que tanto en un caso como en otro lo que estaba en juego, en el fondo, eran dos concepciones diferentes del sindicalismo que, con el peligro inherente a todo esquematismo, podríamos sintetizar así: sindicalismo de participación/sindicalismo de gestión.

En esencia, la discusión se centraba en que UGT, por una parte, defendía el sistema de listas electorales cerradas, lo que supone que forzosamente cada trabajador debía votar a una de las diferentes listas presentadas, sin posibilidad de hacerlo al mismo tiempo por líderes sindicales de distinta afiliación; por su parte, CCOO mantenía su propuesta de listas abiertas, por entender que de ese modo cada elector puede votar a los hombres o mujeres que gozaren de su mayor confianza, estuviesen integrados en una candidatura u otra.

En su primera versión, la polémica fue "resuelta" de una manera salomónica por el Decreto que consagraba el procedimiento de listas abiertas para las empresas con menos de 50 trabajadores y de listas cerradas para las que contaran con una plantilla superior a los 250 trabajadores, estableciendo un procedimiento intermedio para las empresas medianas, entre 50 y 250 trabajadores.

Con estos planteamientos se afrontaron las primeras elecciones sindicales de 1978 en las que CCOO obtuvo el 34,5 por cien de los representantes elegidos, UGT el 21,6 por cien y USO el 3,7 por cien. Estas primeras elecciones aclararon el panorama sindical y pusieron de manifiesto que las preferencias sindicales de los trabajadores se inclinaban hacia dos grandes organizaciones dejando en franca minoría a los otros sindicatos más pequeños que al no obtener representatividad quedaron deslegitimados para situarse en el mismo nivel que los otros dos para afrontar la negociación colectiva.

Estos años de 1978 y 1979 fueron de gran intensidad conflictiva; en 1978 hubo 1128 conflictos que implicaron a 3.863.840 trabajadores y en 1979 2.680 conflictos con un total de 5.713.239 trabajadores. Esta conflictividad era convocada y liderada casi siempre por CCOO, que se oponía también a la negociación colectiva para 1979. Ante esta estrategia de confrontación UGT decide romper la unidad sindical y suscribe con la patronal (CEOE) un Acuerdo Básico Interconfederal con voluntad de diálogo y negociación. Como consecuencia de este acuerdo el PSOE, que era el partido mayoritario de la oposición renuncia a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley del Estatuto de los Trabajadores (37)

Para la UGT, la firma de estos Acuerdos "supuso un paso importante en el desbloqueo de la normativa laboral existente", según se afirma en la "Resolución de Política Sindical" aprobada por su 32º Congreso, en la que se constata igualmente que la iniciativa de tales negociaciones correspondió a la propia UGT que "venía reclamando que el desarrollo de las Leyes de carácter laboral y sindical que prevé la Constitución no podía hacerse sin tener en cuenta los criterios de las centrales sindicales".

Entre las cuestiones que pueden calificarse claramente como positivas, al menos a nivel de las declaraciones de principios, cabe destacar el reconocimiento de un delegado de UGT en las grandes empresas, según consta en el párrafo cuarto del artículo 7º del "Acuerdo": "A los efectos de legitimar la presencia de la UGT a nivel de empresa, CEOE manifiesta que, en las unidades de producción a través de ella representadas, será reconocida y legitimada la

presencia de un delegado de la Unión General de Trabajadores que inexcusablemente habrá de ser trabajador en activo de las respectivas empresas, cuando las plantillas de estas últimas excedan de 250 trabajadores por centro de trabajo, y siempre que el nivel de afiliación a dicha Central supere el 15 por cien de las mismas". Asimismo, en el párrafo séptimo del artículo 5º se insistía en la autonomía de las partes negociadoras y en la necesidad de reducir el papel intervencionista de la Administración.

La importancia del Acuerdo radicaba, sin embargo, en que enmarcaba las reglas del juego de las relaciones laborales, que la ausencia de la Administración Pública suponía el abandono de la política intervencionista del Estado, y que preparaba el terreno para futuros acuerdos. Así, para afrontar el plan económico de 1979 la UGT lanzó una propuesta a CCOO y CEOE para discutir un posible acuerdo marco en el que se abordaran las cuestiones más importantes de las relaciones laborales por un periodo que oscilaría entre uno y tres años. Pero el ambiente en que se iniciaron las conversaciones no era muy propicio ya que los sindicatos acudían a la mesa de negociación enfrentados y cada uno de los interlocutores tenía una concepción distinta del Acuerdo al que se debía llegar; CEOE y UGT coincidían en que lo que se debía negociar era un convenio de eficacia general, mientras que CCOO se pronunciaba por un Acuerdo de mínimos que no suplantase la posterior negociación articulada de los convenios colectivos. Finalmente el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) se suscribió sólo entre UGT y CEOE en enero de 1980.

El aspecto más importantes del AMI fue conseguir una mayor racionalización y ordenación del proceso de negociación colectiva tendente a crear un clima de confianza mutua y de mayor transparencia en las relaciones laborales evitando una conflictividad innecesaria; por primera vez los interlocutores sociales fijan criterios salariales sin intervención del gobierno y lo acordado tendrá naturaleza contractual para ambas partes. De esta manera se fijó una banda de incremento salarial entre el 13 y el 16 por cien, y se llegó a establecer acuerdos sobre la reducción de la jornada de trabajo, las horas extras, la productividad y el absentismo. (38)

Esta política de concertación comportó un espectacular descenso de la conflictividad en 1980 (Tabla 11).

TABLA 11

CONFLICTIVIDAD LABORAL

AÑO	NO.HUELGAS	NO.TRABAJADORES AFECTADOS (en miles)	JORNADAS NO TRABAJADAS (en miles)
1977	1.194	2.955,6	16.641,7
1978	1.128	3.863,8	11.550,9
1979	2.680	5.713,2	18.916,9
1980	2.103	2.287,0	6.177,5
1981	1.993	1.944,9	5.153,8
1982	1.810	1.058,9	2.287,6
1983 +	1.451	1.483,6	4.416,7
1984	1.498	2.242,2	6.357,8
1985	1.092	1.511,2	3.223,5
1986 ++	914	857,9	2.279,4
1987	1.497	1.881,2	5.025,0
1988	1.193	6.692,2	11.641,1
1989	1.047	1.382,1	3.685,4

Fuente: Ministerio de Trabajo. Elaboración propia.

(+) A partir de 1983 no se incluyen los datos de Cataluña

(++) A partir de 1986 no se incluyen los datos de Cataluña y el País Vasco

Sin duda, la posición más incómoda fue la de CCOO, que habiendo participado activamente en las negociaciones, con aportaciones y objeciones importantes, decidió descolgarse a última hora manifestando su oposición al Acuerdo por

considerar que "tal y como ha quedado, representa el intento de que los trabajadores asuman la actual crisis del capitalismo y que acepten el hecho de que deben colaborar a salir de ella en los términos en que a aquél le interesa". Postura que tuvo su repercusión más inmediata en las elecciones sindicales que se celebraron a finales de ese mismo año 1980, en las que CCOO obtuvo el 30,87 por cien de delegados frente a un 28,29 por cien de UGT, que se colocaba así al mismo nivel que Comisiones y mejoraba ostensiblemente su representación en las grandes empresas. Estos resultados del pulso mantenido entre ambas centrales sindicales se interpretaron como un rotundo fracaso de la estrategia maximalista de CCOO y el triunfo del modelo de sindicalismo dialogante patrocinado por UGT. Triunfaba así la política iniciada con el Acuerdo Básico Interconfederal y continuada con el Estatuto de los Trabajadores, el AMI y los convenios de 1980. El AMI suponía a su vez una consolidación y apertura a nuevas posibilidades de la acción sindical en las empresas, tanto por el reconocimiento de las Secciones Sindicales como por la regulación de sus posibilidades de intervención en el seno de las mismas.

En ese mismo año y con motivo de la adhesión de USO al AMI este sindicato sufrió su última crisis consolidándose definitivamente la bipolaridad sindical. Todos los analistas coincidían en señalar que se había producido una clarificación prácticamente definitiva del espectro sindical español, con la consolidación a nivel estatal de dos grandes centrales y el fracaso de la tentativa de articular

en torno a USO un "tercera fuerza" de maniobra fàcil e ideología difusa que aglutinase el disperso abecedario "independiente", corporativista o amarillo. Asimismo, se constataba que el grado de sindicalización del país no se había modificado apenas, que CCOO y UGT juntas no lograban ampliar el àmbito de su influencia, sino que se había producido tan sólo un equilibrio electoral entre ambas. Según todos los indicios, no se trataba tanto de inhibición o abstencionismo electoral, ya que las tasas de participación en las votaciones, allí donde se celebraron elecciones, fueron muy altas (alrededor del 80 por cien en términos globales), sino que el problema era y sigue siendo aún hoy la debilidad organizativa y estructural y de capacidad de atracción entre determinados colectivos laborales, que configuran en España un sindicalismo de afiliación muy parecido al sindicalismo francés pero diferente del sindicalismo de representación que caracteriza a sus homólogos de Alemania o Italia (Tabla 12)

TABLA 12

AFILIACION SINDICAL
(en miles)

AÑO	UGT	CCOO	USO	OTROS	TOTAL	TASA AFILIACION
1978	1750	1820	400	600	4570	54,37
1980+	610	740	130	280	1760	22,23
1982	300	380	60	150	890	11,50
1984	310	385	45	90	830	11,35
1986	420	460	48	130	1058	13,82
1988	550	590	55	200	1395	16,70
1990++	630	670	62	270	1632	18,37

Fuente.- Elaboración propia en base a datos de las organizaciones respectivas.

(+) A partir de este año se utiliza la media anual de cotizantes, mucho más ajustada que la de afiliados nominales

(++) Datos provisionales.

En cualquier caso, el resultado de esta segunda convocatoria electoral iba a tener muy pronto repercusiones evidentes, aproximando los planteamientos y estrategias de las dos grandes centrales hasta el punto de que medio año antes de que se agotara la vigencia del AMI, el 9 de junio de 1981, se suscribiría tras largas y difíciles negociaciones el ANE, cuyo contenido y protagonistas demostraban que se había producido algo más que un simple cambio de siglas.

Las negociaciones de lo que había de ser el Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE) han sido calificadas como el

Pacto del miedo (39) aunque comenzaron antes del frustrado golpe de Estado del 23 F. Según Estefanía y Serrano el ANE constituye un hito en la historia de la concertación social porque por primera vez el gobierno se compromete con los agentes sociales y les reconoce como interlocutores en un plano de igualdad. Para analizar el contenido del ANE dividiremos su articulado en cuatro grandes bloques: creación de puestos de trabajo, cobertura a los parados, medidas salariales y acuerdos para la consolidación sindical. El texto definitivo del ANE formula solemnemente la siguiente declaración: "El Gobierno establecerá en virtud de este Acuerdo una política económica que haga efectivo el compromiso de mantener, al final de 1982, la misma población asalariada ocupada existente en el momento de la firma de este Acuerdo. Este compromiso supone la estimación de crear unos 350.000 nuevos puestos de trabajo al objeto de recuperar la posible caída del empleo en este periodo".

La cobertura de desempleo es el capítulo más inmediatamente satisfactorio de todo el ANE porque, a diferencia del anterior sobre el que, por razones obvias, no hay garantía de estricto cumplimiento, en éste se fijaron plazos y cantidades perfectamente delimitadas que, en líneas generales, se han ido cumplimentando puntualmente. Respecto a los crecimientos salariales de 1982, en su apartado primero se decía que "los incrementos salariales a aplicar en los convenios colectivos serán establecidos entre el 9 por cien como mínimo y el 11 por cien como máximo, de acuerdo con las condiciones que más adelante se estipulan" (que fueron prácticamente idénticas a las fijadas por el AMI con anterioridad).

Esta cláusula es, sin duda, la mayor contrapartida

cedida por los sindicatos, ya que significa una pérdida de dos puntos de salario real. Por último, y a requerimiento de CCOO y UGT se recogen en el articulado del ANE varias medidas destinadas a normalizar la intervención sindical y su reconocimiento institucional durante tanto tiempo aplazado. Asimismo se acordó regular, en primer lugar, la participación de sendas representaciones de las organizaciones firmantes (CCOO, UGT y CEOE) en el Consejo General y las Comisiones provinciales del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y, progresivamente, en "el control y gestión" de todos los organismos e instituciones de ámbito socio-laboral, desde la Junta Superior de Precios hasta la Seguridad Social, lo cual abre nuevas e importantes perspectivas a la intervención social del sindicalismo organizado.

En las elecciones sindicales de ese año la UGT logró sobrepasar por primera vez los resultados de CCOO, con un 36,71 por cien de delegados frente al 33,40 por cien de esta última, aunque Comisiones ganó en Madrid y Cataluña.

El Acuerdo Interconfederal de 1983 se negocia en la misma línea que los años anteriores con la participación de los sindicatos más representativos, CCOO y UGT, y de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. Los puntos más importantes son el establecimiento de la banda salarial con una cláusula de revisión, el cómputo anual de las jornadas laborales y prorrogar en el capítulo de los derechos sindicales los acuerdos contenidos en el ANE y el AMI.

En estos últimos años el paro se ha ido agravando paulatinamente llegando a alcanzar el 20 por cien de la población activa. En estas circunstancias el Presidente del Gobierno, Felipe González, toma la iniciativa para promover una negociación entre los sindicatos y la patronal

a fin de potenciar las inversiones que generan empleo. Las posiciones en principio maximalistas de CCOO y la patronal hacen peligrar el acuerdo. Comisiones exigía un aumento desmesurado de la inversión pública, un cierto control de la Banca, aumentar la cobertura del desempleo, rebajar la jornada laboral y la reforma del Estatuto de los Trabajadores, mientras que la CEOE exigía flexibilidad en el mercado de trabajo, la reforma de la Seguridad Social y aumentar los recursos financieros de las empresas entre otras medidas. Ante esta fuerte discrepancia CCOO se retiró del compromiso alegando que el artículo 17 permitía el despido libre, cuya validez se pretendía que fuese para los años 1985 y 86. Finalmente en octubre de 1985 se firmó el Acuerdo Económico y Social (AES) entre el gobierno, UGT y las dos patronales CEOE y CEPYME (40)

El AES recoge diversos capítulos entre los que cabe destacar: a) acuerdos de carácter fiscal que afectan a los incentivos para la inversión y al tratamiento de las rentas más bajas; b) creación de los fondos de inversión pública, conciertos con el INEM y fondos de solidaridad para el empleo; c) la regulación de los incrementos salariales de los funcionarios; d) actuaciones para elevar la tasa de cobertura del desempleo; e) reforma de la Seguridad Social; f) el compromiso de la Administración sobre contratación laboral y formación profesional; g) adaptar la legislación laboral a la normativa de la CE, etc.

El acuerdo en principio fue valorado positivamente por todos los firmantes hasta que comenzaron las interpretaciones discrepantes de algunos de sus artículos y, sobre todo, los incumplimientos que llegaron a crispar las relaciones hasta el punto de convocar algunas manifestaciones

contra las medidas del gobierno, como ocurrió a mediados de 1985 con motivo de la reforma de las pensiones. Las medidas contra el paro trataron de primar las inversiones que generasen empleo, se incentivó a las empresas que contratasen a jóvenes que accedían por primera vez al trabajo, y se financiaron programas de formación. Aun así el desempleo no bajó y en 1984 se mantenía al nivel del 20,4 por cien subiendo incluso en 1986 al 21,03, alcanzando casi a tres millones la cifra de parados, aunque ese año se elevó la tasa de cobertura hasta el 42 por cien.

La firma del AES benefició a UGT que un año después, en 1986, alcanzaba el 40,92 por cien de los delegados en las elecciones sindicales mientras CCOO se mantenía en el 34,54 por cien.

Los dos años siguientes, 1987 y 1988, no hubo acuerdo entre las partes por discrepancias respecto a la formación de los Presupuestos Generales del Estado. El sindicato socialista consideraba que habiendo pasado ya el periodo de ajuste duro, que había recaído fundamentalmente sobre las espaldas de los asalariados, había llegado el momento de recoger los frutos y exigía que los presupuestos expansionistas del Estado atendiesen mejor a los asalariados y a los pensionistas, mientras que el gobierno pensaba que una política de creación de empleo pasaba por favorecer los excedentes empresariales que a su vez fomentarían la inversión. En este marco de discusión comenzaron las discrepancias que se agudizarian a medida que la UGT se sintiese desplazada de las decisiones de política económica y social que tomaba el gobierno.

Para 1986 la CEOE pedía la modificación de la legislación referente al despido, la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, la